

Quito, 8 de septiembre de 2026

Señora abogada:

Cynthia Alexandra Jacho Tipán

**Presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la
Fiscalía General del Estado**

De mi consideración:

Yo, **INÈS MARITZA ROMERO ESTÉVEZ**, portadora de la cédula de ciudadanía No. [REDACTED] en mi calidad de postulante dentro del Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Fiscalía General del Estado, comparezco ante usted y manifiesto:

Dentro del término establecido en el artículo 50 de la Codificación del Reglamento que rige el presente concurso, y en ejercicio de mis derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a presentar pruebas, hago entrega formal de la documentación de descargo correspondiente a las ocho impugnaciones ciudadanas formuladas en mi contra por los ciudadanos:

1. Carlos Humberto López Alomia **(Fojas:1-33)**
2. Luis Edwin Cangahuamin Andrango **(Fojas: 34-97)**
3. Víctor Hugo Cañizares Mero **(Fojas:98-347)**
4. Mónica Gabriela Jaramillo Jaramillo **(Fojas:348-624)**
5. Saddim Nicolas Molina Cardona **(Fojas:625-723)**
6. Carlos Gustavo Bravo Hernández **(Fojas:724-804)**
7. Carlos Gustavo Bravo Hernández **(Fojas:805-879)**
8. Carlos Gustavo Bravo Hernández **(Fojas:880-1150)**

Las pruebas de descargo se presentan, según su naturaleza, en documentos originales, copias debidamente certificadas o notarizadas y materializaciones notariales, y se encuentran organizadas e identificadas de acuerdo con cada una de las impugnaciones a las que corresponden.

La documentación que se entrega consta de un total de 1150 fojas, incluidas las impugnaciones y sus respectivos anexos probatorios, además de los soportes digitales que se detallan en la relación adjunta.

Entre los elementos de descargo constan certificaciones emitidas por instituciones públicas competentes, actuaciones y resoluciones judiciales, constancias de investigaciones fiscales, documentos notarizados, materializaciones notariales de contenidos digitales y demás elementos pertinentes para el ejercicio pleno de mi derecho a la defensa.

Solicito que se incorporen al expediente de mi postulación las **1150 (MIL CIENTO CINCUENTA) FOJAS**, conjuntamente con sus anexos y soportes digitales.

Las notificaciones que seguiré recibiendo en el correo electrónico:

[REDACTED]

Atentamente,

[REDACTED]

Dra. Inés Maritza Romero Estévez

C.C. No.

[REDACTED]

Postulante 18 cargo de Fiscal General del Estado

Anexos: 1150 hojas + 2 USB + CD-R

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL /
Teléfono(s): 3957210

Documento No.: CPCCS-SG-2026-2338-EX

Fecha: 2026-09-08 14:56:59 GMT -05

Recibido por: Mario Andres Gutierrez Avalos

Para verificar el estado de su documento ingrese a:

<https://www.gestiondocumental.gob.ec>

con el usuario: 1712577301

Oficio No. CPCCS-CCS-IMPUGNACIÓN-IMRE-007-2026

Asunto: Contestación a la impugnación ciudadana presentada por el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández.

Señora abogada:

Cynthia Alexandra Jacho Tipán

Presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado

En su despacho.-

Señor abogado:

David Eduardo Flores Brandt

Vicepresidente de la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado

En su despacho.-

Señora abogada:

Ericka Katherine Aguaguiña Moposita

Comisionada Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado

En su despacho.-

Señor abogado:

Christian Santiago Arpi Tapia

Comisionado Ciudadano de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado

En su despacho.-

Señora abogada:

Zoila Amada Echeverría Zambrano

Comisionada Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado

En su despacho.-

Señora abogada:

Pamela Teresa Garay Mateo

Comisionada Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado

En su despacho.-

Señor abogado:

Hugo Vicente Ludeña Eras

Comisionado Ciudadano de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado

En su despacho.-

Señora abogada:

Maribel Rocío Baldeón Andrade

Comisionada Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado

En su despacho. -

Señor abogado:

David Eduardo Soria Tamayo

Secretario de la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado

En su despacho.-

De mi consideración:

Mediante escrito s/n, presentado el 31 de julio de 2026 ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández formuló una solicitud de impugnación ciudadana en contra de la suscrita, en mi calidad de postulante al cargo de primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. En la parte pertinente de dicha solicitud, se señala lo siguiente:

“4.1 DESCRIPCIÓN CLARA DE LA IMPUGNACIÓN Y FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO QUE DETERMINE QUE EL POSTULANTE SE ENCUENTRA INMERSO EN LAS CAUSALES DE IMPUGNACIÓN

(...) Dentro de la causa No. 17283-2025-01455, le solicité a la parte impugnada que al amparo del artículo 572 numeral 8 del COIP se excusase de conocer la causa, en razón de nuestra enemistad manifiesta y la jueza se excusó en derecho.

La enemistad manifiesta nace por cuanto la parte impugnada me inició denuncias penales luego de que le gané la impugnación en el concurso que designaba la primera autoridad de la Defensoría Pública en la que ella fue postulante y la descalificaron por mi impugnación.

Como ya se excusó en una causa, la parte impugnada debe en derecho excusarse de conocer y resolver cualquier causa en la que sea abogado de cualquiera de las partes procesales o abogado de alguna parte procesal o sujeto procesal.

Por lo anterior, dentro de la causa No. 17203-2024-00524, le solicité lo mismo, que se excusase de conocer y resolver una recusación por la enemistad manifiesta que tenemos y lo hice al amparo del artículo 22 numeral 11 del COGEP (...), y a pesar de que por ley debía excusarse de conocer y resolver el proceso de recusación no lo hizo, yéndose contra norma expresa.

Lo grave es que se excusó en un primer proceso y en un segundo no lo hizo; yo no entendía porque razón se excusaba en uno y en otro no por lo que me puse a indagar y observé que dentro del proceso 17203-2024-00524, la jueza ponente doctora Pacheco y doctor Navarrete tenían ya un proyecto de Resolución y la parte impugnada les indicó que iba a realizar un voto salvado pero luego de correos electrónicos institucionales del tribunal conformado por los doctores Pacheco, Navarrete y Romero parte impugnada se desprende que la doctora



Romero estaba sugiriendo a los doctores Pacheco y Navarrete cambiar de criterio lo que demostraría intereses ocultos en el proceso por parte de la jueza Romero.

Y lo digo por dos situaciones puntuales; la primera es que no se excusó de conocer la causa que yo patrocinaba debiendo por ley hacerlo y no se excusó porque al parecer de los correos electrónicos institucionales que se enviaban los miembros del Tribunal se entendería que la doctora Romero tendría intereses en la causa, por eso no se excusó.

Pero no solo que no se excusó de conocer y resolver el proceso de recusación, sino que en la Resolución de recusación la parte impugnada ordenó a la fiscalía que se me inicien varias investigaciones penales y ofició al Consejo de la Judicatura para que me sancionen.

Por las consideraciones expuestas, la jueza y parte impugnada en esta causa, se excusa de conocer una causas (sic) en las que yo intervengo y en otras cambia de criterio, y el interés que tenía en la causa demuestra por cuanto luego de no excusarse, levantó la sentencia venida en grado y concedió sentencia favorable para la accionante, es decir, hizo lo que sugirió a los otros dos miembros del tribunal, lo que demuestra no solo una falta de probidad para ser Fiscal General sino también una falta de probidad para ser jueza”.

En apego de lo determinado en el artículo 50 de la Codificación del Reglamento para el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, contenido en la Resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social No. CPCCS-PLE-SG-011-E-2025-0189, de 27 de junio de 2025, presento ante la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado la respuesta motivada a la impugnación ciudadana presentada por el ciudadano ecuatoriano, Carlos Gustavo Bravo Hernández, titular de la cédula de ciudadanía No. [REDACTED]

1. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES PROCESALES ENTRE LA DOCTORA INÉS MARITZA ROMERO ESTÉVEZ Y EL ABOGADO CARLOS GUSTAVO BRAVO HERNÁNDEZ, EN EL MARCO DE PROCESOS JUDICIALES Y DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE MÁXIMAS AUTORIDADES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR

Es preciso poner en conocimiento de la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado una serie de antecedentes objetivos y verificables que preceden a la presente impugnación y que permiten comprender el contexto dentro del cual el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández formula nuevamente cuestionamientos en contra de la suscrita postulante.

En el marco del proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, la suscrita alcanzó la posición correspondiente al mayor puntaje luego de la renuncia del primer postulante, el abogado Rodrigo Daniel Frías Toral, y de la posterior descalificación de los abogados Byron Javier Guillén Zambrano y Jorge



Cristóbal Ballesteros Ballesteros, quienes se encontraron ubicados entre los postulantes mejores puntuados.

Dentro de aquel concurso público, el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández presentó una impugnación en mi contra, circunstancia que constituye un antecedente directo de la relación procesal existente entre el hoy impugnante y la suscrita. Posteriormente, mediante Resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social No. CPCCS-PLE-SG-028-E-2024-0236, de 05 de junio de 2024, se resolvió mi descalificación de dicho procedimiento.

Frente a determinadas actuaciones y documentación incorporadas dentro de aquel proceso, el 13 de septiembre de 2024 presente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso, tipificado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal, al considerar que dentro del procedimiento referido se habría utilizado documentación respecto de la cual existían serios cuestionamientos sobre su autenticidad y contenido.

Dicha denuncia dio lugar a la investigación penal No. 170101824092341 que, conforme a la información disponible, se encuentra actualmente en trámite. Este antecedente debe ser considerado únicamente en cuanto demuestre que, con anterioridad al presente concurso, ya existía una controversia jurídica concreta entre la suscrita y el hoy impugnante, sin que corresponda a esta Comisión anticipar criterio alguno respecto de la eventual existencia de responsabilidad penal.

A este antecedente se suma otro hecho de especial relevancia ocurrido dentro del proceso judicial No. 17203-2024-00524, en el cual la suscrita, conjuntamente con el doctor Marco Patricio Navarrete Sotomayor, en calidad de jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, resolvimos, mediante auto de 24 de diciembre de 2025, entre otros aspectos, lo siguiente:

“QUINTO: DISPONER SE OFICIE A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, remitiendo copia certificada de esta sentencia y de las actuaciones pertinentes, para que inicie investigación penal por los hechos que encuadran, prima facie, en los presuntos delitos de: 1. Revelación ilegal de datos personales (art. 230.1 COIP); 2. Fraude procesal (Art. 272 COIP); 3. Obstrucción de la justicia (art. 270 COIP). SEXTO: DISPONER SE OFICIE AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, para que investigue la conducta disciplinaria de: 1. La jueza recusada, por los hechos descritos; y, 2. El abogado de la parte demandada, por deslealtad procesal, violación al COFJ y al COGEP. Sin costas que regular (...).”

Esta decisión jurisdiccional reviste particular importancia para la presente impugnación, puesto que no se limitó a formular observaciones de carácter procesal, sino que dispuso expresamente que se remitieron los antecedentes pertinentes a dos autoridades distintas, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia: a la Fiscalía General del Estado, para la investigación de posibles infracciones penales; y al Consejo de la Judicatura, para el análisis de posibles responsabilidades disciplinarias.

En cumplimiento de lo dispuesto jurisdiccionalmente, se remitieron los antecedentes correspondientes a la Fiscalía General del Estado. Como consecuencia de dicha remisión,



el doctor Carlos Leonardo Alarcón, Fiscal General del Estado, inició la indagación previa No. 170101826011667 destinada a investigar hechos relacionados con una posible obstrucción de la justicia y revelación ilegal de datos personales.

Los hechos que dieron lugar a dicha investigación guardan relación con la exposición, dentro de una audiencia judicial, de documentos e información de carácter personal pertenecientes a dos jueces, sin que existiera autorización para su divulgación. Entre las personas cuyas actuaciones son objeto de investigación consta el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández.

5

Es importante destacar que la actuación de la suscrita dentro de aquel proceso se limitó estrictamente al ejercicio de la función jurisdiccional. Fue el Tribunal, en atención a los hechos advertidos dentro de la causa y al contenido de las actuaciones procesales puestas en su conocimiento, el que demostró jurídicamente necesario remitir los antecedentes a la Fiscalía General del Estado para que sea dicha institución, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, la que investigue y determine si existe o no responsabilidad penal.

Por tanto, no se trata de una denuncia personal formulada posteriormente por la suscrita en contra del abogado Bravo Hernández como consecuencia de una discrepancia particular, sino de una decisión adoptada en ejercicio de potestad jurisdiccional, conjuntamente con otro magistrado, mediante la cual se puso en conocimiento de la autoridad competente hechos que, prima facie, podrían tener relevancia penal.

Paralelamente, en lo concerniente al ámbito disciplinario, conforme consta en el oficio No. 02401-DP17-2026-GI, de 03 de agosto de 2026, suscrito por la abogada Gisela Ibijes Chamorro, Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, se informó que, teniendo como antecedente los hechos puestos en conocimiento mediante la decisión judicial antes referida, por auto de 13 de abril de 2026, a las 15h52, se dispuso la apertura del sumario disciplinario No. 17001-2026-0083 en contra del abogado Carlos Bravo Hernández.

Así, respecto de un mismo contexto procesal previo a la presente impugnación, existen actuaciones iniciadas tanto en el ámbito penal como en el disciplinario, como consecuencia de hechos puestos en conocimiento de las autoridades competentes mediante una resolución jurisdiccional emitida por la mayoría del Tribunal del cual formado parte la suscrita.

Debe enfatizarse que la referencia a estos antecedentes no tiene por finalidad anticipar un juicio de responsabilidad respecto del abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández, pues corresponderá exclusivamente a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura determinar lo que en Derecho corresponde dentro de los procedimientos respectivos.

Su relevancia para la presente impugnación es distinta: evidencia la existencia de antecedentes procesales objetivos, previos y directamente relacionados con el hoy impugnante y con actuaciones jurisdiccionales de la suscrita, circunstancia que necesariamente debe ser considerada por esta Comisión al momento de valorar el contexto en que se presentan los actuales cuestionamientos, pues existe un claro conflicto de interés del abogado hacia la postulante.



En efecto, aproximadamente tres meses después de la apertura del sumario disciplinario No. 17001-2026-0083, y encontrándose además en curso una investigación penal derivada de hechos puestos en conocimiento de Fiscalía por decisión del Tribunal integrado por la suscrita y el doctor Marco Patricio Navarrete Sotomayor, el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández presenta nuevas impugnaciones en mi contra dentro del concurso para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

6

La cercanía temporal entre dichos acontecimientos, sumada a los antecedentes derivados del concurso para la selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública y a las actuaciones judiciales anteriormente descritas, constituye un elemento objetivo que permite advertir la existencia de una relación procesal previa y potencialmente conflictiva entre el impugnante y la suscrita.

Esta circunstancia no implica desconocer ni restringir el derecho constitucional del abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández a ejercer mecanismos de participación y control social. Sin embargo, el ejercicio de ese derecho tampoco impide que la Comisión valore, al resolver, la existencia de antecedentes que puedan incidir en la objetividad de las afirmaciones formuladas por el impugnante, especialmente cuando aquellas se sustentan en apreciaciones subjetivas, publicaciones de terceros, interpretaciones sobre actuaciones jurisdiccionales o hechos respecto de los cuales no existe una declaración de responsabilidad emitida por autoridad competente.

En este sentido, la existencia de investigaciones y actuaciones disciplinarias previas constituye un elemento de contexto particularmente relevante al analizar si los cuestionamientos formulados por el impugnante responden a hechos objetivos capaces de configurar la causal de falta de probidad o idoneidad prevista en el numeral 2 del artículo 46 del Reglamento, o si, por el contrario, constituyen la prolongación de controversias procesales anteriores trasladadas ahora al ámbito del presente concurso.

Por ello, solicito a la Comisión Ciudadana de Selección que, al momento de valorar la presente impugnación, considere integralmente estos antecedentes y analice con especial rigor la pertinencia, suficiencia, objetividad y fuerza probatoria de los elementos aportados por el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández, evitando que controversias originadas en actuaciones jurisdiccionales previas sean utilizadas para atribuir a la suscrita una supuesta falta de probidad o idoneidad que debe ser demostrada de manera objetiva y conforme a las causales expresamente establecidas en el Reglamento. Además se tome en consideración la animadversión y el hostigamiento en mi contra por parte del impugnante, previo a emitir cualquier resolución dentro de la presente impugnación ciudadana.

2. PREÁMBULO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN PARA ANALIZAR, VALORAR O PRONUNCIARSE SOBRE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR SERVIDORES JURISDICCIONALES

Señoras y señores miembros de la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Me permito advertir a ustedes que el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández, a través de la impugnación ciudadana presentada en



mi contra, pretende que se transgreda de manera absoluta el principio de independencia de la Función Judicial, garantizado en el artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador, disposición que, en lo pertinente, señala:

“Art. 168.- [Principios]. - La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios:

1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.

3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución.”.

En concordancia con lo expuesto, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que:

“Art. 226.- [Ejercicio de competencias y facultades]. - Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”.

Tampoco puedo dejar de mencionar lo preceptuado en el artículo 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, norma de especial relevancia para las y los servidores de la Función Judicial del Ecuador, que textualmente establece:

“Art. 8.- Principio de Independencia. - Las juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla, son independientes incluso frente a los demás órganos de la Función Judicial.

Ninguna función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los deberes y atribuciones de la Función Judicial.

Toda violación a este Principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y/o penal, de acuerdo con la ley”. El énfasis me pertenece.

En este punto, es necesario precisar que los órganos administrativos del Estado carecen de competencia para revisar, modificar, sustituir o efectuar una valoración propia respecto de las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales en ejercicio de su potestad jurisdiccional, pues aquello supondría una interferencia directa en la independencia judicial y una invasión de competencias que, constitucionalmente, corresponden a la Función Judicial.

En este sentido, la actuación del impugnante resulta improcedente, pues pretende que esta Comisión valore como una supuesta irregularidad el hecho de que, según afirma, esta juzgadora, integrante de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y



Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, no se habría excusado del conocimiento y resolución de la causa judicial No. 17203-2024-00524. A criterio del impugnante, dicha circunstancia afectaría mi probidad, tanto en mi calidad de jueza como de postulante al cargo de Fiscal General del Estado.

Para sustentar su afirmación, el impugnante invoca la existencia de una supuesta enemistad manifiesta, que, según sostiene, habría surgido a raíz de la denuncia formal que presenté en su contra por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso, en el marco del proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. Tal argumento carece de sustento jurídico, pues parte de una premisa equivocada: la sola presentación de una denuncia, cualquiera que sea su naturaleza, no configura, por sí misma, la existencia de una enemistad manifiesta entre quien la formula y la persona denunciada.

Esta conclusión resulta aún más evidente si se considera que el impugnante es abogado y, por tanto, conoce o debería conocer que el ejercicio del derecho de acción y la presentación de una denuncia ante las autoridades competentes constituyen mecanismos legítimos previstos por el ordenamiento jurídico y no pueden ser interpretados, de manera automática, como manifestaciones de enemistad manifiesta ni como circunstancias capaces de comprometer, por sí solas, la probidad o imparcialidad de una juzgadora.

Sin embargo, lo que pretende el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández es que ustedes, señoras y señores comisionados, se atribuyan una competencia que no les ha sido conferida por la Constitución ni por la ley y procedan a valorar la procedencia o improcedencia de la excusa que, según sostiene el impugnante, debí presentar en mi calidad de juzgadora dentro de las actuaciones judiciales correspondientes a la causa No. 17203-2024-00524.

Este particular ya fue conocido y resuelto conforme a derecho en la vía jurisdiccional por los respectivos jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quienes, en ejercicio de sus competencias, conocieron la referida causa y resolvieron lo pertinente. **En consecuencia, por respeto a las decisiones jurisdiccionales emitidas por autoridad competente y a los efectos jurídicos que de ellas se derivan, no emitiré pronunciamiento alguno sobre tales actuaciones dentro de la presente impugnación de carácter administrativo.**

Cualquier cuestionamiento respecto de la procedencia o improcedencia de la excusa, así como de las actuaciones y decisiones adoptadas dentro de la referida causa judicial, únicamente puede ser revisadas por los órganos jurisdiccionales y a través de los mecanismos procesales previstos en el ordenamiento jurídico. Para el caso que nos ocupa, la revisión en sede de alzada correspondería a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

De igual manera, si lo que el impugnante pretende cuestionar es la eventual existencia de una infracción de carácter administrativo o disciplinario derivada de la actuación de una servidora judicial, dicha materia tampoco corresponde ser conocida por esta Comisión, sino que debe ser sustanciada, de ser jurídicamente procedente, ante el Consejo de la



Judicatura, a través del régimen disciplinario y conforme al procedimiento establecido en la Constitución y la ley.

3. Inexistencia de declaración jurisdiccional previa de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable respecto de la actuación de la magistrada Inés Maritza Romero Estévez dentro de la causa judicial No. 17203-2024-00524

Conforme consta en la certificación de 5 de mayo de 2026, incorporada en el Oficio No. 1902-SSPPMPPTCyCO-CNJ-2026 y suscrita por el doctor Carlos Rodríguez García, Secretario Relator de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, en relación con mi actuación como magistrada de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, se certifica expresamente lo siguiente:

“(...) me permito informar que, de acuerdo a los registros físicos y digitales de esta Sala, la señora doctora Inés Maritza Romero Estévez, Jueza de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, no registra ninguna Declaración Jurisdiccional Previa por dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable en su contra”. El énfasis me pertenece.

En atención a la referida certificación, cabe precisar que mi juez natural en el ámbito jurisdiccional, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley, es la Corte Nacional de Justicia, órgano competente para conocer, revisar y pronunciarse respecto de las actuaciones venidas en grado. En este sentido, dicho órgano jurisdiccional no ha emitido ningún tipo de declaratoria jurisdiccional en mi contra, ni siquiera dentro de la causa No. 17203-2024-00524, en la que el impugnante pretende atribuirme una supuesta falta de excusa para su conocimiento y resolución.

Con ello, queda evidenciado que no existe pronunciamiento jurisdiccional alguno que haya determinado que mi actuación dentro de la referida causa haya sido contraria a la Constitución o a la ley.

4. Inexistencia de sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo de la Judicatura respecto de la actuación de la magistrada Inés Maritza Romero Estévez dentro de la causa judicial No. 17203-2024-00524

Al respecto, es preciso señalar que, con el propósito de desvirtuar en derecho las alegaciones formuladas por el impugnante, mediante oficio No. CERT-002-CPP-IMRE-2026, de 14 de agosto de 2026, requerí al Secretario de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que se sirviera certificar e informar lo siguiente:

“(...) se sirva certificar sí, dentro de la causa judicial No. 17203-2024-00524, el ciudadano Carlos Gustavo Bravo Hernández tiene la calidad de parte procesal.

Así mismo, sírvase certificar el estado procesal en que se encuentra la referida causa judicial y si, a la fecha, alguna de las partes procesales ha presentado una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador. De ser el caso, sírvase informar la fecha en la que dicha acción fue presentada y



el estado en el que se encuentra; y, de no haberse presentado, sirvase certificar si las partes procesales aún se encuentran dentro del término previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para ejercer dicha acción”.

En atención a lo requerido, mediante oficio No. SEPPMPMPPTCPJP-OT, de 14 de agosto de 2026, el abogado Milton Omar Tapia Reinoso, Secretario del Tribunal Quinto de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, emitió la correspondiente certificación, en la que señala expresamente lo siguiente:

10

“PRIMERO. - *El señor Carlos Gustavo Bravo Hernández no ostenta la calidad de parte procesal – ni como accionante ni como accionado- dentro de la causa No. 17203-2024-00524 (...)*

SEGUNDO. – *La causa se encuentra actualmente en estado de resolver el recurso de aclaración y ampliación interpuesto por el abogado Nicolás Camilo López Laspina, procurador judicial de la parte accionante, al amparo del artículo 94 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), respecto de la sentencia de mayoría dictada el 24 de julio de 2026 y notificada el 27 de julio de 2026. El referido recurso se encuentra pendiente de despacho, por lo que la sentencia en mención no se encuentra ejecutoriada.*

TERCERO. - *No consta a la presente fecha que alguna de las partes procesales haya presentado acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador en relación con la sentencia dictada dentro de esta causa. En cuanto al término previsto para el ejercicio de dicha acción, se certifica que el término de veinte días establecido en el artículo 60 de la LOGJCC no ha iniciado su decurso, en atención a lo dispuesto en el artículo 255 del Código Orgánico General de Procesos, norma de aplicación supletoria (...)*”.

De lo antes expuesto se desprenden dos situaciones particularmente relevantes.

La primera guarda relación con el hecho de que el ciudadano y hoy impugnante, Carlos Gustavo Bravo Hernández, no es parte procesal dentro de la causa No. 17203-2024-00524. En este contexto, resulta llamativo que afirme conocer la existencia de supuestos correos electrónicos mediante los cuales la suscrita juzgadora habría intentado modificar una decisión adoptada por el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que conoció y resolvió la causa en referencia.

Se trata de una afirmación de particular gravedad que, de ser cierta, habría ameritado la correspondiente denuncia ante las instancias competentes por parte del hoy impugnante, de conformidad con lo que dispone la Constitución y la ley, a fin de que, se investiguen los hechos, se determine la verdad de lo ocurrido y, de ser el caso, se establezcan las responsabilidades correspondientes. En tal virtud, cabe preguntarse: ¿por qué el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández, si tenía conocimiento de tales hechos, no acudió oportunamente ante las autoridades competentes y presentó las denuncias correspondientes, tanto en el ámbito penal como en el administrativo?



La segunda situación se relaciona con las actuaciones judiciales desarrolladas dentro de la causa No. 17203-2024-00524. Como se desprende de la certificación emitida por el Secretario del Tribunal Quinto de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a la fecha la causa se encuentra en trámite ante la presentación de un recurso de aclaración, sin que se ejecute la sentencia dictada.

Asimismo, de la información certificada no se desprende la existencia, hasta la presente fecha, de una denuncia formal presentada por las partes procesales respecto de las actuaciones de la suscrita juzgadora dentro de la referida causa.

11

Por otro lado, con la finalidad de demostrar que mis actuaciones jurisdiccionales se han desarrollado y continuarán desarrollándose dentro del estricto marco de la Constitución, la ley, mediante oficio No. CD-CJP-IMRE-004-2026, de 14 de agosto de 2026, requerí a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, ámbito disciplinario, que se sirviera certificar lo siguiente:

“(...) la emisión de una certificación clara y precisa en la que se haga constar si el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández, titular de la cédula de ciudadanía No. 1722161823 ha presentado denuncia disciplinaria por mis actuaciones jurisdiccionales dentro de la causa judicial No. 17203-2024-00524; y, de ser el caso, certificar el estado procesal en el que esta se encuentra”.

Del mismo modo, mediante Oficio No. CD-CJP-IMRE-002-2026, de 14 de agosto de 2026, requerí a la misma Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, en el ámbito disciplinario, que se sirviera certificar e informar lo siguiente:

“(...) se sirva certificar si el Consejo de la Judicatura ha sancionado disciplinariamente a la suscrita Jueza de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha desde la fecha de mi nombramiento en el año 2014 hasta la presente fecha”.

En atención al primer requerimiento, mediante certificación de 18 de agosto de 2026, la abogada Emily Yobaska Carlosama Madera, Secretaria ad hoc de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, en el ámbito disciplinario, certificó lo siguiente:

“(...) una vez revisado el sistema SATJE de Quejas de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha en el Ámbito Disciplinario, así como la matriz general de ingresos, no se verifica que existan denuncias presentadas por el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández en contra de la doctora Inés Maritza Romero Estévez, por la causa judicial 17203-2024-00524”.

Respecto del segundo requerimiento formulado mediante Oficio No. CD-CJP-IMRE-002-2026, de 14 de agosto de 2026, la abogada Emily Yobaska Carlosama Madera, Secretaria ad hoc de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, en el ámbito disciplinario, mediante certificación de 18 de agosto de 2026, certificó lo siguiente:

“En atención a la solicitud realizada y una vez revisado el sistema SATJE de Quejas de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pichincha en el ámbito



*Disciplinario, se desprende que **ROMERO ESTEVEZ INES MARITZA**, NO registra sanciones administrativas impuestas por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha en el Ámbito Disciplinario, hasta la emisión de esta certificación”.*

En concordancia con el documento anteriormente referido, en la certificación conferida el 17 de agosto de 2026 por la magíster María José Moncayo Villavicencio, Secretaria Encargada de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, se certifica lo siguiente:

12

“(…) revisada la información de los archivos del sistema de registro computarizado y del Sistema Automático de Trámite Judicial de esta Subdirección, no constan sanciones impuestas por la Dirección General y el Pleno del Consejo de la Judicatura en contra de la DOCTORA INÉS MARITZA ROMERO ESTÉVEZ”.

Tal como lo acredité oportunamente al presentar mi expediente de postulación dentro del proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, en donde incorporé dos certificaciones: la primera, emitida por el Consejo de la Judicatura el 13 de febrero de 2026; y, la segunda, emitida por la Fiscalía General del Estado el 26 de septiembre de 2018. Ambas certificaciones, conjuntamente con aquellas que ahora incorporo al presente escrito, demuestran de manera objetiva, inequívoca y documentada que, durante mis casi tres décadas de trayectoria como servidora judicial, jamás he sido sancionada disciplinariamente por mis actuaciones en el ejercicio de los distintos cargos que he desempeñado.

Esta trayectoria, respaldada por certificaciones expedidas por las autoridades competentes, constituye un elemento objetivo e irrefutable para valorar mi conducta profesional y mi probidad, principios que han caracterizado mi desempeño a lo largo de mi carrera judicial. En consecuencia, las afirmaciones formuladas por el impugnante Carlos Gustavo Bravo Hernández, mediante las cuales pretende cuestionar mi actuación profesional, carecen de sustento en antecedente disciplinario alguno y se contraponen a la realidad objetiva conforme ha quedado aquí demostrado.

La determinación de si en una causa concreta correspondía o no que una jueza se excuse forma parte del ejercicio de la función jurisdiccional y exige valorar la concurrencia de una causal legal dentro de un proceso específico. Esa valoración corresponde a los órganos competentes del sistema de justicia y se encuentra sujeta a los mecanismos procesales y disciplinarios previstos por el ordenamiento jurídico.

La Comisión Ciudadana de Selección puede valorar los requisitos y causales del concurso, pero no puede sustituir a los órganos jurisdiccionales ni disciplinarios para determinar, por sí misma, que una decisión adoptada dentro de una causa judicial constituyó una actuación incorrecta, dolosa, manifiestamente negligente o incompatible con la imparcialidad.

5. Documentación probatoria:



Ante la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, presento, como prueba a mi favor, la siguiente documentación, cuya práctica tendrá lugar en la respectiva audiencia pública:

1. Copia certificada de la denuncia penal No. 170101824092341, presentada por la suscrita postulante al cargo de primera autoridad de la Fiscalía General del Estado en contra del abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández dentro del proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública.
2. Copia notariada de la denuncia penal No. 170101826011667, dispuesta por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en contra de la jueza Juana Narcisa Pacheco Cabrera, cuyo abogado defensor es el abogado Carlos Bravo Hernández.
3. Copia certificada del auto dictado el 24 de diciembre de 2025, a las 09:11, dentro de la causa judicial No. 17203-2024-00524.
4. Copia notariada del Oficio No. 02401-DP17-2026-GI, de 3 de agosto de 2026, suscrito por la abogada Gisela Ibujés Chamorro, Directora provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, en el ámbito disciplinario.
5. Copia certificada del auto dictado por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, en el ámbito disciplinario, dentro del procedimiento seguido en contra del abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández el 13 de abril de 2026.
6. Copia certificada del certificado expedido por la Subdirección de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura el 13 de febrero de 2026.
7. Copia certificada del oficio No. FGE-DTH-2018-005219-O, de 26 de septiembre de 2018, emitido por la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado.
8. Original del oficio No. CER-002-CPP-IMRE-2026, de 14 de agosto de 2026.
9. Original del oficio No. SEPPMPPTCJP-OT, de 14 de agosto de 2026.
10. Original del oficio No. CD-CJP-IMRE-004-2026, de 14 de agosto de 2026.
11. Copia certificada del oficio No. CD-CJP-IMRE-002-2026, de 14 de agosto de 2026.
12. Copia certificada de la certificación expedida por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, ámbito disciplinario el 18 de agosto de 2026 en respuesta al oficio No. CD-CJP-IMRE-004-2026.
13. Copia certificada del oficio No. 1902-SSPPMPPTCyCO-CNJ-2026, de 05 de mayo de 2026, expedido por la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia.
14. Copia certificada de la certificación expedida por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, ámbito disciplinario, el 18 de agosto de 2026.
15. Copia certificada de la certificación expedida por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, de 17 de agosto de 2026.

6. Petición concreta

Por las consideraciones expuestas, así como con fundamento en las pruebas que adjunto a la presente contestación y que serán practicadas en la respectiva audiencia pública, solicito comedidamente que se desestime y archive la solicitud de impugnación ciudadana



- 818 -
ochocientos
dieciocho.

presentada por Carlos Gustavo Bravo Hernández, dentro del proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, por cuanto los hechos y afirmaciones en ella contenidos no corresponden a la verdad y evidencian actuaciones contrarias al principio de lealtad procesal que debe observar todo abogado en libre ejercicio profesional.

Notificaciones respecto al presente escrito las recibiré en la cuenta de correo electrónico:

[Redacted]

Atentamente,

[Redacted]

Dra. Inés Maritza Romero Estevez

Postulante al cargo de Fiscal General del Estado





Factura: 002-002-000112651



20261701065C02680

0000 · 0001

- 819 -

ochocientos
diecinueve

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20261701065C02680

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento DENUNCIA NO. 170101824092341 que me fue exhibido en 9 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 9 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 25 DE AGOSTO DEL 2026, (10:07).



NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA ESCOBAR MONTENEGRO

NOTARÍA SEXAGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 06635-DP17-2026-SE

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. Next, it is essential to gather relevant information and data. This can be done through research, consultation with experts, or by analyzing existing resources.

3. Once the information is gathered, the next step is to analyze it and identify the key factors that influence the outcome. This often involves breaking down the problem into smaller, more manageable parts.

4. After analysis, a plan or strategy should be developed. This plan should outline the steps that need to be taken to solve the problem or answer the question.

5. The final step is to implement the plan and monitor the progress. This involves carrying out the tasks outlined in the plan and making adjustments as needed based on the results.



DENUNCIA No.170101824092341		
Origen del incidente: DENUNCIA FORMAL - ESCRITA		
Tipo de infraccion: FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTO FALSO		
NO FLAGRANTE	CONSUMADO	
LUGAR Y FECHA DEL INCIDENTE		
Fecha del incidente: 2024-05-29	Hora del incidente: 09:02:00	Parroquia: SAN JUAN
Direccion: SANTA PRISCA Y VARGAS ; CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL		
DATOS DEL DENUNCIANTE		
DENUNCIANTE: ROMERO ESTEVEZ INES MARITZA	C.I. / RUC: 1712*****	Celular: *****9737
Relato de los hechos:		
RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia (s) que antecede (n), que me fue (ron) presentadas en <u>01</u> hoja(s) útil(es), es (son) FIEL COMPULSA del documento presentado ante mí, Notario Sexagesima Quinta del Canton Quito 20171701065D.		
 25 AGO 2026 <i>Ab. María Augusta Escobar Montenegro</i> NOTARIA SEXAGESIMA QUINTA SUPLENTE DEL CANTON QUITO		
Involucrados:		
1.- ROMERO ESTEVEZ INES MARITZA (DENUNCIANTE), 2.- BRAVO HERNANDEZ CARLOS GUSTAVO (SOSPECHOSO).		
Bienes:		
RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) que me fue (ron) presentadas en <u>01</u> hoja(s) útil(es), es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí, 20171701065D.		
Vehiculos:		
 18 AGO 2026 <i>Dr. Pedro Castro Falconi</i> NOTARIO SEXAGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO		
FISCALIA ASIGNADA		
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Edificio: NORTE - 9 DE OCTUBRE	Fiscalia Especializada: - FISCALIA DE FE PUBLICA - FISCALIA 4	
Firma: _____ ROMERO ESTEVEZ INES MARITZA DENUNCIANTE	Firma: _____ RIOS GORDILLO CECILIA DEL PILAR RECEPTOR	

PRIMA EN BLANCO

SEÑORES FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Yo, Inés Maritza Romero Estévez, titular de la cédula de identidad [REDACTED] mayor de edad, Doctora en Jurisprudencia y Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, comparezco respetuosamente ante su autoridad en mi calidad de ciudadana ecuatoriana para presentar la siguiente denuncia penal. Es fundamental que los hechos denunciados sean investigados con la máxima diligencia, no solo para hacer justicia en este caso en particular, sino también para reafirmar la confianza en el sistema legal y garantizar que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

DATOS DEL DENUNCIANTE.- Mis nombres, apellidos y generales de ley constan en el encabezado de la presente denuncia.

DATOS DEL DENUNCIADO.- Presento esta denuncia penal en contra del ciudadano ecuatoriano, abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández, titular de la cédula de identidad No. [REDACTED] matrícula profesional del Foro de Abogados [REDACTED]

SOBRE LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO.-

Señor/a Fiscal:

Según la Resolución No. CCS-DPE-005-2024, emitida el 19 de febrero de 2024 por la Comisión Ciudadana de Selección para la primera autoridad de la Defensoría Pública, la denunciante, en calidad de postulante al cargo de Defensor Público del Ecuador, obtuvo un puntaje total de 77.86 sobre 100. Resultado que me posicionó como la cuarta mejor puntuada en el concurso público de méritos y oposición organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Defensoría Pública mediante Concurso de Oposición y Méritos con Veeduría e Impugnación Ciudadana, una vez concluida la fase de oposición, la ciudadanía tenía la facultad de presentar impugnaciones contra los postulantes mencionados en la resolución de la Comisión Ciudadana de Selección. Para asegurar la transparencia y equidad del proceso, era imprescindible que dichas impugnaciones cumplieran estrictamente con los requisitos establecidos en los artículos 54 y 55 del Reglamento. De no ser así, las impugnaciones serían descalificadas y archivadas, garantizando que solo los reclamos válidos y fundamentados influyeran en la selección final de la referida autoridad del poder público.

Mediante un escrito sin número y fecha, recibido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 2 de abril de 2024, el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández presentó una impugnación ciudadana en mi contra, argumentando que carezco de la probidad necesaria para ocupar el cargo de primera autoridad de la Defensoría Pública del Ecuador. Según el denunciado, esta supuesta falta de probidad se basa en mis actuaciones como Juez Penal de la Corte Provincial de Justicia de

Pichincha, conforme a un informe final de la Mesa por la Verdad y la Justicia, "Perseguidos Políticos. Nunca Más", presuntamente emitido desde la Vocalía 3 del Consejo de la Judicatura de Transición en diciembre de 2018.

En su escrito de impugnación, el denunciado presentó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social información intencionadamente mutilada de las páginas 204, 211, 215, 218, 222, 223, 224 y 225 del mencionado informe, con el propósito de tergiversar los hechos y cuestionar mi supuesta falta de probidad notoria. Esta manipulación no solo atenta contra mi integridad profesional, sino que también constituye una violación de los principios de veracidad y lealtad procesal previstos en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual sanciona la falsificación y manipulación de documentos públicos y privados. A continuación, demuestro cómo se mutiló la información para sustentar acusaciones infundadas.

8, 222 225
Consejo de Participación

NOTARIA SEXAGSIMA QUINTA DELANTÓN QUITO
65
*

[illegible]

0000 0005 -823-

ochocientos
veintitrés.

[illegible]

[illegible]

-826 -
0008
ochocientos
veintiséis.

De igual manera, en su impugnación ciudadana, el denunciado afirmó y notificó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que en las páginas 125 a 128 del mencionado informe se describen actuaciones de la denunciante en su calidad de Juez Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Según el denunciado, estas actuaciones habrían resultado en la pérdida de empleo y en la imposición de sentencias sin pruebas lícitas para Fausto Alejandro Cevallos Tamayo, Danny Alexis Naranjo y Freddy Estalin Revelo Bermeo y Daniel Patricio Gutiérrez.

Sin embargo, las aseveraciones del denunciado no corresponden a la verdad material ni a la ideológica reflejada en las páginas 123 a 128 del informe. Esto podría constituir una falsificación ideológica con la intención de engañar a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el objetivo de lograr mi descalificación ilegítima del proceso de selección para la primera autoridad de la Defensoría Pública. Dicha conducta, además de ser contraria a la ética profesional, contraviene lo dispuesto en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la falsificación ideológica en documentos públicos o privados. Este intento deliberado de tergiversar la verdad y manipular el proceso es completamente inaceptable, especialmente considerando que el denunciado, como jurista, tiene la responsabilidad de buscar y defender la verdad en todo momento.

Finalmente, como resultado de la impugnación presentada por el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández en el proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública del Ecuador, basada en una presunta falsificación de documento público, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-028-E-2024-0236, emitida el 5 de junio de 2024, resolvió descalificarme de manera arbitraria e injusta del concurso de méritos y oposición. Esta descalificación no solo se fundamentó en acusaciones infundadas, sino que también contravino los principios de transparencia y equidad que deben regir un proceso de selección pública.

Con el fin de corroborar que, bajo el rol de Juez de la República del Ecuador, jamás he vulnerado los derechos humanos de personas procesadas, tal como afirmó el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández en su impugnación ciudadana del 2 de abril de 2024, basada en un presunto informe que supuestamente reposa en el repositorio digital de la Defensoría del Pueblo, solicité formalmente mediante oficio No. DPE-001-2024, de fecha 24 de junio de 2024, dirigido al doctor César Córdova, la siguiente información:

"•Si, con base en el informe titulado "Informe final mesa por la verdad y la justicia perseguidos Nunca más", realizado el mes de diciembre del 2018 (...), y de conformidad con las competencias y atribuciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, se ha determinado que la suscrita, en su rol de Juez Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, ha violado derechos humano y, por estos actos, ha sido sancionada por la Defensoría del Pueblo.

- *Si desde el año 2000 hasta la presente fecha, la Defensoría del Pueblo ha emitido algún informe en el que se haya determinado la vulneración de derechos a costa de la doctora en jurisprudencia Inés Maritza Romero Estévez.*

En respuesta a mi solicitud, el magíster Marcelo Xavier Dávila Medina, Director de Gestión Documental de la Defensoría del Pueblo, a través del memorando No. DPE-DGD-2024-0164-M, de 10 de julio de 2024, me comunicó lo siguiente

" (...)en virtud de las atribuciones y competencias de la Defensoría del Pueblo establecidas en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y demás cuerpos normativos, la Institución no es competente para determinar y sancionar posibles vulneraciones a derechos humanos.

Finalmente, con Memorando Nro. DPE-CGPDHN-2024-0171-M de fecha 27 de junio de 2024, se solicitó a las Directores/as de la Coordinación General de Protección verifiquen si existe algún expediente iniciado en contra de la Sra. Inés Maritza Romero Estévez desde el año 2000 hasta la presente fecha en sus unidades, y se certifique si cuentan o no con esta información. En este sentido, luego de que las Direcciones Nacionales han verificado los archivos a su cargo y enviado sus respuestas, me permito informar que en estas Unidades no existe ningún trámite defensorial en contra de Inés Maritza Romero Estévez."

Lo informado por la Defensoría del Pueblo confirma de manera inequívoca la presunta falsificación ideológica perpetrada por el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández en su impugnación ciudadana y apelación de la misma ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta acción no solo me perjudicó ilegítimamente, privándome de la posibilidad de ser designada como Defensora Pública General del Ecuador, sino que también socavó la transparencia y equidad del proceso de selección.

Por lo expuesto, solicito que se inicie una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de los hechos denunciados y se proceda conforme a lo establecido en la normativa penal vigente. Para ello, adjunto la siguiente documentación de respaldo:

1. Copia de la impugnación ciudadana presentada ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández, la cual es materia de este denuncia.
2. Copia de cédula de identidad del ciudadano denunciado.
3. Copia de cédula de identidad de la suscrita denunciante.
4. Copia del oficio No. DPE-001-2024, de fecha 24 de junio de 2024, dirigido a la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo.
5. Copia del memorando No. DPE-DGD-2024-0164-M de 10 de julio de 2024, suscrito por el magíster Marcelo Xavier Dávila Medina, Director de Gestión Documental de la Defensoría del Pueblo.

0000 0010

- 828-
ochocientos
veintiocho.

DELITO COMETIDO POR EL DENUNCIADO.- El presunto delito por el cual se presenta esta denuncia contra el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández es el tipificado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionado con la falsificación y uso de documentos falsos.

SOLICITUD DE DILIGENCIAS JUDICIALES.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 582 del Código Orgánico Integral Penal, sírvase llamar a rendir versión a las siguientes personas:

- A la denunciante, doctora Inés Maritza Romero Estévez, ex postulante al cargo de Defensor Público del Ecuador.
- Al abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández, en calidad de ciudadano ecuatoriano denunciado.
- A los miembros de la ex Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública: Gabriela Alexandra Cadena García, Tania Elena Chamorro Paltin, César Alberto Enderica Guin, Kimberly Villagómez Moscoso, Eduardo Vicente Yáñez Mesa, Ruíz Zhingre Julio César y Gina Barrera Vivar.
- A los miembros del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: Andrés Xavier Fantoni Baldeón, Nicole Bonifaz López, Juan Esteban Guarderas Cisneros, Betsy Yadira Saltos Rivas, Johanna Ivonne Verdezoto del Salto y Sócrates Augusto Verduga Sánchez.
- A la ex Vicepresidenta del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: Mishelle Elisa Calvache Fernández.
- Al abogado David Eduardo Soria Tamayo, ex Coordinador General de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
- Al Mgs. Marcelo Xavier Dávila Medina, Director de Gestión Documental de la Defensoría del Pueblo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal, que regula las actuaciones fiscales, en la presente denuncia solicito lo siguiente:

- Se oficie al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que realice la entrega de una copia certificada de:

1. Reglamento para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Defensoría Pública mediante Concurso de Oposición y Méritos con Veeduría e Impugnación Ciudadana.



2. Resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social No. CPCCS-PLE-SG-028-E-2024-0236 de 05 de junio de 2024.
 3. Impugnación ciudadana presentada por el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el día 02 de abril de 2024.
- Se oficie al Consejo de la Judicatura para que realice la entrega de una copia certificada de:
 1. Informe final mesa por la verdad y la justicia perseguidos políticos. Nunca más, elaborado en el año 2018 con el aval de la Vocalía 3 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
 - Se oficie a la Defensoría del Pueblo para que realice la entrega de una copia certificada de:
 1. Informe final mesa por la verdad y la justicia perseguidos políticos. Nunca más, que según el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández reposa en el enlace web: <https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2300>.

NOTIFICACIONES.-

- El ciudadano ecuatoriano denunciado, abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández, será notificado a través de la cuenta de correo electrónico: bravo.altiorem@gmail.com.
- La denunciante, Dra. Inés Maritza Romero Estévez, recibirá las notificaciones relacionadas con la presente denuncia penal en la cuenta de correo electrónico: [REDACTED]

Es esencial que las notificaciones se realicen de manera adecuada y conforme a los procedimientos legales establecidos.

Dra. Inés Maritza Romero Estévez
DENUNCIANTE
[REDACTED]

De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) que me fue (ron) presentadas en [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí el 20 17010650 [REDACTED]



18 ABO 2026

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la (s) fotocopia (s) que antecede (n), que me fue (ron) presentadas en [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí, Notario Sexagésimo Quinto del Cantón Quito, 201717010650.

Dr. Pedro Castro Telzoni
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



25 ABO 2026

Ab. María Augusta Escobar Montenegro
NOTARIA SEXAGÉSIMA QUINTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-002-000112652

0000 0011-829-ochocientos veintinueve



20261701065C02681

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20261701065C02681

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual (es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a JUICIO NO. 17203-2024-00524 y que me fue exhibido en 26 foja (s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 26 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 25 DE AGOSTO DEL 2026, (10:08).



NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA ESCOBAR MONTENEGRO

NOTARÍA SEXAGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 06635-DP17-2026-SE

1. 1.000
 2. 1.000
 3. 1.000
 4. 1.000
 5. 1.000
 6. 1.000
 7. 1.000
 8. 1.000
 9. 1.000
 10. 1.000
 11. 1.000
 12. 1.000
 13. 1.000
 14. 1.000
 15. 1.000
 16. 1.000
 17. 1.000
 18. 1.000
 19. 1.000
 20. 1.000
 21. 1.000
 22. 1.000
 23. 1.000
 24. 1.000
 25. 1.000
 26. 1.000
 27. 1.000
 28. 1.000
 29. 1.000
 30. 1.000
 31. 1.000
 32. 1.000
 33. 1.000
 34. 1.000
 35. 1.000
 36. 1.000
 37. 1.000
 38. 1.000
 39. 1.000
 40. 1.000
 41. 1.000
 42. 1.000
 43. 1.000
 44. 1.000
 45. 1.000
 46. 1.000
 47. 1.000
 48. 1.000
 49. 1.000
 50. 1.000
 51. 1.000
 52. 1.000
 53. 1.000
 54. 1.000
 55. 1.000
 56. 1.000
 57. 1.000
 58. 1.000
 59. 1.000
 60. 1.000
 61. 1.000
 62. 1.000
 63. 1.000
 64. 1.000
 65. 1.000
 66. 1.000
 67. 1.000
 68. 1.000
 69. 1.000
 70. 1.000
 71. 1.000
 72. 1.000
 73. 1.000
 74. 1.000
 75. 1.000
 76. 1.000
 77. 1.000
 78. 1.000
 79. 1.000
 80. 1.000
 81. 1.000
 82. 1.000
 83. 1.000
 84. 1.000
 85. 1.000
 86. 1.000
 87. 1.000
 88. 1.000
 89. 1.000
 90. 1.000
 91. 1.000
 92. 1.000
 93. 1.000
 94. 1.000
 95. 1.000
 96. 1.000
 97. 1.000
 98. 1.000
 99. 1.000
 100. 1.000



Juicio No. 17203-2024-00524

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA. Quito

miércoles 24 de diciembre del 2025, a las 09h11.



VISTOS: Doctores Marco Patricio Navarrete Sotomayor e Inés Maritza Romero Estévez, jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, disponemos lo siguiente: Agréguese a los autos el acta de audiencia, entregada por el señor Secretario, el lunes 22 de diciembre de 2025. Encontrándose la demanda de recusación presentada por el **doctor DARÍO VELÁSTEGUI ENRÍQUEZ, en representación de la ingeniera Pamela Licet Erazo Obando**, en contra de la doctora **JUANA NARCISA PACHECO CABRERA**, Jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; en estado de reducir a escrito la decisión tomada, dentro del término determinado en el artículo 93 del Código Orgánico General de Procesos (en adelante COGEP), se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.

Actor: **DARÍO VELÁSTEGUI ENRÍQUEZ**, en representación de la ingeniera **Pamela Licet Erazo Obando**

Demandada: **JUANA NARCISA PACHECO CABRERA**, Jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha

SEGUNDO: COMPETENCIA.

Los suscritos doctores Marco Patricio Navarrete Sotomayor e Inés Maritza Romero Estévez, jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrando el Tribunal; somos los jueces hábiles para conocer y resolver el presente proceso de recusación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del COGEP:

"Art. 26.- Competencia. La demanda de recusación contra la o el juzgador se presentará ante otro del mismo nivel y materia.

Cuando se trate de una o un juzgador que integre una sala o tribunal, se presentará ante los demás juzgadores que no estén recusados."

Una vez que se ha evacuado la audiencia prevista en el artículo 28 del COGEP, y pronunciada la decisión judicial oral, de conformidad a lo que dispone el artículo 93 ibídem, corresponde emitir la sentencia escrita debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en

el artículo 95 del mismo cuerpo legal.

TERCERO: VALIDEZ PROCESAL.

Durante la tramitación de la presente causa se ha respetado y observado todas y cada una de las normas procesales que al procedimiento de recusación le corresponden, cumpliéndose las formalidades que el COGEP exige, sin apreciarse que en su desenvolvimiento exista omisión de solemnidad sustancial que pueda influir en la decisión de la causa, sin que existan errores que rectificar, vicios que convalidar o nulidades que declarar, por lo que el proceso es válido y así expresamente se lo declara, siendo que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, sin que se pueda sacrificar la misma por la sola omisión de formalidades (Art. 169 CRE).

CUARTO: INCIDENTES PLANTEADOS Y SU TRÁMITE.

LECTURA DE ESCRITOS PRESENTADOS.

A petición de la defensa técnica de la parte demandada, el Tribunal dispone que el señor secretario dé lectura a los escritos ingresados el 11 de diciembre de 2025.

PRIMER ESCRITO – PETICIÓN DE EXCUSA.

Se da lectura íntegra al escrito presentado a las 13h25, mediante el cual la doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, solicita la excusa del doctor Marco Patricio Navarrete Sotomayor, alegando que este se habría adherido previamente al proyecto de resolución remitido por la jueza ponente, lo cual, a su criterio, lo constituiría en parte procesal e impediría conocer el incidente de recusación.

INTERVENCIÓN DEL DEMANDANTE DOCTOR DARÍO VELÁSTEGUI ENRÍQUEZ.

El abogado de la parte accionante solicita ser escuchado y manifiesta que la recusación presentada se funda en el retardo injustificado en el despacho del recurso de apelación dentro de la acción de protección, el cual habría superado ampliamente los plazos previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Alega que la jueza ponente no ha despachado múltiples escritos presentados durante más de diecinueve meses, pese a reiteradas insistencias y formularios F6, lo que incluso derivó en la presentación de una denuncia disciplinaria ante el Consejo de la Judicatura.

INTERVENCIÓN DE LA DEFENSA DE LA DEMANDADA, MAGÍSTER CARLOS BRAVO HERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA DOCTORA JUANA NARCISA PACHECO CABRERA.

El abogado de la parte demandada solicita que se resuelvan previamente las peticiones de



excusa y las excepciones previas planteadas, invocando disposiciones del Código Orgánico General de Procesos y alegando falta de competencia e imparcialidad del Tribunal para conocer el incidente.

Solicita además que se certifique si se ha procedido a la subrogación del juzgador, conforme al artículo 25 del COGEP.

SUSTANCIACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LOS INCIDENTES.

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA INÉS MARITZA ROMERO ESTÉVEZ.

Bien, una vez que esta juzgadora haya revisado en extenso todo el escrito presentado por el señor abogado, en primer lugar cabe señalar que el abogado se olvida que este es un proceso excepcional y no un proceso ordinario, ni que es de tramitación con el Código Orgánico General de Procesos. El abogado ha presentado la petición de excusa señalando que mantiene una enemistad manifiesta con la suscrita, puesto que se le ha presentado una denuncia, hecho que, en primer lugar, el profesional presenta la excusa; sin embargo, él no es parte procesal dentro de esta causa, por lo que carece absolutamente de legitimación para solicitar la separación de esta jueza, pues las normas del Código Orgánico General de Procesos establecen que únicamente las partes pueden solicitar excusas o recusación, nunca terceros ni abogados ajenos a la relación procesal. Entonces, resulta evidente que el abogado compareciente actúa sin personalidad, sin representación válida y, por lo tanto, sin facultad legal para presentar el pedido, por lo que por sí solo se justifica su rechazo. Adicionalmente, es penoso advertir negativamente la deslealtad procesal desplegada por el referido abogado, pues si él conocía plenamente la existencia de un presunto conflicto previo entre él y mi persona, y la propia jueza recusada sabía también de dicho presunto conflicto, lo cual debió haber sido advertido oportunamente, a pesar de ello, a pocos minutos de instalarse la audiencia, la parte contraria cambia de abogado e incorpora al doctor Bravo, situación que genera una sorpresa procesal y que revela una clara maniobra destinada a dilatar e interferir indebidamente la continuación de este incidente de recusación. Pues no hay más que extenderse en señalar claramente que, al no ser parte procesal, él no tiene ninguna legitimación aquí para presentar un pedido de excusa, por lo que no considero que exista ninguna fundamentación para el hecho y no procede mi excusa, y continúa la tramitación de esta causa, que es una recusación excepcional y como incidente dentro de lo que es el proceso principal. Dado que ya he presentado mis argumentos, no cabe ninguna otra aciaración al respecto, puesto que esa es mi posición final y, evidentemente, como ya lo ha dicho el abogado, no contempla el Código Orgánico General de Procesos una recusación de una recusación; y si es que él considera presentar una acusación por el proceso principal, debería ser parte procesal, de lo que sabemos no lo es. Hasta aquí la presente intervención. Le ruego, por favor, señor juez, para cumplir con el principio de diligencia y celeridad que nos corresponde como juzgadores, continuar con la audiencia, puesto que lamentablemente nos está generando incidente sobre incidente en una causa que hasta el momento no podemos despachar, lamentablemente por todas estas circunstancias. Le pedimos, por favor, se continúe

con la siguiente sustanciación, que sería en relación con la petición suya de excusa.

ACLARACIONES SOLICITADAS POR LA PARTE DEMANDADA.

Al amparo de los artículos 256 y 257 del Código Orgánico General de Procesos, tengo dos aclaraciones del auto resolutorio de la doctora Inés Maritza Romero Estévez. La primera solicitud de aclaración es que la magistrada ha indicado que yo soy el abogado de mi cliente y que, por lo tanto, no soy parte procesal; sin embargo, el artículo 22, numeral 11 del Código Orgánico General de Procesos indica, y cito: "Tener con alguna de las partes o sus defensores amistad íntima o enemistad manifiesta". Yo soy el defensor. Segunda aclaración: dentro del proceso 17283-2025-01455, por desaparición involuntaria, que se dio hace apenas menos de dos semanas, presenté una excusa por la misma razón, una solicitud de excusa por la misma razón, y la doctora Inés Maritza Romero Estévez se excusó indicando que, en efecto, existe una enemistad manifiesta; es decir, ella ya ha mantenido un criterio en unos casos y en este tiene otro criterio, por lo que solicito que se me aclare esos dos puntos para la prosecución de la causa.

ACLARACIÓN POR PARTE DE LA DOCTORA INÉS ROMERO ESTÉVEZ.

Respecto a ello, en primer lugar, no hay aclaración ni ampliación de una negativa de excusa. Si es que lamentablemente el doctor no tiene un conocimiento procesal, es lamentable, pero no existe una aclaración ni ampliación; eso no es un auto, doctor. Simplemente es una contestación en la que no procede una excusa y no me voy a excusar, puesto que este no es un proceso penal, usted no está como abogado dentro del proceso penal principal; este es un incidente que incluso la señora jueza ya ha presentado sus argumentos por escrito, y no es necesario incluso que exista una defensa técnica, puesto que el Código Orgánico General de Procesos no lo contempla como obligatoriedad. Entonces, en vista de eso, no existe aclaración ni ampliación de lo que acabo de resolver, puesto que usted está generando incluso más incidentes dentro de este proceso, sabiendo que no existe lo que acaba de señalar porque no es ningún auto. Entonces, en audiencia estamos respondiendo: no hay argumentos para excusar y solicito que continúe con la diligencia, doctor. Muy amable.

RESOLUCIÓN AL PEDIDO DE EXCUSA DEL DOCTOR MARCO NAVARRETE SOTOMAYOR.

En relación con lo manifestado en el escrito presentado el 11 de diciembre del 2025, a las 11 horas 25 minutos, con una petición de excusa al que está haciendo uso de la voz Marco Navarrete, conforme el artículo 25 del COGEP, en el sentido de que la señora doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, ha emitido el 30 de octubre de 2025 una resolución, 27 días antes de que presenten una demanda de recusación; que el que está haciendo uso de la voz, le ha respondido en correo del 30 de octubre de 2025, es decir, el mismo día, a las 14 horas con 25 minutos, con pequeñas correcciones en rojo respecto a ese proyecto; que la abogada Burbano, ayudante judicial, el mismo día, ha puesto en el despacho de la causa, a la doctora Romero, 27



días antes de la recusación y que envió el proyecto para la resolución a [redacted] que el doctor Navarrete se adhirió, que al formar parte del tribunal y adherirse al proyecto se constituye en parte procesal impedida de conocer la recusación; que solo falta la posición de la doctora Romero, que no ha subido un voto salvado; que este incidente de petición de excusa, se fundamenta en el numeral 1 del artículo 20 del COGEP y el literal k), numeral 7 del artículo 76 de la Carta Fundamental, al encontrarse inmerso en la causal número uno, solicita su excusa y que se complete con los jueces restantes, y que se suspendería mi competencia. En ese sentido, se responde a esta petición de excusa, indicando que la excusa es inherente a la condición del juez, no es una demanda de recusación. La excusa procedería si considerara personalmente que me encuentro impedido de conocer de forma imparcial la presente demanda incidental de recusación, dentro del proceso principal constitucional número 17203-2024-00524. En ese sentido, no tiene ningún asidero real para yo presentar mi excusa respecto al conocimiento de esta demanda incidental de recusación dentro del proceso principal de la causa constitucional. Además, no considero que exista ninguna causal de excusa de la cual yo tenga que valerme para apartarme del conocimiento de la causa. En tal virtud, para aplicar los principios de debida diligencia y celeridad, rechazo esa petición de excusa presentada en mi contra. Y para continuar con el proceso, por secretaría, que se lean los otros escritos que han sido presentados, por favor. Procedo, señores jueces. Como digo, señores jueces, este escrito fue presentado el día jueves 11 de diciembre del 2025 a las 13:35.

INTERVENCIÓN DE LA DEFENSA DE LA ACCIONANTE: Al respecto del infundado escrito de excepciones, tomando en consideración que este no es un proceso ordinario, escuchado con detenimiento el hecho de los comentarios efectuados, diciendo que hay un desconocimiento del proceso, el desconocimiento del proceso no es mío, sino de la recusada y su defensa técnica. No nos olvidemos que no se trata de un procedimiento ordinario y, solamente para poder dar contexto a lo que manifiesta la defensa técnica, que no tengo el gusto de conocerla, y la recusada, por el conocimiento que tengo muy bien de los procedimientos, señora jueza recusada, también he sido juez de uno de los más altos organismos de justicia del país y conozco muy bien los procedimientos. En este caso, en la recusación no se debe permitir una excepción o cualquiera de ellas: sin embargo, si ustedes se dan cuenta, señora jueza, lo único que pretenden y siguen haciendo es dilatar el proceso de manera artificiosa, porque aparte de aquello ya fueron atendidos los supuestos pedidos de excusa, exactamente lo mismo. Aparte de eso, dice que yo no tengo por qué conocer qué es lo que pasa adentro. Sí, yo no tengo por qué saber, porque lo que estamos pidiendo es justicia constitucional con la revisión y la reparación de la transgresión de derechos de una persona, de un ciudadano. Y lo que hace es quedarse por 19 meses con un proceso. A mí no me importa qué es lo que tenga que hacer; la justicia constitucional es célere y no se despacha cuando no sé qué es, cuando está determinada en la norma. No hay excepción alguna. Está diciendo que no hay una adecuada litisconsorcio. Por favor. Si es que ustedes tienen el deber legal de conocer esta recusación y terminar con este suplicio, que es lo único que está determinando, de alguna u otra manera, algún interés protervo de la parte que está generando estos incidentes día tras día, audiencia tras audiencia. Eso se va a investigar y me reservo el derecho para que

se investigue tanto a la defensa técnica como a la recusada, porque esto ya es insostenible, señores jueces.

INTERVENCIÓN DE LA DEFENSA TÉCNICA DE LA DEMANDADA: La recusación planteada se la lleva con el COGEP. El Código Orgánico General de Procesos establece que, si es que no se ha fijado un procedimiento especial, como el sumario, monitorio o ejecutivo, deberá estarse a las reglas del artículo 294 del COGEP, desarrollo de las audiencias del procedimiento monitorio. Mi pregunta, y solicito esta aclaración a su autoridad, es si es que no se va a manejar ningún procedimiento establecido en el COGEP, cómo se va a llevar la sustanciación de esta audiencia y cómo se va a garantizar entonces un debido proceso si no existe un procedimiento.

RESOLUCIÓN SOBRE LAS EXCEPCIONES PREVIAS.

Hemos procedido a deliberar respecto a la petición de la demandada de que las excepciones previas deben resolverse primero, conforme al artículo 153, numerales 1 y 3 del COGEP. El procedimiento de recusación se encuentra normado de manera independiente dentro de los artículos 23 al 28 del COGEP, con reglas propias, secuencia procesal y audiencia específica distinta al proceso principal de conocimiento. Las excepciones previas están concebidas como un mecanismo de defensa dentro del proceso principal para cuestionar la admisibilidad o forma de la demanda o aspectos procesales dentro de un mismo proceso principal, tales como incompetencia, incapacidad o falta de legitimación u otros supuestos estrictamente tasados. Sin embargo, tales excepciones no tienen aplicación en el procedimiento de recusación, el cual se rige por una normativa que incluye la presentación de la demanda de recusación, determinación de caución cuando corresponde, calificación y citación de las partes, audiencia única para resolverla y decisión de fondo al término de dicha audiencia. Dado que el procedimiento de recusación es un incidente autónomo con reglas especiales en el COGEP, no resulta procedente invocar o aplicar excepciones previas del proceso principal dentro del juicio de recusación, pues ello implicaría mezclar reglas procedimentales de procedimientos distintos y contraviene la lógica procesal establecida por la ley. Es decir, no resulta procedente ni pertinente solicitar o fundar excusas, recusaciones o pronunciamientos del juez con base en excepciones previas, toda vez que estas últimas no forman parte del procedimiento de recusación. Su aplicación es improcedente procesalmente; inclusive, lo manifestado en sus excepciones previas ya fue contestado tanto por la doctora Inés Maritza Romero Estévez como por el doctor Marco Navarrete Sotomayor, al momento en que manifestamos que no es pertinente excusarnos del conocimiento de la presente causa, que lo único que está haciendo es dilatar la continuación de esta demanda incidental de recusación. En tal virtud, se dispone continuar con la audiencia respectiva.

ACLARACIONES.

DEFENSA DE LA DEMANDADA: Por cuanto en su auto resolutorio que acaba de emitir, no ha manifestado si es que me está negando claramente las excepciones, queda eso en la

ambigüedad. ¿Me está negando las excepciones?

RESPUESTA: Precisamente estaba manifestando que las excepciones de procedencia en esta demanda incidental de recusación y que, en principio, a la defensa y al debido proceso usted ya escuchó los fundamentos, tanto de la doctora Romero como del suscrito para excusarnos del conocimiento de esta causa.



-833-
ochocientos
treinta y
tres.

DEFENSA DE LA DEMANDADA: En el sentido de que se me están negando las excepciones previas, solicito que me aclare cuál es el procedimiento que se va a llevar para sustanciar esta controversia, conforme lo dispone el artículo del COGEP sobre la audiencia. En ese sentido, honorable magistrado, y al amparo del artículo 76, numeral 7, literal m), de la Constitución de la República del Ecuador, que nos garantiza el derecho a poder recurrir de los autos interlocutorios, de los fallos y demás sentencias, apelo con efecto diferido de esta negativa a las excepciones previas.

RESPUESTA: El Código Orgánico General de Procesos establece claramente que no existe apelación respecto a esta demanda incidental de recusación. Siendo un tribunal, tenga la bondad, abogado, está causando muchas dilaciones e interferencias; si no tiene el conocimiento previo de la tramitación dentro de lo que es el Código Orgánico General de Procesos y esta audiencia, le rogamos, por favor, no seguir incidentando, porque ya hemos dejado claro, se ha establecido claramente, al tratarse este de un incidente de recusación dentro de un proceso principal, que es una acción de protección, no es procedente la petición de excepciones y no es un auto el que hemos emitido; simplemente estamos señalándole que ninguno de los juzgadores presentes, además, ya dio contestación en sus excusas. Se dispone la continuación de la audiencia, puesto que si el abogado sigue incidentando, las normas del Código Orgánico de la Función Judicial nos dan la potestad sancionadora en caso de actuaciones desleales por parte de los abogados.

DEFENSA DE LA DEMANDADA: No es mi afán dilatar esta audiencia; de hecho, quien presenta el incidente en la acción de protección, ha sido la parte accionante. Sin embargo, lo que sí tengo que decir es que no es desconocimiento de la norma. Hay que recordar que el Código Orgánico General de Procesos, a diferencia del Código Orgánico Integral Penal, es norma de derecho privado, y cuando hay ambigüedad en la norma o antinomias o cualquier situación, se debe estar a la Constitución de la República del Ecuador, que está por encima de todas las normas y reglamentos, y esa norma me permite recurrir del fallo o del auto resolutorio. En todo caso, yo expongo, como defensa técnica que soy, amparado en la Constitución de la República del Ecuador, mi argumento. Si usted, honorable magistrado, si usted, honorable magistrada, me niega la apelación con efecto diferido, en ese caso, ya queda en audiencia y yo podré tomar otras acciones a futuro.

DECISIÓN SOBRE LA PETICIÓN DE LA DEMANDADA:

No hemos resuelto todavía esta demanda incidental de recusación. No hay ningún auto

resolutivo en esta audiencia. Para continuar, por favor, no existe ningún auto resolutivo de esta audiencia todavía y todavía no hemos resuelto la demanda incidental de recusación. Además, tanto la Corte Constitucional establece que no todo tiene derecho a una doble instancia, en virtud de la naturaleza de cada procedimiento. En tal virtud, por esa razón y porque no existe una norma expresa que le faculte apelar respecto a una decisión que todavía no se ha tomado sobre una demanda incidental de recusación, se niega la petición.

QUINTO: ENUNCIACIÓN SUSCINTA DE LOS HECHOS, FUNDAMENTO DE LA DEMANDA Y ANUNCIO DE PRUEBAS POR PARTE DE LA PARTE ACCIONANTE.

Para poder tener conocimiento de la recusación que se ha planteado, es pertinente conocer ciertos antecedentes. Con fecha 7 de mayo del año 2024 se emitió el acta de sorteo dentro del presente recurso de apelación de acción de protección, garantía constitucional, siendo la jueza ponente de la causa la doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, o sea, hace más de un año y siete meses. Para el caso que nos ocupa, es importante tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ya que dicha norma dispone, como una de las competencias de los jueces de la Corte Provincial, en este caso, conocer y resolver los recursos de apelación que se interpongan en contra de las sentencias emitidas por los jueces de instancia, en este caso, en materia constitucional. De igual forma, debemos tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, norma que establece como uno de los principios que rige el sistema de justicia, la celeridad, y esto implica que debe ser rápida, oportuna y eficiente. Concordante con aquello, el artículo 24, señores jueces, no soy yo el que lo digo, lo dice el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en este caso, que los recursos de apelación deben ser resueltos en el término de ocho días, no diecinueve meses. A pesar de que las normas son claras, norma previa, clara, pública, que hemos presentado, inclusive, más de cinco escritos a la jueza ponente, hemos presentado cinco escritos para que sustancie el recurso de apelación. La jueza ponente hasta el día de hoy no ha despachado uno solo, de ninguno, de manera oportuna. En este caso, estas solicitudes han quedado en el limbo y mucho menos ha sustanciado el recurso de apelación. Eso, a pesar de que ha pasado más de un año y siete meses, insisto, desde que tuvo conocimiento del recurso de apelación; sin embargo, hasta la presente fecha, no existe respuesta. Lo mencionado demuestra que la doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, ha incumplido con su deber de atender, despachar y sustanciar con debida diligencia el recurso de apelación, generando una afectación directa no solo al accionante, sino también al ordenamiento jurídico ecuatoriano, pues se observa el amparo directo y eficaz que caracteriza la protección de derechos de los ciudadanos al tratarse de acciones constitucionales. En virtud de la falta de despacho oportuno del recurso de apelación, presentamos dos formularios 06. El primer formulario 06, fue presentado con fecha 17 de septiembre del año 2025, en tanto que el segundo formulario 06, fue presentado con fecha 1 de octubre del año 2025. Nada pasó. Sin embargo de aquello, la jueza ponente siguió haciendo caso omiso a nuestras múltiples solicitudes, inclusive de los requerimientos a través

de los formularios; y, a consecuencia de aquello, por falta de despacho del recurso de apelación, con fecha 7 de octubre del año 2025, nos vimos obligados, señores jueces, ante la inacción de la jueza ponente hoy recusada, a presentar una denuncia formal ante el Consejo de la Judicatura; y, en este caso, por configurarse lo dispuesto en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, por retardo injustificado en el despacho de las causas. En virtud de lo mencionado, el 23 de octubre del año 2025, fuimos notificados con la boleta número 01204-2024-05085, dentro del expediente número 01204-2024-05085, a través del cual la Secretaría Ad hoc de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura de Pichincha, aperturó el correspondiente sumario disciplinario por la denuncia presentada por nosotros en contra de la jueza hoy recusada, tomando en consideración que hasta el día de hoy nada ha pasado con nuestros pedidos. Por lo mencionado, y de conformidad con el artículo 22, numeral 5 del Código Orgánico General de Procesos, presentamos la presente recusación tomando en consideración el retardo injustificado del despacho del recurso de apelación de la acción de protección, recaída en la causa 17 203-2024-00524. En virtud de lo mencionado y tomando en cuenta el tiempo en exceso que ha transcurrido para la emisión de la sentencia de apelación en materia constitucional dentro de la causa de referencia, así como la pérdida de imparcialidad por las quejas y denuncias realizadas en contra de la jueza hoy recusada, solicitamos de la manera más comedida a ustedes, se acepte la recusación en contra de la doctora Juana Narcisca Pacheco Cabrera; y, a consecuencia de aquello, se disponga se proceda con el sorteo inmediato de otro juez o jueza para que sustancie, de forma legal y debida, la apelación en materia constitucional que, sin lugar a duda, ha superado el término previsto en la norma constitucional para expedir su fallo.

ANUNCIO DE PRUEBA – PARTE ACTORA.

Se anuncian como pruebas documentales, entre otras:

Acta de sorteo de 7 de mayo de 2024.

Escritos de insistencia presentados en fechas sucesivas.

Formularios F6 de fechas 17 de septiembre y 1 de octubre de 2025.

Denuncia presentada ante el Consejo de la Judicatura y auto de apertura del sumario disciplinario.

SEXTO: CONTESTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA Y ANUNCIO DE PRUEBA DE LA PARTE DEMANDADA.

Para iniciar, quiero dar respuesta a lo que ha manifestado la doctora Inés Maritza Romero Estévez y la defensa técnica de la parte accionante, en el sentido de que aquí se está dilatando la causa principal. Quiero citar el artículo 25 del COGEP; bajo su venia me permito leer y dice: "Subrogación del juzgador. La recusación no suspenderá el progreso de la causa principal. Una vez citada la recusación se suspenderá la competencia del juez conforme el



Código Orgánico General de Procesos y su citación será única y exclusivamente al correo institucional del juzgador recusado, salvo cuando se fundamente en el retardo injustificado, en cuyo caso solo se suspenderá la competencia cuando la recusación haya sido admitida. Suspendida la competencia provisionalmente o definitivamente, cuando se trate de retardo injustificado, la autoridad competente deberá nombrar a quien subrogue al juzgador recusado en el término de veinticuatro horas para que continúe conociendo la causa principal". Por lo que yo solicito que, mediante secretaría, antes de continuar con mis alegatos, se sienta razón de si ya se ha cumplido con el artículo 25 del Código Orgánico General de Procesos y se ha designado el tercer juzgador para que conforme el tribunal y, sin dilaciones, se continúe con la sustanciación de la causa principal. **DOCTORA ROMERO:** El doctor tenía que contestar la demanda de recusación y esto sí lo debió haber presentado como un incidente previo; estamos dentro ya de una audiencia y usted no ha contestado a la demanda de recusación. Es mi idea o usted no va a contestar, porque usted está planteando algo que ya en este momento no es procedente; usted tiene simplemente que contestar lo que quien ha demandado le ha planteado como fundamentación y las pruebas presentadas. **DEFENSA DE LA PARTE DEMANDADA:** ¿Se puede escuchar el audio por medio del señor actuario en donde yo indiqué que, previo a mis alegatos, estaba anunciando esta disposición del artículo 25 del Código Orgánico General de Procesos? Como no hay un procedimiento previsto en la norma, entonces yo tengo que estar directamente a las reglas que ustedes dispongan. Primero pedí la excusa, luego pedí la incompetencia; se me han negado las dos. Ahora solicito que se sienta razón, porque como no hay un procedimiento especial, no estoy pidiendo algo contrario a la Constitución. En ese caso, solicito que, para continuar con mis alegatos, se sienta razón de si es que ya se ha nombrado o se ha sorteado el juez. **DOCTORA ROMERO:** Yo soy parte de este tribunal y me asombra la forma con la que usted está tratando; usted no puede disponer al secretario que certifique absolutamente nada. Estamos en una audiencia formal; esto no es un ejemplo ni una simulación. Aquí lo que le corresponde en este momento es contestar la demanda, doctor. Se está disponiendo al señor secretario que certifique; no cabe de ninguna manera. Perdón, señor juez ponente. **DOCTOR NAVARRETE:** Sí, así es. Se le concedió la palabra, doctor, para la contestación a la demanda y el anuncio de pruebas respectivas. **DEFENSA DE LA PARTE DEMANDADA:** En ese sentido, y como ustedes dirigen la audiencia, voy a someterme a lo que ustedes están disponiendo. Nada más indicar que jamás pedí directamente al secretario actuario, sino que lo hice por medio de la autoridad a la cual me he referido en toda esta audiencia. Es así que el retardo injustificado no existe y no existe por parte de mi cliente, en razón de que no es atribuible a ella la no emisión de la sentencia, sino que es atribuible a todo el tribunal. En ese sentido, mediante la prueba que practicaré en su momento, demostraré con los correos internos que se dan entre los jueces, doctora Inés Maritza Romero Estévez, doctor Marco Navarrete y la doctora Pacheco, que el retardo no es injustificado; deberá hacerse análisis a las sentencias de la Corte Constitucional para ver si se cumplen los parámetros que refleja, esto es, los que deben existir según la sentencia 760-20-EP/24. Los referidos criterios de revisión para ver si es que existe un retardo injustificado se dan en: 1) La complejidad del asunto; 2) La actividad procesal del interesado; 3) La conducta de las autoridades judiciales; 4) La afectación generada en la situación jurídica de la persona

0000 0017
-835- ochocientos treinta y cinco
85
NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

involucrada en el proceso. En ese sentido, en mi contestación, primero voy a demostrar por qué la demanda no debía ser dirigida únicamente a la doctora Pacheco, sino a todo el tribunal, y es en razón de que, probablemente por desconocimiento de la norma, la defensa técnica de la parte accionante, dirige esta demanda de recusación por la causal número cinco del artículo 22, retardo injustificado, únicamente en contra de mi cliente y no en contra de todo el tribunal, ya que es todo el tribunal el que se encarga de conocer y resolver lo que en derecho corresponda. No me sorprende el desconocimiento de la norma, porque del escrito del 10 de marzo del 2025 el doctor Velástegui se refiere a yerros procesales, que son errores procesales, pero escribe la palabra "hierro" con h, como el mineral. Entonces, no me sorprende que tenga desconocimiento de que debía dirigir la presente recusación a todo el tribunal. A lo largo de esta audiencia demostraremos que todo el tribunal debía ser demandado con esta recusación. También demostraremos que no es atribuible a mi cliente el retardo injustificado en la emisión de la sentencia. ¿En razón de qué? El Tribunal Quinto de lo Penal de la Corte Provincial, estuvo nueve meses sin un juzgador o juzgadora, puesto que usted, doctor Navarrete, fue reemplazado. Luego de eso, tengo como prueba, que la anunciaré más adelante, todas las acciones de personal de las licencias con remuneración y vacaciones de cada uno de los miembros del tribunal. En ese sentido, no es atribuible a mi cliente un retardo injustificado, más aún cuando, además de que en el momento en que por fin se llegó a integrar el tribunal, en legal y debida forma, con tres jueces, tenía que resolverse primero todos los casos que tenían con anterioridad, porque si no se hace en este orden, primero el más antiguo hasta el más actual, se estaría yendo en contra del derecho a la igualdad formal y material de todas las causas que están en cola. Más allá de eso, se demostrará en esta audiencia que el 30 de octubre se puso en conocimiento tanto de usted, doctor Navarrete, como de la doctora Inés Maritza Romero Estévez, el proyecto de resolución al cual usted se adhirió y hasta la fecha actual lo único que nos falta es que se emita el voto salvado de la doctora Inés Maritza Romero Estévez, que no lo ha hecho. ¿Cómo se puede entonces decir que mi cliente es la única a la que se le puede atribuir, primero, esta demanda de recusación y, segundo, atribuir únicamente a ella el retardo, sea justificado o injustificado, que ya se verá con la práctica de la prueba que no existe ningún retardo injustificado que se apegue a los parámetros de la sentencia constitucional expresada ante su autoridad? De igual manera, debemos advertir seriamente al tribunal que toda la prueba que va a ser puesta en su conocimiento, obra de los recaudos procesales en el escrito que presenté hoy y también será digitalizada para poder realizar la práctica de esta diligencia. En ese sentido, al no configurarse un retardo injustificado en la emisión de la sentencia, corresponde rechazar esta recusación y continuar con la tramitación de la causa.

ANUNCIO DE PRUEBA – PARTE DEMANDADA.-

Manifiesta que toda la prueba es documental, materializada ante Notario Público, cumple requisitos del COGEP. Materialización de diligencias notariales.

Se anuncian múltiples diligencias notariales de materialización de correos institucionales, agendas judiciales, acciones de personal y comunicaciones internas entre los jueces

integrantes del tribunal.

RÉPLICA POR LA PARTE ACTORA.-

Bueno, como sus autoridades han podido escuchar, mis alegaciones iniciales respecto del sostenimiento de esta demanda de recusación, respecto de la inacción por parte del despacho, se deberá tomar en consideración que nada, en lo absoluto nada, ha dicho la defensa técnica de la hoy recusada. ¿Por qué razón, señores jueces? Porque lo único que ha venido haciendo son alegaciones, tal cual lo hizo ya al inicio con las excepciones, presentando los famosos pedidos de excusa. No hay un solo argumento que pueda llegar a determinar, más bien por ahí es que entendemos que la inexperiencia, a veces nos juega una mala pasada como profesionales y se pretende afectar la conducta del otro profesional; obviamente, eso habla no mal de uno, sino del que efectivamente establece ese tipo de juegos, que son simples argucias respecto de lo que efectivamente se está discutiendo. Señor juez, hay que tomar en consideración que desde ningún punto de vista se ha podido desvirtuar cómo es que efectivamente se ha retardado diecinueve meses en despachar una apelación en materia constitucional. Por el contrario, lo que se pretende hacer entender, es que ustedes son los responsables de la irresponsabilidad de la jueza recusada; eso es lo que se pretende demostrar. No hace falta aclarar absolutamente nada respecto de cada uno de los elementos que ha manifestado la defensa técnica de la recusada, porque en realidad, si ustedes entienden el contexto de lo que está diciendo la defensa técnica, poco o nada se podrá comprender respecto de cómo es que justifica que no se haya despachado en diecinueve meses. Al menos hubiéramos escuchado que tenía mucha carga procesal, alguna cosa, algo que trate de justificar, pero aquí se dice que es responsabilidad de ustedes, señores jueces, cuando en realidad la jueza ponente no ha despachado un solo escrito dentro de esta causa, uno solo. ¿Cómo puede justificarse eso? Pues ocho días tiene para resolver un recurso de apelación en materia constitucional. Entiendo que los abogados tenemos la concepción clara de la norma y su aplicación; la norma no está para leerla ni para interpretarla, sino para aplicarla en su tenor literal. Desde ese contexto, obviamente vendrá a su conocimiento que no hay un solo elemento que pueda desvirtuar cómo es que efectivamente se ha justificado este tiempo de diecinueve meses sin despacho de la presente causa.

CONTRARRÉPLICA DE LA PARTE DEMANDADA.

Nuevamente debo indicar que las alegaciones, más allá de ser afirmadas, deben ser probadas. Me extraña mucho, me quedo totalmente perplejo, porque el doctor sigue insistiendo en que la única persona a quien se le puede atribuir un retardo, sea justificado o injustificado, es a mi cliente, cuando de la prueba que yo practicaré, quedará demostrado, mediante correos oficiales institucionales, debidamente materializados, que cada escrito presentado, cada notificación, cada auto y cada emisión les llega a todo el tribunal; por eso son tres jueces. En ese sentido, nosotros nos mantenemos en que no se configura ningún retardo injustificado y sostenemos que todo el tribunal es parte procesal en esta recusación, como así lo probaremos. Que, si bien es cierto su autoridad ha decidido no conceder las excepciones previas, bien podrá en su

resolución advertir que ni usted ni la doctora Inés Maritza Romero Estévez son competentes para conocer algo que compete a los tres jueces; y, sin embargo, se está juzgando únicamente a una persona, cuando quienes deberían ser juzgados son los tres y defendiéndose cada uno, con sus respectivas defensas técnicas. No obstante, este proceso se ha dado de esta manera, lo cual resulta totalmente ilógico y desapegado de los principios más básicos del derecho. ¿Cómo es posible, por esta causal, la número cinco, retardo injustificado, atribuir y demandar la recusación solo a una persona de un tribunal colegiado? Resulta totalmente ilógico, pero a veces nos toca estar frente a estas demandas infundadas, desapegadas de cualquier lógica elemental del derecho, y corresponde resolver conforme a derecho. En ese sentido, nuestro alegato es sencillo: no se nos puede atribuir ningún retardo injustificado, no existe tal retardo injustificado y, por supuesto, demostraremos que todos los jueces, tanto usted, doctor Navarrete, como la doctora Inés Maritza Romero Estévez, son parte en esto, lo cual será acreditado con correos y demás pruebas. Hasta aquí mi intervención; devuelvo el uso de la palabra.

SÉPTIMO: EVACUACIÓN DE LA PRUEBA.

7.1. PRUEBA DE LA PARTE ACTORA.

a) Como prueba número uno, que fue anunciada hace un momento, tenemos el acta de sorteo dentro de la causa constitucional 17 203-2024-00524, de fecha 7 de mayo de 2024, a las 9 horas 31 minutos. En su parte pertinente podemos leer: "Por sorteo de la ley, la competencia se radica en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha". Y como jueza ponente, doctora Juana Narcisca Pacheco Cabrera. Hasta aquí la práctica de la prueba número uno. Como prueba, solicito también su instrucción para realizar la práctica de manera seguida; por principio de contradicción, se corre traslado a la contraparte.

Se consulta a la contraparte si va a alegar respecto a estas pruebas una por una o si va a esperar que se evacúe toda la prueba, responde una por una.

CONTRADICCIÓN PARTE DEMANDADA: Solicita que se tome en consideración que el 7 de mayo de 2024, a las 9:31, el tribunal, los tres jueces, doctor Navarrete, doctora Romero y doctora Pacheco, conocieron la causa. Estoy contradiciendo la prueba. Lo único que estoy dejando sentada la razón es que el 7 de mayo conocieron los tres jueces miembros del tribunal. No tengo nada más que decir respecto de esta prueba.

b) Como prueba número dos tenemos el escrito presentado el 9 de enero de 2025 dentro de la causa 17 203-2024-00524, a través del cual hicimos la primera insistencia. Dada la trayectoria del tiempo, sus autoridades podrán advertir los yerros cometidos por el juzgador de instancia, determinando que existen vulneraciones de derechos constitucionales del accionante, por lo cual se solicita, de la manera más comedida, se sirvan dictar sentencia dentro de la presente apelación. Hasta aquí la práctica de la prueba número dos correspondiente al escrito de 9 de



enero de 2025.

CONTRADICCIÓN PARTE DEMANDADA: Nada que alegar respecto del escrito ingresado.

e) Como prueba número tres, tenemos el escrito de 10 de marzo de 2025, presentado dentro de la causa 17 203-2024-00524 y, en su parte pertinente, podemos verificar, y está subrayado: "Respetuosamente solicitamos a sus autoridades se sirvan convocar a las partes procesales a una audiencia de estrados para poder ser escuchados y demostrar los yerros cometidos por el juez a quo dentro del presente proceso". Este escrito tampoco ha sido despachado hasta el día de hoy.

CONTRADICCIÓN PARTE DEMANDADA: Doy lectura a la parte pertinente en ejercicio del principio de contradicción, que indica que el escrito es dirigido a los señores jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito. Doctores, por favor, tiene que hacer alegaciones, es decir, contradecir la prueba. Estoy leyendo la parte pertinente, honorable juez, en ejercicio del principio de contradicción. No hay comunidad de la prueba. Esto es producto de inexperiencia. Perdóneme, señor juez. Estoy haciendo uso del principio de contradicción y leyendo la parte pertinente de la prueba.

d) Como prueba tenemos el escrito de 7 de abril de 2025 dentro de la causa 17 203-2024-00524, en el que, en su parte pertinente, podemos verificar: "Tomando en consideración el tiempo transcurrido y que existe una grave vulneración de derechos constitucionales de la legitimada activa, respetuosamente solicitamos se sirvan emitir la correspondiente sentencia reparatoria de derechos de la ingeniera Pamela Erazo Obando". Nuevamente, señor juez, este escrito es de 7 de abril de 2025.

CONTRADICCIÓN PARTE DEMANDADA: Antes de proceder con el principio de contradicción de esta prueba que se está explicando, solicito no ser interrumpido y leo la parte pertinente de la prueba. El escrito va dirigido a los señores jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, al tribunal. Nada más.

e) Como prueba el escrito presentado el 20 de marzo de 2025 dentro de la causa 17 203-2024-00524, en el que nuevamente, en su parte pertinente, ante la grave vulneración de derechos constitucionales de la legitimada activa, respetuosamente solicitamos se sirvan emitir la correspondiente sentencia dentro de la presente causa. Escrito presentado el 20 de marzo de 2025.

CONTRADICCIÓN PARTE DEMANDADA: Para aplicar el principio de contradicción en esta prueba, leo en su parte pertinente el mismo escrito que indica que fue dirigido a los señores jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

[illegible]

CONTRADICCIÓN PARTE DEMANDADA: La parte pertinente que quiero leer, bajo el principio de contradicción, es: jueza doctora Burbano Játiva Anacélida, que reemplaza a la doctora Pacheco Cabrera Juana Narcisa.

i) Tenemos la fe de presentación del escrito que fue presentado el 20 de marzo de 2025 por Erazo Obando Pamela Licet. Jueza: doctora Pacheco Cabrera Juana Narcisa, jueza ponente. Se adjunta un escrito. Sentencia número 17 460-2023-03082 y auto de inadmisión.

CONTRADICCIÓN PARTE DEMANDADA: Nada al respecto.

j) Tenemos la fe de presentación del escrito de 10 de abril de 2025 a las 14:17, presentado por Erazo Obando Pamela Licet. En su parte pertinente: jueza doctora Pacheco Cabrera Juana Narcisa, jueza ponente. Se adjunta un escrito en original.

CONTRADICCIÓN PARTE DEMANDADA: Nada al respecto.

k) Tenemos la fe de presentación de 26 de junio de 2025 a las 15:51, presentada por Erazo Obando Pamela Licet. Y en su parte pertinente: jueza doctora Pacheco Cabrera Juana Narcisa, jueza ponente. Se adjunta un escrito en original.

CONTRADICCIÓN PARTE DEMANDADA: Gracias por el uso de la palabra. Para ejercer el principio de contradicción, leo el encabezado del documento que dice: República del Ecuador, Oficina de Gestión Judicial Electrónica de Pichincha. Hasta aquí la contradicción.

l) Tenemos el formulario para atención de quejas de fecha 17 de septiembre de 2025, presentado por Darío Velástegui Enríquez. Datos del formulario: dependencia judicial, Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Nombre del funcionario: Juana Narcisa Pacheco Cabrera. Y en su parte pertinente, esto es, las tres últimas líneas del escrito: "Hemos presentado más de cuatro insistencias para el despacho oportuno sin que exista respuesta, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva". Esto fue recibido el 17 de septiembre de 2025 a las 14 horas con 52 minutos.

CONTRADICCIÓN PARTE DEMANDADA: En la parte pertinente del documento indica: dependencia judicial, Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

m) Tenemos el segundo formulario para atención de quejas, presentado formulario F6, de fecha 1 de octubre de 2025, y en su parte pertinente, datos del formulario: nombre del funcionario, Juana Narcisa Pacheco Cabrera; y en el requerimiento: "Hemos presentado más de cuatro insistencias para el despacho oportuno sin que exista respuesta, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva". Este documento fue suscrito el 1 de octubre a las 14 horas con 24 minutos y remitido a través de correo electrónico mediante los dominios habilitados por el Consejo de la Judicatura.

CONTRADICCIÓN PARTE DEMANDADA: En su parte pertinente, ejerciendo el principio de contradicción, indica: dependencia judicial, Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

00000 0020
SEXAGSIMA 00000 EL ANNO 00000
65
n) Tenemos aquí proyectada en pantalla la prueba que corresponde a la denuncia presentada ante el Consejo de la Judicatura, donde podemos ver, en el numeral dos, la identificación de los servidores de la Función Judicial denunciados, con la indicación de la unidad a la que pertenecen. La servidora judicial denunciada que habría cometido la infracción es la doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, jueza ponente del tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que sustancia la acción de protección signada con el número 17 203-2024-00524. Y en el apartado tres, resumen de los hechos denunciados y la posible infracción disciplinaria cometida: el 7 de mayo de 2024, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha recibió el proceso constitucional de la acción de protección signada con el número 17 203-2024-00524, para sustanciar el recurso de apelación interpuesto por la legitimada activa. Esto puede corroborarse del sistema E-SATJE, en el que consta el acta de sorteo y la razón sentada por el secretario del tribunal. Y también consta la página subsiguiente, en la que, a pesar de que la norma es clara, la jueza ponente dentro de la causa 17 203-2024-00524, doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, no ha dado cumplimiento a las disposiciones normativas mencionadas, pues ha pasado un año y cinco meses sin que exista sentencia de apelación y mucho menos el despacho de los escritos e insistencias presentadas en la causa. Los escritos presentados tienen fechas 9 de enero de 2025, 10 de marzo de 2025, 20 de marzo de 2025, 7 de abril de 2025 y 26 de junio de 2025. Por lo mencionado, la doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera es responsable por el retardo indicado en la tramitación de la causa 17 203-2024-00524 y deberá responder en virtud de lo dispuesto en los artículos 100, 104, 105 numeral 2 y 107 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, y su autoridad se servirá dar trámite a la presente denuncia. Este documento fue debidamente suscrito por el doctor Darío Velástegui Enríquez y fue presentado ante el Consejo de la Judicatura el 7 de octubre de 2025 a las 15 horas con 35 minutos.

CONTRADICCIÓN PARTE DEMANDADA: No tengo nada que alegar.

ñ) Tenemos en pantalla la prueba correspondiente al auto a través del cual se sugiere dar inicio al sumario administrativo y, en su parte pertinente, consta: expediente número 17001-2025-11362, Quito, jueves 23 de octubre de 2025. En el expediente 17001-2025-11362 que sigue Darío Velástegui Enríquez, en contra de Juana Narcisa Pacheco Cabrera, se indica lo siguiente: Quito, 23 de octubre de 2025. En esta fecha asumo conocimiento del presente expediente disciplinario signado con el número 17001-2025-11362. Primero, el suscrito, en calidad antes invocada y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 11 literal b), 26 y 27 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la Función Judicial, artículo 9 de la Resolución 152/2022 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante la cual se reformó el artículo 25 del Reglamento, en concordancia con los artículos 36 y 37 de los manuales de trabajo y sustanciación, mismos que fueron aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura, procede a realizar el respectivo análisis de admisibilidad de la denuncia presentada

por el doctor Darío Velástegui Enríquez en contra de la doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera por sus actuaciones como jueza ponente del tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección 17 203-2024-00524. Segundo, el denunciante doctor Darío Velástegui Enríquez, mediante denuncia recibida el 7 de octubre de 2025, manifiesta, entre otras cosas, que dentro de la acción 17203-2024-00524, ha transcurrido un año y cinco meses sin que exista una sentencia de apelación, así como tampoco se ha dado despacho a los escritos de insistencia presentados el 9 de enero de 2025, el 10 de marzo de 2025, el 20 de marzo de 2025, el 7 de abril de 2025 y el 26 de junio de 2025, hasta la fecha de presentación de la presente denuncia. Tercero, al respecto, se advierte que la denuncia fue presentada de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial y, en consecuencia, se sugiere admitir a trámite la presente denuncia por la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial; para tal efecto, remítase atento memorando a la señora Directora Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, en el ámbito disciplinario, a fin de poner en su conocimiento y consideración la sugerencia realizada, salvo mejor criterio. Documento suscrito por Emily Carlosama, secretaria ad hoc de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura de Pichincha.

CONTRADICCIÓN PARTE DEMANDADA: Leo de la providencia, en la parte pertinente, que indica: "Sugiero admitir a trámite la presente denuncia por infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial; para tal efecto, remítase atento memorando a la señora Directora Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, en el ámbito disciplinario, a fin de poner en su conocimiento y consideración la sugerencia realizada, salvo su mejor criterio". Nada más respecto de esta prueba.

7.2. PRÁCTICA DE PRUEBA POR PARTE DE LA JUEZA DEMANDADA DOCTORA JUANA NARCISA PACHECO CABRERA.

1) Procedo a practicar la siguiente materialización mediante factura número 001-005-000014426, correspondiente a la diligencia notarial número 2025-170-1082-C-02170. Es prueba documental y debo dar lectura a la misma, porque se va a visualizar en pantalla. Procedo con la práctica de la prueba. Factura número 001-005-000014426, correspondiente a la diligencia notarial número 2025-170-1082-C-02170. Certificación de documentos materializados desde página web o soporte electrónico, con número 2025-170-1082-C-02170. Razón: de conformidad con el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe de que el documento que antecede, en seis fojas útiles, fue materializado a petición de la señora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, desde página web o soporte electrónico. Me permito leer la URL: <https://mail.google.com/mail/u/0/inbox>. El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, a las 8 horas 51 minutos. Todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia física del documento materializado queda archivada en el libro de certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado de los documentos certificados son de responsabilidad exclusiva de las personas que los utilizan. Quito, 9 de



diciembre de 2025, firmado por la notaria Elizabeth Lina del Carmen Cárdenas Coronado, Notaría Octogésima Segunda del cantón Quito. Inicio de la materialización: 9 de diciembre de 2025, 08:42. Correos materializados: recibidos, seis mil uno. Desde el correo juana.pacheco@funcionjudicial.gov.ec al correo archivo17.th@funcionjudicial.gov.ec, el 8 de diciembre de 2025 a las 16:04, solicita mi clienta comedidamente lo siguiente: uno, se provea la acción de personal de movimiento administrativo de la doctora Anacélida Burbano Játiva desde la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito hacia la Sala Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con fecha tentativa 16 de noviembre de 2023. Dos, solicita la acción de personal del doctor Marco Patricio Navarrete Sotomayor, mediante la cual fue designado en el Tribunal Quinto en reemplazo de la doctora Anacélida Burbano Játiva, con fecha tentativa 25 de junio de 2024. Firma la doctora Juana Narcisca Pacheco Cabrera, jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dirección Corte Provincial, calle Juan Severino N32-275, entre avenida 6 de Diciembre y Diego de Almagro, Distrito Metropolitano de Quito, teléfono 02-395-3600, extensión 24430. Correo electrónico desde el que se remite la solicitud: juana.pacheco@funcionjudicial.gov.ec. Respuesta del archivo institucional: archivo17.th@funcionjudicial.gov.ec, 8 de diciembre de 2025 a las 16:30, dirigida a juana.pacheco@funcionjudicial.gov.ec. Texto: "Estimada doctora, adjunto lo solicitado. Saludos cordiales". Se adjuntan las acciones de personal solicitadas y se materializan una a una. Procedo con la práctica. Acción de personal República del Ecuador, Función Judicial, número 08818-DP17-2022-BG, de fecha 15 de noviembre de 2022. Corte Provincial de Pichincha. Apellidos y nombres: Burbano Játiva Anacélida. Rige a partir del 16 de noviembre de 2022. Cédula de identidad 1711139756. Tipo de acción de personal: otros. Explicación: el abogado Santiago Espinel Ramírez, director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, en atención al informe emitido mediante memorando DP17-IUPH-2022-1432-M, TR DP17-2022-03640, de fecha 31 de octubre de 2022, suscrito por la Unidad Provincial de Talento Humano, autoriza el traslado temporal desde la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Pichincha a la Sala Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Pichincha, a fin de que reemplace temporalmente al doctor Carlos Vinicio Pasos Medina, quien actualmente se desempeña como conjuer en la Corte Nacional de Justicia. Continúa la acción de personal con los datos de situación actual, situación propuesta, dependencia, puesto, remuneración, lugar de trabajo y partida presupuestaria correspondiente. Registro número 08818, firmado electrónicamente por la coordinadora provincial de Talento Humano y por el director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, con fechas y horas que constan en el documento. A continuación, acción de personal República del Ecuador, Función Judicial, número 07960-DP17-2023-MP, de fecha 1 de agosto de 2023, correspondiente al doctor Marco Patricio Navarrete Sotomayor, rige a partir del 1 de agosto de 2023, tipo de acción de personal: reintegro. Explicación: la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, en atención a la disposición emitida mediante memorando circular CJ-DG-2022-3806-MC, TR CJ-INT-2022-24545, de fecha 31 de octubre de 2022, suscrito por el doctor Santiago Peñaherrera Navas, Director General del Consejo de la Judicatura, dispone

que se verifique que el doctor Patricio Navarrete Sotomayor no mantenga sanciones de destitución, inhabilidades, impedimentos legales, jubilación, retiro como pensionista ni pensiones alimenticias pendientes, y se dispone su reintegro conforme la situación propuesta. Con fundamento en lo establecido en el literal e) del artículo 2 de la Resolución número CJ-DG-2023-099, de 30 de mayo de 2023, emitida por la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la Dirección Provincial de Pichincha suscribe la presente. A situación actual. 11 situación propuesta: dependencia Corte Provincial de Pichincha, departamento Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito; puesto juez o jueza de la Corte Provincial; remuneración 5011; lugar de trabajo Quito, con la partida presupuestaria 2023-010-0017-0000-20-00-001-C31-51-05-10-17-01-001-7-9-60, fecha primero de agosto de 2023, firmado digitalmente por Marco Fabián Zurita Godoy y firmado digitalmente por Andrés Racines Molina, fecha y hora agosto de 2023, 17:39 y 47 segundos. Continúo. Acción de personal República del Ecuador, Función Judicial, número 00024-DP17-24-MB, de fecha 2 de enero de 2024. Corte Provincial de Pichincha. Fecha ninguna. Tres, Navarrete Sotomayor Marco Patricio. Cuatro, rige a partir del 2 de enero de 2024 hasta el 2 de junio de 2024. Cédula 170989806-6. Tipo de acción: subrogación. Nueve, explicación. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, en atención al pedido realizado por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a fin de que no se interrumpa la atención a los usuarios, autoriza la subrogación del despacho del citado tribunal conforme la situación propuesta por el día 10 de enero de 2024, en el horario de 14:00 hasta las 17:00, correspondiéndole todas las atribuciones del caso. Referencia: correo electrónico David Sebastián Palomeque Molina. Con fundamento en lo establecido en el literal E del artículo 2 de la Resolución CJ-DG-2023-099, de 30 de mayo de 2023, emitida por la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la Dirección Provincial de Pichincha suscribe la presente acción de personal. Situación actual: Corte Provincial de Pichincha. Departamento: Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la provincia de Pichincha. Puesto: juez o jueza de la Corte Provincial. Lugar de trabajo: Quito. Partida: 2024-010-0017-18976. Situación propuesta: dependencia Corte Provincial, departamentos Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; puesto jueza o juez de la Corte Provincial. Partida: el número de partida es evidente y, para leer la parte pertinente, voy a saltarme; sin embargo, ahí está la partida presupuestaria. Más abajo dice: "La persona que reemplaza, quien es el cargo con fecha Anacélida Burbano". Reemplaza entonces el doctor Navarrete a Anacélida Burbano, firmado digitalmente por Verónica del Pilar Suárez Álvarez, fecha de registro número 00024, fecha 2 de enero de 2024. Continúo. Acción de personal, República del Ecuador, Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, número 03441-DP-17-2024-SE. Fecha: 3 de junio de 2024. Uno, Corte Provincial. Tres, Navarrete Sotomayor Marco Patricio. Rige a partir del 3 de junio de 2024 hasta el 3 de diciembre de 2024. Tipo de acción de personal: subrogación. Explicación nueve: la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, en atención al pedido realizado por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a fin de que no se interrumpa la atención a los usuarios, autoriza la

-840-
ochocientos
cuarenta.



subrogación del despacho del citado tribunal conforme la situación propuesta, correspondiéndole todas las atribuciones del caso. Referencia electrónica: Jefferson Gutiérrez. Situación propuesta: Corte Provincial de Pichincha. Departamento: Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; puesto juez o jueza. Partida presupuestaria queda evidenciada a las partes. Situación propuesta: Corte Provincial de Pichincha, departamento Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; puesto juez o jueza. Partida sin número. La persona reemplaza a, es decir, el Dr. Navarrete reemplaza a Anacélida Burbano Játiva. Causal: cambio de dependencia. Número de registro 03441. Fecha: 3 de junio de 2024. Firmado electrónicamente por Tatiana Patricia Gutiérrez Torres y firmado digitalmente por Luis Osvaldo Ramón Moncayo. Termino la práctica de esta prueba y, bajo el principio de contradicción, solicito a su autoridad se corra traslado de la misma.

CONTRADICCIÓN PARTE ACTORA: Señor juez, la objeción que se determina respecto de toda la prueba planteada es, primero, que se ha practicado prueba inherente a fechas anteriores al acontecimiento, incluso al conocimiento de esta apelación; y otro elemento fundamental, el señor no puede hacer alegaciones; tiene que referirse directamente al principio de la contradicción. Está contradiciendo la prueba, no está haciendo una alegación. Dice que esa prueba es anterior. El inexperto abogado, obviamente, señor juez, la objeción que se plantea dentro de ese tema es que, primero, no se evidencia una pericia que establezca cómo es que informáticamente se constató que estos meses existen. Solamente se ha hecho alusión, y de una manera cansina, inclusive números que nada tienen que ver y fechas que no tienen que ver. Por tanto, la objeción de esta prueba es que no tiene que ser tomada en cuenta.

2) Factura número 001-006-0000-12550, mediante diligencia notarial 2025-170-108. Sí está compartiendo, no se ve nada. Por el principio de contradicción, tiene que poner en conocimiento a la otra parte. Tenga la orden. Doctor, solicito a su autoridad que, por medio de secretaría, se sienta una razón de si se visualiza la diligencia. En este momento se está visualizando y, nuevamente, le menciono, doctor, usted está practicando prueba; usted no puede solicitar a cada momento si tiene razón, está equivocado de diligencia, doctor. Y es obligación de nosotros, como juzgadores, el pedir aclaraciones y, en el dado caso de que no veamos bien los documentos que está presentando, el pedir que se los amplíe o se los descienda, se los indique para poder nosotros revisar y también la otra parte pueda contradecir. Así que tenga la bondad, doctor, actúe con lealtad procesal. No puede pedir certificaciones a cada momento para poder continuar; tenemos que hacerlo con lealtad procesal. Siga. Gracias. En este caso, pues queda asentado que se visualiza el documento y procedo a practicar. Sí, por favor, continúe. Factura número 001-006-000012550, mediante diligencia notarial 2025-170-108-2C-02-192. Estamos frente a una nota, a una materialización ante la Notaría 82, la Dra. Elizabeth Lina del Carmen Cárdenas Coronado. En su parte pertinente, la Dra. Juana Pacheco, desde el correo institucional de la Función Judicial, juana.pacheco@funcionjudicial.gob.ec, solicita el 9 de diciembre de 2025, a las 4:24, al correo electrónico archivo17.th@funcionjudicial.gob.ec, lo siguiente: solicito comedidamente lo

siguiente: uno, acciones de personal en los que se ha concedido licencias por vacaciones, por calamidad doméstica, por enfermedad, por asuntos personales y asuntos académicos, desde el día martes 7 de mayo de 2024 hasta la presente fecha, de los siguientes funcionarios: número uno, Dra. Juana Narcisa Pacheco Cabrera; número dos, Dr. Marco Patricio Navarrete Sotomayor; número tres, Dra. Inés Maritza Romero Estévez. Agradezco su atención. En respuesta del correo electrónico archivo17.th@funcionjudicial.gob.ec, remitido el 9 de diciembre de 2025 a las 4:55 p. m. al correo de la doctora juana.pacheco@funcionjudicial.gob.ec, tenemos lo siguiente: estimada doctora Juanita Pacheco, por medio del presente y en respuesta a su correo electrónico anterior, me permito adjuntar la información solicitada. Quedo a su disposición para cualquier consulta. Saludos cordiales. Vemos que está junto el archivo y, abajo, consecuentemente se procede a materializar. Acción de personal República del Ecuador número 05334-DP17-2024-SC, de fecha 13 de agosto de 2024. Uno, Corte Provincial de Pichincha. Tres, Romero Estévez Inés Maritza. Rige a partir del 15 de agosto de 2024 hasta el 23 de agosto de 2024. Cédula 171257730-1. Certificado de votación 035-0111. Tipo de acción de personal: vacaciones. Explicación: de conformidad con el artículo 96 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura autoriza 9 días de vacaciones por el período comprendido desde el 15 al 23 de agosto de 2024. Referencia: solicitud de vacaciones autorizada. Con fundamento en lo establecido en el literal G del artículo 2 de la Resolución número CJ-DG-2024-030, de 2 de febrero de 2024, emitida por la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la Dirección Provincial de Pichincha suscribe la presente acción de personal. Situación actual: Corte Provincial de Pichincha. Departamento: Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Pichincha. Puesto: juez o jueza de la Corte Provincial. Partida: se puede evidenciar. Situación propuesta: ninguna. La persona que reemplaza: ninguna. Fecha de registro de vacaciones: 05/03/24. Fecha: 13 de agosto de 2024. Firmado digitalmente por Tatiana Patricia López. **DRA. MARITZA ROMERO:** Tenga la bondad, doctor. ¿Me aclara cuál fue el funcionario que entregó acciones de personal que no eran de la doctora Pacheco y que me pertenecían? A mí me da el nombre, por favor. **MGS. BRAVO:** El correo electrónico es archivo17.th@funcionjudicial.gob.ec. No sabría yo cuántos de ahí remitieron; no hay. Ya, no hay una persona que haya remitido nombre y haya pedido las acciones de personal que no le pertenecían a la doctora y eran más personales; no hay un nombre. Déjeme leer. No se encuentra un nombre del funcionario de la Corte Provincial en esta materia; pues lo único que se denota es que existe el correo electrónico de la Función Judicial que está emitiendo la respuesta, honorable juez. Gracias. **DRA. ROMERO:** En ese sentido, doctor, le rogamos, por favor, conforme a las reglas que se establecen en el Código Orgánico General de Procesos, para practicar una prueba, sea testimonial, documental o pericial, ¿qué tipo de prueba es esta? ¿Nos puede aclarar, por favor? **MGS. BRAVO:** Documental, materialización de conformidad. **DRA. ROMERO:** ¿En base a qué artículo tenga la bondad? **MGS. BRAVO:** Claro que sí, conforme a los artículos 194, 196 y 202 del Código Orgánico General de Procesos. **DRA. ROMERO:** Nos puede indicar la autorización de protección de datos obtenida para esta prueba, por favor. **MGS. BRAVO:** Dígame el artículo de la protección de datos, honorable

0000

0023

841-

ochocientos
cuarenta
y uno

jueza. **DRA. ROMERO:** La Ley de Protección de Datos, es una base legal inmediata que corresponde y se tiene que cumplir de manera obligatoria. Yo, como juzgadora, y porque estoy practicando prueba, le estoy haciendo una pregunta aclaratoria de si nos puede indicar dónde está la autorización correspondiente que se obtuvo para obtener estos correos, estas acciones de personal personales sin mi autorización, porque las acciones de personal son más y yo no he dado ninguna autorización; así que por eso le estoy preguntando, doctor, ¿dónde está la autorización que he dado yo, que yo he solicitado para que se obtengan acciones personalísimas a través de un correo que no tiene ni nombre ni apellido? Que quede constancia. ¿Es un acta, por favor? **MGS. BRAVO:** Sí, ¿Desea que le responda entonces? **DRA. ROMERO:** En el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos, por favor, si también en base a eso usted nos aclara. **MGS. BRAVO:** Sí, claro. La prueba que fue anunciada fue aceptada su práctica; en todo caso, ya en su decisión se emitirá si es que se valora o no se valora la prueba. Más, sin embargo, pongo en su conocimiento que, al ser la autoridad pública, la información no está protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ni su Reglamento. Bien, gracias. **DRA. ROMERO:** Que quede constancia en el acta, por favor. Señor secretario, que el abogado ha dicho que no ha pedido autorización para obtener mis acciones de personal y publicarlas de manera pública en esta audiencia sin mi autorización; por favor, que quede en actas eso. Continúe. **MGS BRAVO:** Muchísimas gracias. La primera acción de personal número 05334-DP17-2024-SC ya fue practicada; fue firmada digitalmente por Tatiana Patricia Gutiérrez Torres y fue firmada digitalmente por María Patlova de los Ángeles Guerra Guerra. Si la autoridad judicial requería nombres de las firmas. **DRA. ROMERO:** Doctor, no le pedí firmas de quién firmaba las acciones de personal. Usted está desviándose totalmente de la pregunta. **MGS. BRAVO:** ¿Puedo seguir practicando la prueba? Quiero practicar la prueba. **DRA. ROMERO:** Le pedí una aclaración en relación con cuál fue la autoridad que firmó la concesión. Me dijo que no tenía. **MGS. BRAVO:** El problema es que el principio de continuidad de la práctica probatoria se ve interrumpido por algo que yo ya le respondí. **DRA. ROMERO:** Bueno, doctor, no ha respondido; que se quede en actas ya, para constancia, lo que señaló. Sí. **MGS. BRAVO:** Acción de personal República del Ecuador número 06730-DP17-2024-SEC, de fecha 19 de septiembre de 2024, Corte Provincial de Pichincha. Acción de personal de Romero Estévez Inés Maritza, rige a partir del 20 de septiembre de 2024 hasta el 20 de septiembre de 2024. Cédula de ciudadanía 171257730-1. Certificado de votación 035-0111. Tipo de acción de personal: vacaciones. Nueve, explicación. De conformidad con el artículo 96 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura autoriza un día de vacaciones por el 20 de agosto de 2024. Referencia: solicitud de vacaciones autorizada. Firma esta solicitud; el número de registro es 06730. Fecha: 19 de septiembre de 2024. Firmado digitalmente por Tatiana Patricia Gutiérrez Torres. Firmado digitalmente por Henry Orlando Gaibor Flores. Continuando con la práctica de esta prueba, nos remitimos a la acción de personal número 06731-DP17-2024-SE, de 20 de septiembre de 2024. Número uno, Corte Provincial de Pichincha. Número tres, Romero Estévez Inés Maritza. Rige a partir del 30 de septiembre de 2024. Rige hasta el 6 de octubre de 2024. Cédula de identidad 171257730-1. Certificado de votación 035-0111. Tipo de acción de personal: vacaciones. Explicación: de

conformidad con el artículo 96 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura autoriza 7 días de vacaciones por el período comprendido desde el 30 de septiembre al 6 de octubre de 2024. Referencia: solicitud de vacaciones. Firmado legalmente la acción de personal de vacaciones por Tatiana Patricia Gutiérrez Torres. Firmado digitalmente por Henry Orlando Gaibor Flores. Continuando con la práctica de la prueba, tenemos la acción de personal número 08379-DP17-2024-S, de 5 de diciembre de 2024. Acción de personal de Romero Estévez Inés Maritza, que rige a partir del 9 de diciembre de 2024 hasta el 10 de diciembre de 2024. Cédula de identidad 171257730-1. Certificado de votación 035-0111. Tipo de acción de personal: vacaciones. Nueve, explicación: de conformidad con el artículo 96 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura autoriza dos días de vacaciones por el período comprendido desde el 9 al 10 de diciembre de 2024. Referencia: solicitud de vacaciones, firmado digitalmente por Tatiana Patricia Gutiérrez Torres; número de registro 08379, fecha 5 de diciembre de 2024, y firmado por Henry Orlando Gaibor Flores. Continuando con la práctica de la prueba, tenemos la acción de personal número 08644-DP17-2024-VS, de 15 de diciembre de 2024. Acción de personal de Romero Estévez Inés Maritza, que rige a partir del 26 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. Cédula ya se ha manifestado es la misma; la acción de personal de la misma jueza, certificado de votación el mismo; tipo de acción de personal: vacaciones. Explicación: se le concede 6 días de vacaciones por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. Esta acción de personal es firmada por Tatiana Patricia Gutiérrez Torres y Henry Orlando Gaibor Flores, con número de registro 08644 y fecha 15 de diciembre de 2024. Continúo con la práctica probatoria. Acción de personal número 00262-DP17-2025-ESE, a nombre de Romero Estévez Inés Maritza. Rige a partir del 24 de diciembre de 2024 hasta el 24 de diciembre de 2024. Tipo de acción de personal: licencia con remuneración. Explicación: de conformidad con el artículo 97, numeral 1, del Código Orgánico de la Función Judicial, y de acuerdo con lo establecido en el literal K del Código Orgánico de la Función Judicial, la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura legaliza la licencia con remuneración por enfermedad por el lapso de 1 día, correspondiente al 24 de diciembre de 2024. Referencia: formulario para uso de licencia, autoridad autorizada, certificado médico. El registro es el 00262 de esta licencia con remuneración por enfermedad, de fecha 14 de enero de 2025, firmado digitalmente por Tatiana Patricia Gutiérrez Torres y firmado digitalmente por Henry Orlando Gaibor Flores. Siguiendo, acción de personal número 00884-DP17-2025-SE, de 14 de febrero de 2025, Corte Provincial de Pichincha, acción de personal de Romero Estévez Inés Maritza, rige a partir del 12 de febrero de 2025 hasta el 12 de febrero de 2025. La cédula es la misma de la doctora jueza, certificado de votación el mismo, tipo de acción de personal: licencia con remuneración. Explicación: de conformidad con el numeral 2 del artículo 97 del Código Orgánico de la Función Judicial y de acuerdo con lo establecido en el literal I del artículo 2 de la Resolución número CJ-DG-2024-280, de 18 de octubre de 2024, la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura legaliza la licencia con remuneración por calamidad doméstica por el plazo de un día durante el 12 de febrero de 2025. Referencia: solicitud de licencia, correo electrónico y certificado médico del hijo, y copia de cédula de ciudadanía.



Número de registro de esta licencia con remuneración 00884, fecha 14 de febrero de 2025, firmado digitalmente por Tatiana Patricia Gutiérrez Torres y por Henry Orlando Gaibor Flores. Siguiendo, acción de personal número 010704-DP17-2025-SE, de fecha 24 de febrero de 2025. Acción de personal a nombre de Romero Estévez Inés Maritza, rige a partir del 13 de febrero de 2025 hasta el 14 de febrero de 2025. Misma cédula, mismo certificado de votación. Tipo de acción de personal: licencia con remuneración. En este caso se le autoriza y legaliza la licencia de dos días desde el 13 hasta el 14 de febrero de 2025. Con fecha de registro 01/07/04, de fecha 24 de febrero de 2025, firmado digitalmente por Tatiana Patricia Gutiérrez Torres y por Henry Orlando Gaibor Flores. Siguiendo, acción de personal número 03226-DP17-2025-SE, de fecha 20 de mayo de 2025. Acción de personal de Romero Estévez Inés Maritza, rige del 21 de mayo de 2025 al 22 de mayo de 2025. Misma cédula, mismo certificado de votación. Se le autorizan dos días de vacaciones desde el 21 al 22 de mayo de 2025. Registro número 03226, fecha 20 de mayo de 2025, firmado por Héctor Javier Romero Ortiz y por Henry Orlando Gaibor Flores. Siguiendo, acción de personal número 03620-DP17-2025-CC, de fecha 4 de junio de 2025, acción de personal de Romero Estévez Inés Maritza, rige a partir del 6 de junio de 2025 hasta el 6 de junio de 2025. Misma cédula, mismo certificado de votación. Tipo de acción de personal: vacaciones. Se le autoriza un día de vacaciones por el 6 de junio de 2025. Registro número 03620, fecha 4 de junio de 2025. Firmado por Héctor Javier Romero Ortiz y firmado por Henry Orlando Gaibor Flores. Siguiendo, acción de personal número 06536-DPE17-2025-CC, de fecha 15 de agosto de 2025. Acción de personal de Romero Estévez Inés Maritza, rige a partir del 18 de agosto de 2025 hasta el 28 de agosto de 2025. Misma cédula, mismo certificado de votación. Tipo de acción de personal: vacaciones. La Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura autoriza 11 días de vacaciones por el período comprendido del 18 al 28 de agosto de 2025. Referencia: solicitud de vacaciones. Registro número 06536, fecha 15 de agosto de 2025, firmado digitalmente por Mariela Fernanda Cerón Astudillo y firmado digitalmente por Henry Orlando Gaibor Flores. Siguiendo, acción de personal número 08069-DP17-2025-VS, de fecha 17 de octubre de 2025. Acción de personal de Romero Estévez Inés Maritza, rige a partir del 21 de octubre de 2025 hasta el 26 de octubre de 2025. Misma cédula, mismo certificado de votación. Tipo de acción de personal: vacaciones. En este caso, la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura autoriza 6 días de vacaciones por el período comprendido desde el 21 al 26 de octubre de 2025. Registro número 08069, fecha 17 de octubre de 2025, firmado digitalmente por Mariela Fernanda Cerón Astudillo y firmado digitalmente por Henry Orlando Gaibor Flores.

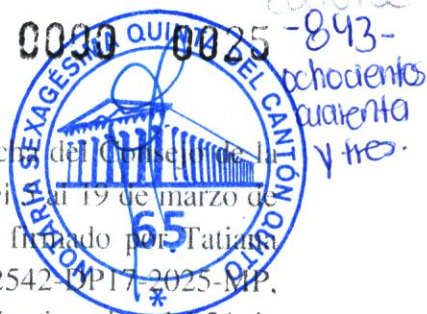
CONTRADICCIÓN PARTE ACTORA: Como objeción a la prueba, señor juez, se debe tomar en consideración que inclusive la señora jueza de la Corte Provincial ha manifestado que no autoriza que se utilicen sus datos personales porque contraviene lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos; que se tome en consideración este particular y, aparte de ello, tampoco ha logrado demostrar cómo es que existe una pericia informática respecto a los medios que hay en su evolución. Por tanto, tiene que ser desatendida y no valorada.

3) 3, 9, 1, 4, 5, 1, 3, 9, 4, 3, 9, 4. Solicito a los miembros del tribunal determinar si es que se observa la prueba para poder practicarla. **DR. ROMERO:** Perdón, doctor, ya manifesté que no autorizo la utilización de mis datos personales; hay una Ley de Protección de Datos y he señalado que no autorizo expresamente. Posteriormente el tribunal en conjunto resolverá en relación con esto, pero ahí se ha hecho referencia porque son mis datos personales, acciones de personal que no sé cómo las han obtenido, se investigará posteriormente, y no autorizo la utilización de mis datos personales. Mi solicitud fue clara. **MGS. BRAVO:** ¿Puedo continuar? ¿Se evidencia la prueba que quiero practicar para poder continuar? **DR. NAVARRETE:** Sí, sí, se observa. Gracias. **MGS. BRAVO:** Continúo entonces con la práctica de la prueba. Factura de materialización notarial número 001-006-000012549, mediante diligencia notarial 2025-170-1082-C-02-191. Materialización realizada en la Notaría 82 ante la notaria Dra. Elizabeth Lina del Carmen Cárdenas Coronado. En la parte pertinente de la materialización consta un correo enviado desde el de la Dra. Juana Pacheco, del correo institucional de la Función Judicial juana.pacheco@funcionjudicial.gob.ec, el 9 de diciembre de 2025 a las 4:24 p. m., para el correo electrónico archivo17.th@funcionjudicial.gob.ec. Solicito comedidamente lo siguiente: número uno, acciones de personal en los que se ha concedido licencia por vacaciones, por calamidad doméstica, por enfermedad, asuntos personales y asuntos académicos, desde el día martes 7 de mayo de 2024 hasta la presente fecha, de los siguientes funcionarios: uno, Dra. Juana Narcisa Pacheco Cabrera. Continúo. La respuesta del correo electrónico archivo17.th@funcionjudicial.gob.ec para juana.pacheco@funcionjudicial.gob.ec es del 9 de diciembre de 2025 a las 4:55 p. m., en donde se indica: "Estimada Dra. Juanita Pacheco, por medio de la presente y en respuesta a su correo electrónico anterior, me permito adjuntar la información solicitada. Quedo a su disposición para cualquier consulta. Saludos cordiales". Se puede evidenciar que está cargada la información solicitada en el correo y, más abajo, está materializado, y procedo a practicar la parte pertinente de las acciones de personal. ¿Qué dice? Acción de personal número 03242-DP17-2024-SE, de 22 de mayo de 2024. Acción de personal de Pacheco Cabrera Juana Narcisa. Rige a partir del 6 de mayo de 2024 hasta el 20 de mayo de 2024. Cédula 140033359-5, certificado de votación 007-0035, tipo de acción de personal: vacaciones. La Dirección Provincial de Pichincha autoriza 15 días de vacaciones por el período comprendido del 6 al 20 de mayo de 2024 a la doctora Narcisa Pacheco. Registro número 03242, fecha 22 de mayo de 2024, firmado digitalmente por Tatiana Gutiérrez y por Luis Osvaldo Ramón Moncayo. Continuando con la práctica de la prueba, tenemos la acción de personal número 07911-DP17-2024-SE, de 14 de noviembre de 2024, acción de personal de Pacheco Cabrera Juana Narcisa, rige a partir del 19 de noviembre de 2024 hasta el 24 de noviembre de 2024, misma cédula, mismo certificado de votación, tipo de acción de personal: vacaciones. La Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura autoriza 6 días de vacaciones desde el 19 al 24 de noviembre de 2024. Registro número 07911, fecha 14 de noviembre de 2024, firmado por Tatiana Gutiérrez y por Henry Orlando Gaibor Flores. Continuando con la práctica probatoria, tenemos la acción de personal número 00936-DP17-2025-VS, de 24 de febrero de 2025. Acción de personal de Pacheco Cabrera Juana Narcisa, rige del 5 de marzo de 2025 hasta el 19 de marzo de 2025. Misma cédula, mismo certificado de votación, acción

de personal: vacaciones. Explicación: la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura autoriza 15 días de vacaciones por el período comprendido del 19 de marzo de 2025. Fecha de registro número 00936, fecha 24 de febrero de 2025, firmado por Tatiana Gutiérrez y por Henry Gaibor. Siguiendo, acción de personal número 02542-DP17-2025-MP, de 16 de abril de 2025. Acción de personal de Pacheco Cabrera Juana Narcisa, rige del 21 de abril de 2025 hasta el 23 de abril de 2025. Misma cédula, mismo certificado de votación, acción de personal tipo vacaciones. La Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura autoriza tres días de vacaciones desde el 21 al 23 de abril de 2025. Referencia: vacaciones. Registro número 02542, fecha 16 de abril de 2025, firmado por Héctor Roma y Henry Gaibor. Continuando, acción de personal número 04052-DP17-2025-MP, fecha 18 de junio de 2025. Acción de personal de Pacheco Cabrera Juana Narcisa, rige del 18 de junio de 2025 hasta el 19 de junio de 2025. Misma cédula, mismo certificado de votación, tipo de acción de personal: vacaciones. El Consejo de la Judicatura autoriza dos días de vacaciones desde el 18 al 19 de junio de 2025. Fecha de registro de la acción de personal 04052, fecha 18 de junio de 2025, firmado por Héctor Roma y Henry Gaibor. Continuando, acción de personal número 06260-DP17-2025-VS, fecha 10 de agosto de 2025. Acción de personal de Pacheco Cabrera Juana Narcisa, rige a partir del 12 de agosto de 2025 hasta el 13 de agosto de 2025. Misma cédula, mismo certificado de votación, tipo de acción de personal: vacaciones. El Consejo de la Judicatura autoriza dos días de vacaciones por el período comprendido del 12 al 13 de agosto de 2025. Fecha de registro de la acción de personal de vacaciones 06260, fecha 10 de agosto de 2025, firma Mariela Fernanda Cerón Astudillo y Henry Orlando Gaibor Flores. Continuando, acción de personal número 07109-DPE-17-2025-CC, de fecha 5 de septiembre de 2025. Acción de personal de Pacheco Cabrera Juana Narcisa, rige a partir del 9 de septiembre de 2025 hasta el 11 de septiembre de 2025. Misma cédula, mismo certificado de votación, tipo de acción de personal: vacaciones. El Consejo de la Judicatura autoriza 3 días de vacaciones por el período del 9 hasta el 11 de septiembre de 2025. Referencia: vacaciones. Registro de la acción de personal de vacaciones 07109, fecha 5 de septiembre de 2025, firma Mariela Fernanda Cerón Astudillo y firma Henry Orlando Gaibor Flores. Continuando, acción de personal número 08422-DP17-2025-SE, de fecha 30 de octubre de 2025. Acción de personal de Pacheco Cabrera Juana Narcisa, rige a partir del 5 de noviembre de 2025 hasta el 6 de noviembre de 2025. Misma cédula, mismo certificado de votación, tipo de acción de personal: vacaciones. El Consejo de la Judicatura autoriza dos días de vacaciones por el período comprendido desde el 5 al 6 de noviembre de 2025. Número de registro 08422, fecha 30 de octubre de 2025. Firma Mariela Fernanda Cerón Astudillo y firma Henry Orlando Gaibor Flores. He terminado la práctica de esta prueba.

CONTRADICCIÓN PARTE ACTORA: No tenemos ninguna objeción.

4) Factura número 001-006-0000-12548. Diligencia notarial 2025-170-1082-C-02-190. Materialización ante la Notaría 82 de la Dra. Elizabeth Lina del Carmen Cárdenas Coronado. En la parte pertinente, el 9 de diciembre de 2025 a las 4:24 p. m., del correo electrónico juana.pacheco@funcionjudicial.gob.ec, se hace una solicitud al correo



archivo17.th@funcionjudicial.gob.ec, en donde la doctora Juana Pacheco indica lo siguiente: solicito comedidamente lo siguiente, acciones de personal en los que se ha concedido licencia por vacaciones, por calamidad doméstica, por enfermedad, asuntos personales y asuntos académicos, desde el día martes 7 de mayo de 2024 hasta la presente fecha, de los siguientes funcionarios. En la parte pertinente, número dos, Dr. Marco Patricio Navarrete Sotomayor. Agradezco su atención. En respuesta, el mismo día 9 de diciembre de 2025 a las 4:55 p. m., se responde del correo electrónico archivo17.th@funcionjudicial.gob.ec al correo juana.pacheco@funcionjudicial.gob.ec, lo siguiente: "Estimada Dra. Juanita Pacheco, por medio del presente y en respuesta a su correo electrónico anterior, me permito adjuntar la información solicitada. Quedo a su disposición para cualquier consulta. Saludos cordiales". Se anexa la respuesta y se materializa mediante la acción de personal número 05230-DP17-2024-MP, de 13 de agosto de 2024. Acción de personal del Dr. Navarrete Sotomayor Marco Patricio, rige a partir del 12 de agosto de 2024 hasta el 26 de agosto de 2024. Cédula 1709898066. Acción de personal: vacaciones. Explicación: el Consejo de la Judicatura autoriza al Dr. Navarrete 15 días de vacaciones por el período comprendido desde el 12 al 26 de agosto de 2024. Referencia: solicitud de vacaciones. Número de registro del documento 05230, fecha 13 de agosto de 2024. Consta con la partida presupuestaria que queda evidenciada, firmado digitalmente por Tatiana Patricia Gutiérrez Torres y por María Patlova de los Ángeles Guerra Guerra. Continuando, acción de personal número 08884-DP17-2024-SE, de 20 de diciembre de 2024. Acción de personal de Navarrete Sotomayor Marco Patricio, rige a partir del 26 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. Cédula la misma, certificado de votación no consta, tipo de acción de personal: vacaciones. El Consejo de la Judicatura autoriza 6 días de vacaciones por el período comprendido del 26 al 31 de diciembre de 2024. Partida presupuestaria: consta en evidencia. Número de registro de la acción de personal de vacaciones 08884, fecha 20 de diciembre de 2024, firmado por Tatiana Patricia Gutiérrez Torres y por Henry Orlando Gaibor Flores. Continuando, acción de personal número 03277-DP17-2025-S, de fecha 22 de mayo de 2025. Acción de personal de Navarrete Sotomayor Marco Patricio, rige a partir del 26 de mayo de 2025 hasta el 13 de junio de 2025. Misma cédula, tipo de acción de personal: vacaciones. El Consejo de la Judicatura autoriza 19 días de vacaciones por el período comprendido desde el 26 de mayo al 13 de junio de 2025. Referencia: solicitud de vacaciones. Partida presupuestaria: el número queda evidenciado. El registro de la acción de personal de vacaciones es el número 03277, de fecha 22 de mayo de 2025, firmado por Héctor Poma y por Henry Gaibor. Continuando, acción de personal número 07336-DP17-2024-MP, de 18 de octubre de 2024. Acción de personal de Navarrete Sotomayor Marco Patricio, rige del 5 de noviembre de 2024 al 5 de noviembre de 2024. Misma cédula, tipo de acción: licencia con remuneración. Explicación: el Consejo de la Judicatura autoriza la licencia con remuneración por formación académica en el lapso de un día, que se llevará a cabo el 5 de noviembre de 2024. La partida queda evidenciada. Registro número de la acción de personal 07336, fecha 18 de octubre de 2024, firmado por Tatiana Gutiérrez y por Henry Gaibor. Continuando, en este momento, de la misma prueba, voy a proceder a abrir otro PDF. Acción de personal número 06230-DP17-2025-CC, fecha 8 de agosto de 2025. Acción de personal de Navarrete Sotomayor Marco Patricio, rige a partir del

12 de agosto de 2025 al 13 de agosto de 2025. Misma cédula, tipo de acción de personal: vacaciones. El Consejo de la Judicatura autoriza dos días de vacaciones desde el 12 de agosto de 2025. La partida queda evidenciada. El registro de la acción de personal de vacaciones es el 06230, fecha 8 de agosto de 2025, firmado por Mariela Cero y por Henry Orlando Gaibor Flores. Con esto termino la práctica de esta prueba.



CONTRADICCIÓN PARTE ACTORA: Solamente establecer como objeción que no existe una base legitimadora, como así lo dispone la Ley de Protección de Datos, para que se puedan utilizar datos personales, y que no se ha podido demostrar cómo es que se obtuvo esta autorización para que se puedan utilizar los datos del señor juez Navarrete Sotomayor Marco Patricio; aparte de aquello también, que no se evidencia que exista una pericia informática de los e-mails que se han hecho al juez.

5) Factura número 001-006-000012547, mediante diligencia notarial 2025-170-10812-C-02-189, ante la Notaría 82, la doctora notaria Elizabeth Lina del Carmen Cárdenas Coronado. En la parte pertinente de la materialización consta del correo electrónico juana.pacheco@funcionjudicial.gob.ec, enviado el 9 de diciembre de 2025 a las 4:57 p. m., para Segundo Ruperto Amaguai Ushca, al correo electrónico ruperto.amahuay@funcionjudicial.gob.ec, con copia a Gina Germania Paladines Loza, al correo electrónico gina.paladines@funcionjudicial.gob.ec, en donde indica: "Saludos cordiales, distinguidos ingenieros, solicito comedidamente lo siguiente: uno, el reporte de audiencias fallidas del Tribunal Quinto de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro del período comprendido desde el 16 de noviembre de 2022 hasta el 2 de enero de 2024. Agradezco su atención". En respuesta al correo tenemos lo siguiente: el correo electrónico carlos.volaños@funcionjudicial.gob.ec, el 10 de diciembre de 2025 a las 13:58 p. m., para el correo juana.pacheco@funcionjudicial.gob.ec, para ruperto.amahuay@funcionjudicial.gob.ec y para gina.paladines@funcionjudicial.gob.ec, en donde indica: "Estimada Dra. Pacheco, en el archivo Excel adjunto encontrará la información solicitada. Saludos". Se encuentra en los archivos adjuntos, que se proceden a materializar. Y tenemos que, del juicio número 17284-2021-00842, agendamiento: fecha de actividad para el 2022-11-16, judicatura 17124, login juez ines.romero, ag-tipo audiencia telemática, ag-estado diferida. Hora de inicio 2022-11-16 09:00:00, hora fin 2022-11-16 09:15:00. Login milton.tapia. Del juicio número 17282-2021-01851, fecha de agendamiento de actividad 2022-11-17 a las 00:00, judicatura 17124, login juez juana.pacheco, ag-tipo audiencia telemática, ag-estado diferida, hora de inicio 2022-11-17 a las 09:00, hora fin 2022-11-17 a las 09:15. Juicio número 17571-2022-00591, fecha de agenda de actividad para la audiencia 2022-11-18 00:00, judicatura la misma 17124, login juez juana.pacheco, ag-tipo audiencia telemática, ag-estado diferida, hora de inicio 2022-11-18 a las 14:30, hora fin 2022-11-18 a las 14:45:00. Login Fernanda Burbano. **DRA. ROMERO:** Doctor, perdón, señor presidente, tenga la bondad. ¿Estamos, vamos a extender los días así? Simplemente es la prueba documental, pericial; en este caso, que dice que es prueba documental, por favor, que se informe a través de su secretaría, en tal caso, que lea la

parte pertinente, porque esto vamos a demorarnos días y sigue con cosas que no tienen que ver con relación a la demanda de recusación. **DR. NAVARRETE:** Doctor Bravo, tiene que explicarnos también por qué es útil, conducente, pertinente, y tiene que tener un resumen, por lo menos, de esta información que nos están dando. **MGS BRAVO:** La conducencia, pertinencia y utilidad se expone en el anuncio probatorio y en esa etapa procesal en donde yo adjunté todas, donde yo anuncié todas estas materializaciones; se dejó a su autoridad, pasó tanto a practicársele la prueba de la parte accionante como mi prueba, por lo que no es momento de hablar de la utilidad. Entonces, en ese sentido, luego de la práctica probatoria, lo que viene es la valoración por parte del tribunal. Pero la práctica de la prueba debe darse. Ahora bien, si es que usted quiere que le hable de la utilidad, pertinencia y conducencia, no se habla caso en la demanda de recusación de un retardo injustificado. Con esta prueba, y lamentablemente me toca hacer la alegación respondiendo a su autoridad, con esta prueba se demuestran todas las audiencias fallidas que existen desde el 2022 hasta el 2025, en razón de que estuvo nueve meses el tribunal desintegrado, porque la doctora jueza Burbano se fue. **DRA. ROMERO:** Usted sabe que no solo es un juez, somos un tribunal. Lo que le estamos señalando es que, si es que usted no sabe el derecho procesal, tanto en materia civil como penal, usted tiene que fundamentar y señalar de manera oral, y tiene que presentar su prueba e indicar la pertinencia de la misma de manera oral para introducirla o no como prueba. Está además aquí la otra parte y, por el principio de contradicción, usted tiene que señalar cuál es la parte pertinente y conducente en relación con la demanda que ha presentado de recusación, puesto que usted acaba de hacer una alegación que tampoco era permitida. Usted ha seguido hablando sin que pueda explicar, hasta el momento, cuál es la pertinencia en relación con la demanda de recusación que la ha hecho en relación con una causa determinada y usted está aquí hablándonos desde el año 2020. Sin embargo, la demanda de recusación ha hecho relación a una acción de protección presentada en determinada fecha, en un espacio de tiempo al que tiene que hacer usted relación. Entonces, le rogamos, por favor, señale esto porque no podemos, de ninguna manera, coartar su derecho a la defensa, evidentemente, pero también usted tiene la obligación de actuar con lealtad procesal en esta audiencia. Tenga la bondad. Le rogamos que se limite a explicar cuál es la pertinencia de presentar archivos desde el año 2020, que, a lo que vemos, tampoco están perjudicados en esta demanda de recusación de una causa que ha señalado el accionante y aquí demandante, que ha sido desde el año 2023 o 2024; lo que debería señalar, por favor, es el espacio, tiempo y lugar. **MGS. BRAVO:** Lo que tengo que manifestar entonces es que sí, el principio de la oralidad se da; los alegatos no se pueden leer, por supuesto, pero la misma ley, el Código Orgánico General de Procesos, indica que la prueba se debe leer en la parte pertinente. Ahora bien, ya le manifesté sobre la concurrencia, pertinencia y utilidad. Estamos indicando que los despachos de las causas deben darse en el orden en que van llegando, no por decisión mía, sino por resoluciones de las máximas cortes de esta nación. Ahora bien, si es que ustedes ahorita me indican que yo no puedo leer cuántas audiencias fallidas, que es la parte pertinente de la prueba que estoy entregando a su autoridad, le recuerdo que yo también pedí que la audiencia sea presencial; sin embargo, se me negó y estamos aquí tratando de practicar la prueba para ejercer el legítimo derecho a la defensa de mi cliente, consagrado en varios convenios internacionales y



-845-
ochocientos
cuarenta
y
cinco.

en la Constitución de la República. **DR. NAVARRETE:** Doctor, no le hemos negado su derecho a la defensa; le decimos que se ciña a las fechas que ha hecho en relación con la demanda de recusación, exclusivamente, por favor, doctor, porque usted está hablando desde el año 2020. Tenga la bondad. **MGS. BRAVO:** Por supuesto, y es que son estas causas desde el año 2022, no desde el año 2020, porque aquí los procesos llevan fecha, como con el ratón le indico, 2022, honorable juez, y esas son las causas que se deben despachar en el orden que van llegando. **DRA. ROMERO:** Entonces, ahí está y yo lo dejo a su criterio, porque en el momento en que a mí se me aclare, se me indique de manera oral, nos aclare el reglamento o resolución de la Judicatura en el cual se establezca que deben despacharse las causas conforme al orden que usted ha señalado, por favor. **MGS. BRAVO:** Por supuesto, pero mejor aún, doctora, remitámonos a la Constitución de la República del Ecuador, al derecho a la igualdad formal y material. Es decir, que el día de mañana, si yo despacho causas del 2025, teniendo causas del 2022, entonces tendremos cuántos FO6, y esta vez puede hacer que también los FO6 les lleguen no solo a la doctora ponente, sino a los demás miembros del tribunal. Basta con ese artículo: derecho a la igualdad formal y material; no puede despacharse una causa actual si no se han despachado causas en el orden en que van llegando. Ahora bien, queda a su criterio entonces. ¿Me van a dejar en el ejercicio del derecho a la defensa de mi cliente practicar la prueba, demore lo que tenga que demorarse, honorables jueces? Ustedes están en sus cargos justamente para conocer y resolver la práctica de estas pruebas. **DR. NAVARRETE:** El doctor Darío Velástegui tiene la palabra, por favor. **DR. VELÁSTEGUI:** Muchas gracias, señor presidente. Lo único que está haciendo la defensa técnica de la recusada es incidentar el proceso. Claramente tiene que advertirse, señores jueces, que nosotros estamos hablando de una recusación de una materia constitucional que se presentó en el año 2024. Y, aparte de aquello, señor juez, el hecho de que, obviamente, el tema de la insolencia con la que se dirige la defensa técnica de la parte recusada hacia ustedes, también tiene que ser sancionado, señores jueces. Ustedes se merecen todo el respeto, pero el señor creo que no sabe de respeto y mucho menos de derecho. Tenemos que nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, pero la manera como usted está presentando la prueba nos va a tener aquí días y días. **DR. NAVARRETE:** Doctor Bravo, tiene que tener una manera más ágil, por lo menos decirnos desde qué fecha y cuántas audiencias están fallidas, no una por una, porque si no nos vamos a demorar, señor. Y ya lo mencionamos: la demanda claramente se ha presentado en el año 2024, doctor, tenga la bondad. Usted está leyendo desde el año 2022, en relación con las causas constitucionales que son las que nos llevan a esta demanda de recusación. Tenga la bondad. **MGS. BRAVO:** Honorables magistrados, yo no estoy hablando del fondo del porqué cada audiencia se dio fallida; estoy leyendo literalmente el número de juicio, la fecha de la actividad, la fecha del agendamiento, la judicatura, que es el tribunal que ustedes integran, el juez ponente, la audiencia telemática, por qué se difiere la audiencia, la hora de inicio de la audiencia y la hora de fin de la audiencia. Entonces, ¿Cómo más resumo estas audiencias fallidas? Nuevamente, es para demostrar que no existe un retardo injustificado. Si ustedes me dicen ahora que quieren que lea solo una parte, díganmelo y yo lo haré; pero en ese sentido, y desde ya advierto, que con todas las faltas al debido proceso, se presentará en su debido momento y, de

ser el caso, la respectiva acción extraordinaria de protección. **DR. VELÁSTEGUI:** ¿Se está intimidando al tribunal? No, no, está pretendiendo amenazar, por favor. **DRA. ROMERO:** Señor juez ponente, doctor, usted no está dirigiendo la audiencia; tenga la bondad de dirigirse con respeto a los señores jueces. Usted está en una audiencia de carácter formal; esto no es una práctica universitaria, es una audiencia de carácter formal. Y le pido, señor presidente, por favor, aquí el mayor respeto entre las partes, tanto de la parte accionante como de la parte demandada; los dos tienen que respetar a este tribunal y, de no hacerlo, se observará conforme lo establece el Código Orgánico General de Procesos o el Código Orgánico de la Función Judicial. **DR. NAVARRETE:** Tenga la bondad, doctor Bravo, siempre se le está proporcionando un amplio derecho a la defensa, se le está escuchando, pero usted también tiene que considerar que debe aplicarse una manera más técnica, porque no nos va a leer cuántas causas; ni siquiera nos ha dicho cuántas causas son en la totalidad de las que está dando lectura. **MGS. BRAVO:** Respondiendo al honorable magistrado, son 165 audiencias fallidas. **DR. NAVARRETE:** ¿Desde qué año hasta qué año? **MGS. BRAVO:** Desde el momento en que se desintegró el tribunal, cuando la doctora Burbano se fue como jueza de la Sala de Familia, hasta la actualidad. **DR. NAVARRETE:** ¿Cuántas dijo? Audiencias fallidas. **MGS. BRAVO:** Ciento setenta y cinco, aproximadamente son 175 audiencias fallidas. Estas audiencias fallidas son desde que salió la doctora Burbano y el tribunal quedó desintegrado solo con dos miembros, hasta que, mediante la acción de personal que ya se practicó como prueba, usted se integró al tribunal. Cinco. Proceso 17282 2022 000595. Fecha de agendamiento de la actividad: 22 de noviembre de 2022. Judicatura: la misma, el Tribunal Quinto 17124. Recae en la doctora Inés Romero. Agenda: tipo audiencia telemática, diferida. Hora de inicio: 22 de noviembre de 2022, 09:00. **DRA. ROMERO:** Doctor, perdón, nuevamente le acabamos de señalar que desde el año 2024, y sigue con el año 2022. Tenga la bondad, doctor. Límitese exclusivamente a lo que el tribunal ha señalado, desde el año 2024, que es la fecha que ha señalado el accionante. Le rogamos que nos señale desde el año 2024 en adelante, para que se pueda tener pertinencia en relación con esta prueba. Muy amable. **MGS. BRAVO:** Solicito una aclaración, honorable jueza, y me va a decir que no es un auto interlocutorio el que está emitiendo, pero lamentablemente es desde esa fecha que las causas están atrasadas, porque el tribunal se encontraba desintegrado, y desde la incorporación del doctor Navarrete es que se están despachando todas esas causas. La causal, vuelvo y repito, es la número cinco del artículo 22: retardo injustificado en el despacho de las causas. Entonces, si es que lamentablemente usted lo que me está diciendo ahora, es que me niega practicar la prueba de las audiencias fallidas del año 2022 hasta el año 2024, dígame en este momento que me niegue practicar esa prueba y yo procedo a practicar únicamente lo que usted me está pidiendo. Pero resuelva. **DRA. ROMERO:** Entonces, doctor, perdón, está usted tratando de intimidarnos. Perdón, doctor, usted lo único que tiene que hacer es practicar la prueba. Disculpeme, doctor, con todo el respeto que usted se merece, estamos ante un tribunal y usted está evidenciando una total falta de lealtad procesal; incluso, de manera personal, sus gestos, su forma y su actuación dentro de esta audiencia son totalmente desleales. Tenga la bondad, esto no es un evento público de carácter informal; hay normas y reglas de las audiencias y usted ha irrespetado todo este tiempo a los dos señores jueces. Tenga la bondad, si usted

ochocientos
cuarenta
y
seis.

continúa en ese sentido, nosotros vamos a tener que tomar alguna resolución al respecto porque usted está en una actitud totalmente contraria hacia estos señores jueces. Así que tenga la bondad: si usted no va a practicar la prueba para ir concluyendo con lo que está y poder analizar lo que se ha presentado. **DR. NAVARRETE:** Doctor, con la prueba que usted está practicando en este momento ya nos ha explicado, en base a la pregunta aclaratoria que yo le realicé, que se han diferido, a partir de que la doctora Anacélida Burbano ya no pasó a ser integrante de este tribunal, audiencias fallidas o diferidas, ciento setenta y cinco, hasta que me integré yo al tribunal. Y tiene la razón, yo desde el inicio les manifesté que se tiene que actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, con los principios de buena fe y lealtad procesal, pero usted no puede tenernos toda la noche leyendo desde el año 2022, las audiencias telemáticas diferidas, porque ya ha quedado claro su punto, el punto al cual usted quiere ceñirse. **MGS. BRAVO:** Doctor, en ese caso, honorable magistrado, entiendo, no sé si es que a ustedes, los miembros del tribunal, les parece que se indique entonces y que se exponga a la vista de todos, porque también obra en físico, dentro de los recaudos procesales, estas aproximadamente ciento setenta y cinco causas, diligencias fallidas, audiencias diferidas, por cuanto el Tribunal Quinto, del que conforma ahora usted, la doctora Romero y la doctora Pacheco, se encontraba desintegrado desde el año 2022. Sí, justamente estas constan y ya fueron agregadas al expediente. En ese sentido, entonces, yo le preguntaría a su autoridad, para garantizar el derecho a la defensa de mi cliente, si es que la contraparte está de acuerdo con que se practique de esta manera esta prueba, dejando constancia de este consentimiento de aproximadamente ciento setenta y cinco diligencias fallidas en el año 2022, hasta que él se integró como juez del tribunal, y que esas audiencias, esos procesos, deben sustanciarse. **DR. NAVARRETE:** Sí, para poder practicar la siguiente prueba. Sí, eso es lo que yo entiendo como prueba que usted está practicando. Le consulto al doctor Darío Velástegui si está de acuerdo con esta disposición. **DR. DARÍO VELÁSTEGUI:** Pero nosotros no estamos aquí para discutir sus disposiciones, estamos totalmente de acuerdo con lo que usted disponga, tomando en consideración que ya ha quedado demostrado y que esto no es bueno en absoluto para lo que se está pretendiendo aducir.

6) Factura número 001-005-000014425, con diligencia notarial número 2025-170-1082-C-02-169, materialización realizada en la Notaría 82 por la doctora notaria Lina del Carmen Cárdenas Coronado. En la parte pertinente indica la materialización. Información de la causa número 17203-2024-00524. Correo electrónico remitido por juana.pacheco@funcionjudicial.gob.ec para el señor Segundo Ruperto Amaguaí Ushca, al correo electrónico ruperto.amagui@funcionjudicial.gob.ec, el 4 de diciembre de 2025 a las 4:48 p. m., en donde la doctora Pacheco indica: "Saludos cordiales, distinguido ingeniero Ruperto Amaguaí. De conformidad con lo que establece el artículo 66 numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, solicito que se remita la siguiente información: informe si los escritos ingresados en la causa número 17203-2024-00524 en las siguientes fechas: 9 de enero de 2025 a las 11:41 a. m.; 10 de marzo de 2025 a las 2:51 p. m.; 20 de marzo de 2025 a las 11:51 a. m.; 7 de abril de 2025 a las 2:17 p. m.; y 7 de abril de 2025 a las

2:48 p. m., los mismos que son reportados como notificación de ingreso descrito e-SATJE 2020-17203-2024-00524, aquellos llegan al mismo tiempo a conocimiento de los tres jueces que conocen la causa, en este caso a los doctores Juana Narcisa Pacheco, Marco Patricio Navarrete Sotomayor e Inés Maritza Romero Estévez". Como respuesta, el 8 de diciembre de 2025 a las 12:10 p. m., tenemos del correo carlos.bolaños@funcionjudicial.gob.ec, en donde se muestra el recorrido del petitorio de la doctora. Ahí está el recorrido y seguimos entonces a la respuesta. Dice: "Estimado ingeniero Amaguai, se ha realizado consultas a funcionarios de la institución sobre el ingreso de escritos por medio de la Oficina de Gestión Judicial Electrónica y confirman que llegan a los correos de los jueces y secretarios de la causa de la que se ingresa el escrito, con la premisa de que deben estar bien configurados los correos electrónicos del funcionario. En bandejas llegará el escrito a la bandeja del secretario de la causa o, si se configuró con Talento Humano, llegará el escrito a la bandeja de un ayudante judicial que se ha designado para esta actividad". Esa es la parte pertinente de esta prueba. Solicito que se proceda conforme a derecho.

CONTRADICCIÓN PARTE ACTORA: Señor juez, que se objete la prueba, tomando en consideración que no existe ninguna pericia informática respecto de lo manifestado.

7) Factura número 001-003-00010-7337, mediante diligencia notarial 2025-170-1069-C-08-482, ante la Notaría 69 del cantón Quito, ante el notario Miguel Ángel Tito. Indica en su parte pertinente el formulario F06-17203-2024-00524. El correo del señor Jefferson Ganchala, jefferson.ganchala@funcionjudicial.gob.ec, del 22 de septiembre de 2025 a las 4:40 p. m., para la doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, al correo electrónico juana.pacheco@funcionjudicial.gob.ec; para Inés Maritza Romero Estévez, al correo ines.romero@funcionjudicial.gob.ec; para el doctor Marco Patricio Navarrete Sotomayor, al correo marco.navarrete@funcionjudicial.gob.ec; y para Milton Omar Tapia Reinoso, al correo milton.tapia@funcionjudicial.gob.ec, en donde indica: "Estimados: Dra. Juana Pacheco, Dra. Inés Romero, Dr. Marco Navarrete, Dr. Milton Tapia, secretario del Tribunal Quinto de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Con un afectuoso saludo y por medio del presente me permito poner en su conocimiento que se han acercado a esta delegación una de las partes procesales de la causa asignada con el número 17203-2024-00524 a realizar un requerimiento mediante formulario F06, indicando que existe un retardo injustificado en cuanto a la emisión de la sentencia por escrito de la causa en mención. En este contexto, dentro del marco de mis competencias y responsabilidades como delegado de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, traslado el requerimiento realizado a su despacho con el fin de no afectar la atención a la ciudadanía y primando el principio de celeridad procesal, particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes. Agradeciendo la atención prestada, me suscribo con ustedes con sentimientos de distinguida consideración y estima. Atentamente, Jefferson Alexander Ganchala Jácome". Hasta aquí es la prueba para proceder con el principio de contradicción.

CONTRADICCIÓN PARTE ACTORA: Tomar en consideración que los mismos elementos concurren sobre la objeción; hay que tomar en cuenta que no se evidencia que



exista pericia informática alguna como para que tenga validez esta prueba.

8) Factura número 001-003-00010-7336, mediante diligencia notarial 2025-170-1069-C-008-481, ante la Notaría 69, ante el doctor Ángel Ruiz, en donde indica la materialización de los correos electrónicos de la causa número 17203-2024-00524. El 27 de noviembre de 2025 a las 11:25 a. m., del correo de la doctora Juana Pacheco, juana.pacheco@funcionjudicial.gob.ec, para Andrea Paola Carranco Vela, andrea.carranco@funcionjudicial.gob.ec. Segundo, Ruperto Amaguaí Ushca, ruperto.amaguaí@funcionjudicial.gob.ec, en donde indica: "Saludos cordiales, distinguidos ingenieros. De conformidad con lo establecido en el artículo 66, numeral 23, de la Constitución de la República del Ecuador, solicito se remita la siguiente información: uno, ¿en qué fecha fue generado el proyecto de resolución número 17203-2024-00524?: número dos, ¿quién es el juez que se adhirió y en qué fecha?: número tres, ¿quién es el juez que no se adhiere hasta la presente fecha?". En respuesta, del correo keti.sanchez@funcionjudicial.gob.ec, el 27 de noviembre de 2025 a las 4:41 p. m., para la Dra. Juana Narcisa Pacheco Cabrera, al correo juana.pacheco@funcionjudicial.gob.ec, indica: "Estimada doctora, reciba un cordial saludo. Número uno, ¿en qué fecha fue generado el proyecto de resolución número 17203-2024-00524? El sistema refleja un proyecto de resolución de fecha 2025". **DRA. ROMERO:** Tenga la bondad, doctor. Acláreme un punto: si está más arriba, ¿cuál es el nombre del funcionario que ha remitido mis correos electrónicos? **MGS. BRAVO:** Claro, la aclaración va de la siguiente manera: no sé si sean sus correos electrónicos; sin embargo, la persona que responde es keti.sanchez@funcionjudicial.gob.ec. **DRA. ROMERO:** Gracias. Dice que no sabe si es que son mis correos o no. Gracias, muy amables. Sí, la práctica de la prueba desde este momento va desde el correo keti.sanchez@funcionjudicial.gob.ec al correo juana.pacheco@funcionjudicial.gob.ec, en donde se indica: "Estimada doctora, reciba un cordial saludo. Número uno, ¿en qué fecha fue generado el proyecto de resolución número 17203-2024-00524?". Respuesta: el sistema refleja un proyecto de resolución de fecha 30 de octubre de 2025 y hora 15:05:22, en estado "circulado", al cual se han adherido dos miembros del tribunal. Número dos, ¿quién es el juez que se adhirió y en qué fecha? Respuesta: la Dra. Pacheco Cabrera Juana Narcisa se adhirió al proyecto de resolución el día 30 de octubre de 2025 a las 15:05:32. El Dr. Marco Patricio Navarrete Sotomayor se adhirió al proyecto de resolución el día 30 de octubre de 2025 a las 18:08:48. Muestra la gráfica de la adhesión. Número tres, ¿quién es el juez que no se adhiere hasta esta fecha? Respuesta: el tribunal para el juicio número 17203-2024-00524 está conformado de la siguiente manera: Dra. Pacheco Cabrera Juana Narcisa; Dr. Milton Omar Tapia Reinoso, secretario; jueza Romero Estévez Inés Maritza; y Dr. Marco Patricio Navarrete Sotomayor. Por lo que se deduce que la jueza que aún no se ha adherido al proyecto es la doctora Romero Estévez Inés Maritza. Atentamente, ingeniera Ketí Sánchez Ochoa, magíster. Respuesta del correo: gracias por su gentil atención. Hasta ahí la práctica de esta prueba; correo trasladado.

CONTRADICCIÓN PARTE ACTORA: Para la contradicción, por el principio de contradicción, para la parte actora. Sí, pues, que se tome en consideración que, efectivamente,

nuevamente esta prueba no tiene pericia informática, debe ser objetada y, obviamente, por tanto, no va a ser válida.

DRA. ROMERO: Una pregunta aclaratoria al abogado Bravo. Por favor, ¿Nos puede indicar el documento? ¿Me puede enseñar el documento en el cual yo autorizé que se entreguen mis correos electrónicos personales, por favor? **MGS. BRAVO:** En respuesta, de la práctica de la prueba que hice, y me remito a ello, no está su correo electrónico, doctora jueza. No está: en la práctica de la prueba no está. **DRA. ROMERO:** Usted hizo referencia a mi nombre y apellidos dentro de un correo, en el cual dan una aclaración; incluso era de la doctora Sánchez. ¿No? **MGS BRAVO:** Sí, eso ya le había indicado.

9) Factura número 001-006-000012546, mediante diligencia notarial 2025-170-1082-C-02-188, ante la Notaría 82, la notaria doctora Elizabeth Lina del Carmen Cárdenas Coronado. En la parte pertinente de esta materialización es del juicio número 17230-2023-23917, causa que recayó ante el tribunal que conoce tanto la acción de protección como esta recusación y, en la parte pertinente, como juez ponente, el Dr. Navarrete indica: “Séptimo: de la sentencia cuya ampliación y aclaración se requiere, se realiza el análisis y fundamentación de los puntos que solicita sean aclarados y ampliados. En ese sentido, la sentencia es clara y completa, ha sido redactada en un lenguaje claro y comprensible. En relación con la demora en la notificación de la sentencia por escrito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Anzualdo Castro vs. Perú, ha determinado (...) la Corte ha considerado preciso tomar en cuenta varios elementos para determinar la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales; y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Nuestra Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia número 916-20-EP/24, párrafo 50, explica de manera clara que no toda demora en el despacho es injustificada, indicando que se debe analizar los siguientes parámetros: ‘a fin de analizar si la demora mencionada constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en la esfera del plazo razonable, esta magistratura considera necesario recordar que no toda demora en la tramitación y resolución de una causa constituye una vulneración al derecho del plazo razonable. Por tal razón, existe una vulneración al derecho al plazo razonable dependerá del análisis de las particularidades del caso concreto y de los parámetros del plazo razonable desarrollados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de esta Corte Constitucional. Es decir: 1) la complejidad del asunto; 2) la actividad procesal del interesado; 3) la conducta de las autoridades judiciales; y 4) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. En virtud de la excesiva carga laboral que mantiene este tribunal y la complejidad del asunto, la demora en la emisión de la sentencia por escrito se encuentra debidamente justificada’. Criterio valorado por el tribunal que conoce la acción de protección dentro de la causa 17230-2023-23917”. Termino la práctica de esta prueba. Esta causa en particular fue sorteada el 28 de diciembre de 2023 y fue resuelta en el mes de octubre de 2025, señor juez, y, a pesar del retardo, se ha considerado que no es injustificado. Con esto termino la práctica de esta prueba y someto a contradicción.

0000 0030

-848-
ochocientos
cuarenta
y ocho.

CONTRADICCIÓN PARTE ACTORA: Obviamente, la cuestión deviene también del hecho de que no existe una pericia informática al respecto del documento que hace alusión y aparte de aquello, tampoco se está discutiendo una situación de usted como no ponente, sino de la jueza recusada, ¿Sí o no?



7.3. ALEGATOS FINALES.-

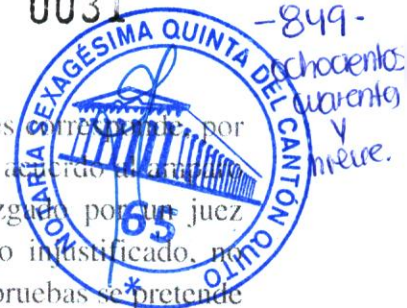
7.3.1. ALEGATO DE LA PARTE ACCIONANTE.

Para ser preciso, en honor al tiempo de todos y cada uno de los que estamos presentes en esta audiencia, tomando en consideración que lo que se está discutiendo es el tiempo en exceso, el retardo injustificado respecto de la sustanciación de un proceso constitucional en apelación, señor juez, se podrá evidenciar que, primero, la prueba que ha actuado en este caso la parte demandada no es una prueba legal, no tiene pericias, hace referencia a correos electrónicos; más sin embargo, nada ha hecho alusión respecto de por qué no ha despachado en diecinueve meses la jueza ponente. Ella es quien tiene que establecer, y de hecho hizo alusión dentro de la práctica de su prueba, que en octubre circula el proyecto. Y, obviamente, sobre eso no es que han transcurrido ocho días, señores jueces; han transcurrido alrededor de dieciséis meses, quince meses. Entonces, señores jueces, hay que tomar en consideración las alegaciones establecidas, las pruebas aportadas y los hechos que estamos discutiendo aquí: el retraso injustificado en la administración de justicia en materia constitucional. Y, evidentemente, no hay nada más que demostrar respecto a lo que hemos podido evidenciar con todos y cada uno de los requerimientos, que inclusive han dejado en evidencia que la jueza ponente conocía que ingresábamos escritos; sí conocía, pero no los despachó, hasta ahora no los despacha. Entonces, desde ese punto de vista, solicitamos que se acepte nuestra recusación y se ponga en conocimiento de las autoridades administrativas que correspondan, para que se sortee al nuevo juez que integre este tribunal, a fin de poder tener justicia constitucional en este momento.

7.3.2. ALEGATO DE LA PARTE ACCIONADA.

De la prueba practicada por la parte accionante se desprende que, desde el acta de sorteo, se sortea a tres jueces que conforman un tribunal, en este caso a la doctora Romero, a su autoridad, el doctor Navarrete, y a la doctora Juana Narcisa Pacheco. De los cinco escritos que fueron investigados, también consta la fe de recepción y consta claramente a quién va dirigido cada uno de los escritos, y cada uno de ellos va dirigido a los tres jueces que conforman el tribunal. De igual manera, la fe de recepción indica claramente que el sistema de gestión electrónica dirige a la sala compuesta por los tres jueces, en este caso, doctora Romero, doctor Navarrete y la doctora Pacheco. Eso es lo que se colige de la prueba que presentó, anunció y practicó la parte accionante. Ahora bien, de mi prueba, aquí la causal indica que es un retardo injustificado. Me opongo rotundamente para que queden audios de que la demanda no haya aceptado la excepción previa de los numerales 1 y 3, por cuanto la resolución, el despacho y la sustanciación de la causa de la acción de protección le competían a los tres jueces y no solo a una juzgadora. Habrá que entender por qué la parte accionante decide demandar solo a uno de

los tres juzgadores; ya veremos más adelante qué ocurre con eso. Seguido de ello, dentro de mi prueba se demostró que desde el año 2022, hasta su ingreso como juez conformador del tribunal, este se encontraba desintegrado, y aproximadamente 175 causas quedaron pendientes de resolución, con audiencias diferidas y diligencias fallidas. Esas causas, desde el año 2022, son las que el tribunal que usted conforma y la doctora Romero conforma, han venido despachando. En este caso, se tiene que sumar, por supuesto, los nueve meses en los que el tribunal no estuvo conformado por tres miembros, así como los cuarenta y nueve días de licencias de vacaciones de la doctora Romero, los cuarenta y tres días de licencias de vacaciones del doctor Navarrete y los cuarenta y ocho días de licencias de vacaciones de la doctora Narcisa Pacheco, sumando más de ciento cuarenta días, es decir, casi medio año. Eso, sumado a los nueve meses, nos da aproximadamente un año y tres meses del porqué no se lograban sustanciar no solo la causa en controversia, sino todas las causas que constan en los recaudos procesales que yo he practicado como prueba, es decir, 175 causas que deben resolverse de conformidad con el principio de igualdad formal y material consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, porque no se puede resolver un proceso actual cuando existen cientos pendientes de despacho; de hacerlo, sí se vería afectada la imparcialidad del juzgador. Sería muy extraño, ante la ley, querer despachar una causa actual cuando existen múltiples causas anteriores pendientes. Se ha demostrado que, conforme a los correos electrónicos —aunque la defensa técnica de la parte accionante alegue que no existe base legitimadora ni pericia informática—, no estamos en derecho penal, sino en derecho privado, donde rige la sana crítica. Conforme a la sana crítica, los miembros restantes del tribunal que conocen esta recusación deberán entender cuándo fue notificada mi cliente con la recusación, qué tiempo tuvo para presentar prueba, que se solicitó que la audiencia sea presencial y, pese a ello, se logró ingresar la prueba debidamente materializada, conforme a las reglas del Código Orgánico General de Procesos. La prueba fue permitida y practicada, ya que la fase de anuncio probatorio, en la que se discutía la utilidad, pertinencia, conducencia y legalidad, precluyó y su autoridad decidió que se practique dicha prueba. Ahora, dicha prueba debe ser valorada conforme a la sana crítica, entendiendo que las causas pendientes desde el año 2022, hasta su incorporación, doctor Navarrete, eran responsabilidad de todo el tribunal. Asimismo, entendiendo que si restamos del tiempo alegado por la parte accionante, todo el tiempo correspondiente a vacaciones y licencias, no existe ningún retardo injustificado. No existe ningún retardo injustificado, y este no se da ni por parte de la doctora Pacheco, ni por parte del doctor Navarrete, ni por parte de la doctora Romero, porque los tres jueces del tribunal han estado despachando las causas en el orden en que van llegando. Se demostró que el proyecto de resolución se entregó el 30 de octubre y se demostró que hasta el día de hoy no existe pronunciamiento de la doctora Romero. Entonces, ¿Cómo se puede afirmar que existe un retardo injustificado si lo único que falta para emitir la resolución es que la doctora Romero proponga su voto salvado? Más aún, como ustedes lo han indicado, en las instancias judiciales pertinentes, se solicitará a las autoridades competentes que se analicen todas esas materializaciones y correos electrónicos, incluso mediante pericias, a fin de evidenciar toda la comunicación entre los tres miembros del tribunal. En consecuencia, no estamos de acuerdo con que ustedes se hayan aferrado a una competencia que constitucionalmente, al amparo del



artículo 76, numeral 7, literal k), de la Constitución de la República, no les corresponde, por cuanto no serían imparciales al ser partes procesales. Tampoco estamos de acuerdo con lo establecido en el artículo 8, numeral 1, del Pacto de San José, que garantiza ser juzgado por un juez imparcial. La causal invocada por la parte accionante, esto es, el retardo injustificado, no puede atribuirse únicamente a uno de los miembros del tribunal. ¿Con qué pruebas se pretende demostrar que el retardo injustificado corresponde solo a una jueza? ¿Por qué no se recusa a los tres jueces que supuestamente estarían incurriendo en dicho retardo? Además, se demostró, incluso con criterios emitidos por su autoridad en otras causas, que no existe demora injustificada debido a la carga laboral que ustedes mantienen. Aquí no solo se han demostrado 175 causas pendientes, sino que se ha evidenciado que a todo el tribunal le correspondía pronunciarse y que el pronunciamiento pendiente corresponde, extrañamente, a la doctora Romero, quien no ha sido recusada. En ese sentido, con base en la prueba practicada, solicito a su autoridad que, aplicando la sana crítica, se rechace la recusación planteada. Asimismo, aclaro que anunciar acciones legales no constituye una amenaza, sino el ejercicio legítimo de derechos. En el momento oportuno, recusaremos o presentaremos las acciones o denuncias que correspondan ante las instancias pertinentes, pues la ley nos ampara. No se vulnerará el derecho al debido proceso ni se puede afirmar la existencia de enemistad manifiesta sin sustento, cuando el Código Orgánico General de Procesos regula claramente dicha causal. Tampoco se ha vulnerado el debido proceso al emitirse autos interlocutorios, pues se trata de autos de trámite y no de sustanciación. Me reservo el derecho de apelar la resolución que se emita, al no existir norma ni criterio vinculante que lo prohíba, a fin de garantizar el derecho a la defensa de mi cliente; de ser negada la apelación, recurriremos a instancias superiores. Hasta aquí mi intervención. Devuelvo el uso de la palabra, sin antes recordar que este tribunal está conformado por tres jueces.

7.3.3. ALEGATO DE LA PARTE ACTORA.-

La parte actora señala que, luego de escuchar lo que considera amenazas en contra del tribunal por parte de la defensa técnica, solicita copia del audio para iniciar las acciones correspondientes ante las autoridades competentes, a fin de que se detengan este tipo de actuaciones.

7.3.4. ALEGATO DE LA PARTE DEMANDADA.-

Por parte de la demandada, se hace uso de la palabra para recalcar únicamente los criterios emitidos, respecto de las causas que han demorado debido a la carga laboral existente.

OCTAVO: ANÁLISIS.-

En relación a lo solicitado por la parte demandada al inicio de su intervención, contestación a la demanda y anuncio de pruebas, referente al artículo 25 del COGEP^[1]; respecto a la subrogación del juzgador. Precisamente la misma disposición legal citada por la defensa de la parte demandada, dispone que la citación con la demanda de recusación, suspende la

competencia del juez. **SALVO** cuando se fundamente en el retardo injustificado, como corresponde en este caso, en cuyo caso solo se suspenderá la competencia cuando la recusación haya sido admitida, por lo que no era pertinente nombrar a quien subrogue al juzgador recusado, sin que sea necesario hacerlo, hasta cuando dicha demanda de recusación sea aceptada o negada, conforme la disposición legal citada por la parte demandada que creó el incidente, por lo que su alegación es improcedente.

La actividad probatoria, es una actividad fundamentalmente de conocimiento. El juez/a, al momento de decidir sobre si tal o cual versión de los hechos debatidos en juicio está probada, sólo puede tomar en consideración la información contenida en el expediente judicial e incluso tiene el deber de descartar toda aquella que haya conocido fuera del contexto del proceso. Aquello que no obra en autos no tiene valor jurídico alguno y, por tanto, no puede utilizarse legalmente para motivar la decisión.^[2]

Entre las especificidades del contexto de la prueba de los hechos en el derecho, se encuentran: a) el objetivo institucional es la averiguación de la verdad; b) se determina (normalmente) la ocurrencia de hechos del pasado; c) el derecho incluye un buen número de reglas probatorias (sobre los medios de prueba, sobre la actividad probatoria y sobre el resultado); d) la decisión probatoria está sometida a límites temporales; e) las partes intervienen en el proceso; f) la decisión adoptada por el/la juez/a está dotada de autoridad.^[3]

8.1. SOBRE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LA PARTE DEMANDANTE.

La parte recusante aporta, entre otros, los siguientes elementos:

- Carátula de la Sala de Corte Provincial;
- Acta de sorteo;
- Razón de recepción de la causa;
- Escrito de fecha 09/01/2025, solicitando sentencia;
- Escrito de fecha 10/03/2025, solicitando audiencia de estrados;
- Escrito de fecha 20/03/2025, reiterando petición de sentencia;
- Escrito de insistencia de 07/04/2025;
- Escrito de 26/06/2025 reiterando solicitud;
- Quejas contenidas en los formularios F.06 y constancias de la queja interpuesta en la Dirección de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura.

Estos documentos:

- Proviene del propio proceso y del sistema judicial (E-SATJE), signado con el No. 17203-2024-00524;
- Se encuentran firmados electrónicamente o registrados oficialmente;
- Guardan relación directa con el hecho debatido: la inactividad judicial y retardo.

Los jueces de este tribunal consideran que estas pruebas:

0000

0032

-850-

ochocientos cincuenta

- Son pertinentes (se refieren al objeto del incidente);
- Son lícitas (proviene de fuentes legales y del expediente);
- Son idóneas y suficientes para acreditar el retardo y falta de despacho.

Por tanto, **SE ACEPTAN Y VALORAN** como prueba plena del retardo injustificado y de la falta de despacho en la acción constitucional.



8.2. SOBRE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LA PARTE DEMANDADA.

La jueza recusada ha presentado como principal elemento de descargo una materialización de correos electrónicos y otros documentos que contienen información de terceras personas, alegando con ello, habría existido actividad o gestión relativa al proceso.

Los jueces de este tribunal advierten que dichos elementos no han sido introducidos mediante prueba pericial técnica que garantice su autenticidad, Integridad, origen y fecha, ni existe constancia de cadena de custodia o análisis pericial que los legitime como evidencia digital en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Adicionalmente, del contenido de esos correos se desprende la existencia de datos personales de terceros ajenos al proceso, respecto de los cuales no se ha acreditado autorización alguna para el tratamiento y difusión de su información, lo que los coloca en abierta contradicción con la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

Por estas razones, los jueces del tribunal concluyen que dichas materializaciones:

- Carecen de valor jurídico;
- No son admisibles como prueba válida;
- No pueden ser calificadas como prueba documental en sentido técnico procesal.

En consecuencia, **RECHAZAN** las pruebas de descargo, presentadas por la jueza recusada.

8.2.1. POR QUÉ LA MATERIALIZACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS NO ES PRUEBA VÁLIDA NI PRUEBA DOCUMENTAL.

La prueba electrónica, para que se garantice su validez, tiene varias exigencias técnicas:

- Autenticidad (que provengan efectivamente del remitente que se indica);
- Integridad (que no hayan sido alterados);
- Procedencia legítima y cadena de custodia;
- Reconocimiento pericial o reconocimiento expreso de las partes.

Una simple impresión de correos electrónicos, en papel o PDF, no acredita por sí misma:

- Que el mensaje haya sido efectivamente enviado por quien aparece como remitente;

- Que el contenido sea íntegro y no manipulado;
- Que la fecha y la hora sean veraces;
- Que haya existido realmente el intercambio en los términos allí consignados.

En la medida en que la jueza recusada no acompañó informe pericial informático, ni se solicitó ni practicó prueba pericial que respalde la autenticidad y la integridad de los correos, los jueces del Tribunal no pueden atribuirles valor probatorio.

En consecuencia, las materializaciones de correos electrónicos no pueden ser consideradas prueba válida, al no cumplir con los requisitos técnicos mínimos exigibles para la incorporación de evidencia digital en juicio.

8.2.2. INOBSERVANCIA DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Los correos presentados contienen datos personales de terceros (nombres, direcciones, comunicaciones privadas), quienes no han sido parte en el proceso y no han autorizado el uso de su información como elemento de descargo.

El artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de las personas a la protección de sus datos personales:

"Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

(...)19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley (...)"

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, prohíbe el tratamiento sin base legal o sin consentimiento, especialmente cuando se trata de datos que no guardan relación necesaria con el objeto del proceso, el artículo 8 de dicha norma legal dice:

"Art. 8.- Consentimiento.- Se podrán tratar y comunicar datos personales cuando se cuente con la manifestación de la voluntad del titular para hacerlo. El consentimiento será válido, cuando la manifestación de la voluntad sea: 1) Libre, es decir, cuando se encuentre exenta de vicios del consentimiento; 2) Específica, en cuanto a la determinación concreta de los medios y fines del tratamiento; 3) Informada, de modo que cumpla con el principio de transparencia y efectivice el derecho a la transparencia. 4) Inequívoca, de manera que no presente dudas sobre el alcance de la autorización otorgada por el titular.

El consentimiento podrá revocarse en cualquier momento sin que sea necesaria una justificación, para lo cual el responsable del tratamiento de datos personales establecerá mecanismos que garanticen celeridad, eficiencia, eficacia y gratuidad, así como un

procedimiento sencillo, similar al proceder con el cual recabó el consentimiento.

El tratamiento realizado antes de revocar el consentimiento es lícito, en virtud de que este no tiene efectos retroactivos.

Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste que dicho consentimiento se otorga para todas ellas."



Introducir al expediente tales correos, sin autorización, constituye un tratamiento ilícito de datos, que viola el derecho constitucional de terceros ajenos al litigio y contraviene los principios de:

- Licitud;
- Finalidad;
- Minimización de datos.

El artículo 165 del COGEP, establece que no serán admitidos como prueba aquellos elementos obtenidos con violación de derechos constitucionales. Por ello, incluso si la materialización de los correos tuviera algún valor informativo, tal valor se ve anulado por su ilegitimidad de origen.

8.2.3. INCOMPATIBILIDAD CON EL CONCEPTO DE "PRUEBA DOCUMENTAL"

De acuerdo con el régimen probatorio del COGEP, se consideran documentos, en sentido estricto:

- Instrumentos públicos;
- Instrumentos privados auténticos;
- Actas procesales;
- Certificaciones oficiales;
- Documentos que, por su forma y origen, garantizan certeza sobre su contenido.

La materialización de correos electrónicos no cumple con estas características:

- No es instrumento público;
- No está dotada de firma electrónica calificada reconocida dentro del expediente;
- No ha sido reconocida por la contraparte;
- No ha sido avalada por pericia técnica;
- No proviene de una autoridad certificadora ni de un órgano oficial.

Por tanto, no pueden ser considerados "prueba documental" en sentido técnico, sino a lo sumo documentos simples carentes de fe probatoria, cuya eficacia queda condicionada a reconocimiento y corroboración, circunstancias que no se verifican en este caso.

Aun si se los considerara como documentos simples, no guardan relación de pertinencia con el hecho central que se analiza en este incidente: el retardo injustificado y la falta de despacho.

El comportamiento procesal de la jueza demandada, se verifica a partir de:

- Actuaciones en el expediente;
- Providencias emitidas (o su ausencia);
- Plazos transcurridos desde el ingreso de la causa;
- Escritos e insistencias presentadas por las partes.

Los correos aportados no logran desvirtuar ninguna de estas circunstancias objetivas.

8.3. CONCLUSIONES SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA CAUSAL DE RECUSACIÓN

Ha quedado acreditado que:

- La causa constitucional No. 17203-2024-00524, ingresó al Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 07 de mayo de 2024.
- Por un lapso de aproximadamente quince meses, la jueza ponente, no puso en conocimiento de los demás jueces la existencia de la causa, no impulsó el proceso, proveyendo los escritos presentados por la legitimada activa en la causa principal, pese a las reiteradas solicitudes de la parte accionante, no circuló proyecto de resolución .
- .El proyecto solo se circula luego de ese extenso lapso, en franca contradicción con el plazo de ocho días, previsto en la LOGJCC.

Esta conducta constituye un retardo injustificado que afecta el derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de celeridad, el objeto mismo de la acción de protección, que exige un amparo "directo y eficaz" y no meramente simbólico.

La inactividad injustificada de la jueza ponente, sumada a la presentación de pruebas de descargo, carentes de valor jurídico y obtenidas con vulneración de derechos de terceros, compromete la apariencia de imparcialidad y la confianza que las partes deben tener en el juzgador.

En virtud de ello, esta Sala considera que se ha configurado plenamente la causal de recusación prevista en el artículo 22, numeral 5 del COGEP, por lo que la jueza recusada debe ser separada del conocimiento del proceso, a fin de salvaguardar la confianza en la administración de justicia y garantizar que el recurso de apelación sea resuelto con la debida diligencia, imparcialidad y celeridad.

NOVENO: DECISIÓN.-

En aplicación a los derechos constitucionales de tutela judicial, debido proceso y seguridad jurídica, estos juzgadores han verificado la prueba pedida, presentada y practicada conforme a la Constitución y la ley, consideran que la jueza provincial doctora Juana Narcisca Pacheco Cabrera, se encuentra inmersa en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 27 del COGEP; por lo tanto, los jueces provinciales doctora Inés Maritza Romero Estévez y doctor Marco Patricio Navarrete Sotomayor, integrantes del Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, PRIMERO:** Declararse competentes para conocer y resolver el presente incidente de recusación, por encontrarse dentro del ámbito previsto en la Constitución, la LOGJCC, el COFJ y el COGEP. **SEGUNDO: ACOGER** la recusación presentada por la ingeniera Pamela Erazo Obando, a través de su abogado patrocinador doctor Darío Velástegui, en contra de la doctora Juana Narcisca Pacheco Cabrera, por haberse verificado la causal prevista en el artículo 22, numeral 5 del Código Orgánico General de Procesos, esto es, retardar de manera injustificada el despacho de los asuntos sometidos a su competencia, en el marco de una acción constitucional de protección. **TERCERO:** En consecuencia, **SEPARAR** a la doctora Juana Narcisca Pacheco Cabrera, del conocimiento de la causa constitucional No. 17203-2024-00524 y de todo trámite vinculado a la misma. **CUARTO:** Disponer a la Secretaría de la Sala que, de manera inmediata, proceda al sorteo de un nuevo juez o jueza ponente, a fin de que integre el Tribunal y sustancie y resuelva sin mayor dilación el recurso de apelación, respetando los principios de celeridad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica. **QUINTO: DISPONER SE OFICIE A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**, remitiendo copia certificada de esta sentencia y de las actuaciones pertinentes, para que inicie investigación penal por los hechos que encuadran, prima facie, en los presuntos delitos de: **1.** Revelación ilegal de datos personales (art. 230.1 COIP); **2.** Fraude procesal (art. 272 COIP); **3.** Obstrucción de la justicia (art. 270 COIP). **SEXTO: DISPONER SE OFICIE AL CONSEJO DE LA JUDICATURA**, para que investigue la conducta disciplinaria de: **1.** La jueza recusada, por los hechos descritos; y **2.** El abogado de la parte demandada, por deslealtad procesal, violación al COFJ y al COGEP. Sin costas que regular. En atención a la petición de copia de los audios de la audiencia de recusación, por parte del doctor Darío Velástegui, confíérase los mismos, a su costa. **NOTIFÍQUESE.-**

Luego del anuncio oral de la decisión, la parte demandada, interpuso recurso de aclaración del anuncio oral, argumentando que se ha manifestado que la doctora Juana Narcisca Pacheco, no ha hecho conocer al suscrito juez Navarrete y a la doctora Romero de los recaudos procesales. Que su aclaración va en el sentido de que quiere saber qué parte procesal alegó esa afirmación y a qué foja procesal consta la prueba para que se haya valorado esta situación.

Con la petición de aclaración se corrió traslado a la parte demandante, quien manifestó que se debe tomar en consideración, en primer lugar, que la aclaración es eminentemente impertinente; ha sido claramente entendible su decisión, ha estado debidamente determinada y

también se ha dejado claro, que se va a emitir la sentencia motivada por extenso, la misma que será puesta en conocimiento de las partes procesales. No es cuestión de ponerle como si se tratara de un examen, dígame en qué fojas se encontraba y demás; ustedes son las autoridades y, obviamente, en el momento en que se expida la sentencia por escrito, determinarán la conveniencia de la misma, no con este tipo de impertinencias que han sido objeto durante toda esta audiencia.

RESOLUCIÓN TOMADA A LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN.-

En relación con lo resuelto por los jueces de este tribunal, debemos señalar que nuestras consideraciones se refieren a los puntos planteados por las partes tanto en la demanda como en la contestación a la demanda, y con base en ellos, estos jueces que conocemos la demanda de recusación, hemos adoptado la decisión correspondiente. No es pertinente la aclaración o ampliación solicitada, por cuanto el anuncio oral ha sido claro. **El tribunal completo no ha avocado conocimiento de la causa.** De la revisión física y electrónica del sistema E-SATJE, respecto del expediente constitucional número 17-203-2024-00524, **los doctores Marco Patricio Navarrete Sotomayor e Inés Maritza Romero Estévez, no hemos abocado conocimiento de la causa hasta la presente fecha**, por lo que la aclaración solicitada deviene en improcedente, revelándose nuevamente la falta de lealtad procesal por parte del abogado defensor de la parte demandada.

La parte demandada manifestó que al amparo del artículo 76.7.m de la CRE, apela oralmente de la decisión.

Se corre traslado a la contraparte, quien manifestó: En materia constitucional respecto a las apelaciones la CC y la Corte Nacional se han pronunciado que no hay apelación en este tipo de incidentes, la consulta de la CNJ OFICIO No. 39-2019-P-CPJP FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2019, determina que la decisión que se emita en el proceso de recusación no es apelable, por cuanto las normas que regulan este procedimiento no han previsto la posibilidad de interponer ese recurso. En la sentencia de la CC No. 1572-20-EP/24 la CC ya se ha pronunciado respecto a que no existe apelación en este tipo de causas.

RESOLUCIÓN SOBRE LA APELACIÓN INTERPUESTA ORALMENTE EN LA AUDIENCIA:-

Al interponerse el recurso de apelación a una sentencia, previamente deberá examinarse si en el Código se ha determinado de manera expresa la concesión del mismo, sin que exista de manera abierta la posibilidad de apelar toda decisión judicial como lo entiende el defensor de la parte demandada, pues no nos encontramos con las reglas del sistema adversarial penal; sino con las reglas propias del sistema procesal civil que son distintas por su naturaleza, que si bien es cierto se afirma que los jueces estamos obligados a aplicar las normas de derecho público, aunque el abogado de la demandada diga que el COGEP es norma de derecho privado, también es cierto que los jueces debemos observar lo que garantiza el artículo 82 de

la Constitución de la República. Al respecto, la Corte Constitucional dentro de la Sentencia No. 0131-15-SEPCC, Caso No. 0561-12-EP, al hablarnos sobre esta garantía, en su parte pertinente dice: " ... El derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 82 de la Constitución, se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. A través de este derecho se crea un ámbito de certeza y confianza ciudadana respecto de las actuaciones de los poderes públicos, pues se garantiza a las personas que toda actuación se realizará acorde a la Constitución y a una normativa previamente establecida, que será aplicada únicamente por parte de las autoridades competentes para el efecto. Esta garantía constitucional debe ser entendida como uno de los deberes fundamentales del Estado y, en consecuencia, corresponde a los jueces brindar, en todo momento, la certeza al ciudadano respecto de las actuaciones que, en derecho, se efectúan en cada momento procesal... " ; es decir, por mandato Constitucional y legal los jueces estamos obligados a cumplir con la norma, mucho más cuando esta es clara y no merece realizar algún tipo de interpretación más allá de la obvia y literal.

El COGEP en su artículo 256 dice:

"Art. 256.- Procedencia: El recurso de apelación procede contra las sentencias y los autos interlocutorios dictados dentro de la primera instancia, así como contra las providencias con respecto a las cuales la ley conceda expresamente este recurso.

Podrá interponerse de manera oral en la respectiva audiencia."

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el derecho a recurrir, ha dicho:

"158. La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona."^[4]

El derecho a la doble instancia, según la Corte Constitucional Ecuatoriana, justifica los derechos de impugnación y contradicción; es decir, del primero la posibilidad de rebatir la decisión emitida por la autoridad pública; y, del segundo, la posibilidad del demandado de contradecir las pretensiones al actor y este las excepciones de aquel, todo ello en virtud del recurso de apelación. La doble instancia, como un derecho y una garantía judicial, se cumple conforme el mandato constitucional, **pero no puede ser aplicado en todas las circunstancias, le corresponde al legislador establecer en qué procesos amerita la doble instancia y los que ameritan una tramitación sumaria, sin que esto sea un sacrificio de**

garantías y derechos constitucionales en perjuicio de las partes en el proceso.⁵ (énfasis añadido).

Como ya lo manifestó la accionante, a través de su defensa técnica, en el traslado del recurso de apelación, respecto a las apelaciones de resoluciones en recusaciones, la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia se han pronunciado que no hay apelación en este tipo de incidentes, la consulta de la Corte Nacional de Justicia, constante en el OFICIO No. 39-2019-P-CPJP, de fecha 07 de febrero de 2019, determina que la decisión que se emita en el proceso de recusación no es apelable, por cuanto las normas que regulan este procedimiento no han previsto la posibilidad de interponer ese recurso. En la sentencia de la Corte Constitucional No. 1572-20-EP/24, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado respecto a que no existe apelación en este tipo de causas, la ley no concede expresamente el recurso de apelación respecto a la decisión de las demandas incidentales de recusación, por lo que los suscritos jueces del Tribunal negamos el recurso de apelación interpuesto.

1. [^] *Art. 25.- Subrogación de la o el juzgador. La recusación no suspenderá el progreso de la causa principal.*
2. [^] *Stein, Friedrich, El conocimiento privado del Juez, trad. de Andrés de la Oliva Santos, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1893, pág. 71.*
3. [^] *Ferrer Beltrán, Jordi, Prueba y verdad en el derecho, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 56-61; y Ferrer Beltrán, Jordi, "El contexto de la decisión sobre los hechos probados en el derecho", en José Antonio Cruz Parceroy Larry Laudan (comps.), Pruebas y estándares de prueba en el derecho, IIF-UNAM, México, 2010, pp. 81-91.*
4. [^] *CIDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004, párrafo 158.*
5. [^] *Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N.º 010-13-SIN-CC, casos N.º 0005-10-IN, 0006-10-IN, 0013-11-IN y 0049-10-IN.*

ROMERO ESTEVEZ INES MARITZA

JUEZ DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA

MARCO PATRICIO NAVARRETE SOTOMAYOR

0000 0036

-854-
ochocientos
cincuenta
y cuatro.

JUEZ DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA



FUNCION JUDICIAL

Firmado por
MARCO
PATRICIO
NAVARRETE

FUNCION JUDICIAL

Firmado por
INES MARITZA
ROMERO ESTEVEZ



0000 0037



-855-
ochocientos
cinco
y
cinco

LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, LA CONSTITUCION Y LA LEY, LA SALA PENAL DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

RAZÓN.- Siento por tal que, las veinticinco (25) fotocopias que anteceden son iguales a sus originales que reposan en la instancia de segundo nivel, que han sido firmadas electrónicamente y bajadas del sistema, dentro de la ACCIÓN DE PROTECCIÓN, signada con el número 17203-2024-00524; a las que me remitiré en caso de ser necesario.-
CERTIFICO.-

ABG. DANIELA ABIGAIL SALDAÑA TORRES

SECRETARIA (E) DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR,
PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE
PICHINCHA

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del
Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la (s)
fotocopia (s) que antecede (n), que me fue (ron) presentadas
en -26- foja(s) útil(es), es (son) FIEL COPIA
del documento presentado ante mí, Dra. Maria Escobar M., Notaria
Sexagésima Quinta Suplente del Cantón Quito, el 25 AGO. 2026

Ab. María Augusta Escobar Montenegro
NOTARIA SEXAGÉSIMA QUINTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

CONFIDENTIAL



Factura: 002-002-000112653



20261701065C02682

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20261701065C02682

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento DENUNCIA NO. 170101826011667 que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 25 DE AGOSTO DEL 2026, (10:08).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20261701065C02682

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento OFICIO NO. 02401-DP17-2026-GI que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 25 DE AGOSTO DEL 2026, (10:08).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20261701065C02682

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PICHINCHA que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 25 DE AGOSTO DEL 2026, (10:08).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20261701065C02682

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento CERTIFICACIÓN Y OFICIO NO. FGE-DTH-2010-005219-O que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 25 DE AGOSTO DEL 2026, (10:08).



NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA ESCOBAR MONTENEGRO

NOTARÍA SEXAGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 06635-DP17-2026-SE

PICHINCHA - QUITO Edificio Receptor: NORTE - PATRIA Dirección: AV. PATRIA Y 12 DE OCTUBRE, ESQ
2026-01-12 15:12:33

PAGINA EN BLANCO



Oficio No. 02401-DPT7-2026-GI
Quito, 3 de agosto 2026

Señores doctores
Inés Romero Estévez
Marco Navarrete Sotomayor

JUECES DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA
En su despacho. -

De mi consideración:

En atención a su oficio 0001, de fecha 31 de julio de 2026, mediante el cual se solicita se informe si en relación al auto notificado con fecha 26 de diciembre de 2025, a las 11h16, se abrió el respectivo expediente administrativo en contra del abogado Carlos Bravo Hernández, me permito indicar que:

Con fecha 15 de enero del 2026, ingresó a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el Ámbito Disciplinario, el memorando CJ-DNJ-SNCD-2026-0236-M (TR: CJ-EXT-2026-00684) de 15 de enero del 2026, suscrito por el abogado Christian Fernando Berrezueta Pineda, Subdirector Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura a la época, mediante el cual se puso en conocimiento el oficio Nro. SEPPMPPTCPJP-FB de 06 de enero del 2026, suscrito por el Abogado Milton Omar Tapia Reinoso, Secretario de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quien a su vez pone en conocimiento el contenido en el auto resolutivo emitido el 24 de diciembre del 2025, a las 09h11 (notificado el 26 de diciembre de 2025, a las 11h16) por los doctores Marco Patricio Navarrete Sotomayor e Inés Maritza Romero Estévez, Jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro del incidente de recusación seguido contra la doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, en la acción de protección Nro. 17203-2024-00524.

CONTINENTAL
AGUA EN BLANCO



DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA
AMBITO DISCIPLINARIO



Por lo que, teniendo como antecedente los hechos puestos en conocimiento, mediante auto de fecha 13 de abril de 2026, a las 15h52, se dispuso la apertura del sumario disciplinario en contra del abogado Carlos Bravo Hernández, el mismo que se encuentra signado con el No. 17001-2026-0083.

Saludos cordiales

GISELA DE
LOURDES IBUJES
CHAMORRO

Firmado digitalmente por
GISELA DE LOURDES IBUJES
CHAMORRO
Fecha: 2026.08.03 17:56:10
-05'00'

Abg. Gisela Ibujés Chamorro Mgt.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA
AMBITO DISCIPLINARIO

"RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que el documento que en 02 foja(s) antecede, es certificación de documento MATERIALIZADO ante mí, el"



Dr. Pedro Castro Falconi
NOTARIO SEXAGESIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO
20 76 1701065 62500

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la (s) fotocopia (s) que antecede (n), que me fue (ron) presentadas en 02 foja(s) útil(es), es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí, Dra. Maria Escobar M., Notaria Sexagésima Quinta Suplente del Cantón Quito, el

15 AGO. 2026
Ab. Maria Augusta Escobar Montenegro
NOTARIA SEXAGESIMA QUINTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

-860-
0000 0042
ochocientos
sesenta

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PICHINCHA, Quito, 15 de abril de 2026, las 15h52. **VISTOS:** En calidad de Directora Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el Ámbito Disciplinario, asumo conocimiento del expediente No. 17091-2026-0083 en virtud de la Resolución No. 186-2023, emitida el 07 de noviembre de 2023, por el Pleno del Consejo de la Judicatura. En lo principal se dispone:

PRIMERO: ANTECEDENTES. - Con fecha 15 de enero del 2026, ingresó a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el Ámbito Disciplinario, el memorando CJ-DNJ-SNCD-2026-0236-M (TR: CJ-EXT-2026-00684) de 15 de enero del 2026, suscrito por el abogado Christian Fernando Berrozueta Pineda, Subdirector Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura a la época, mediante el cual se puso en conocimiento el oficio Nro. SEPPMPPTCJPJ-FB de 06 de enero del 2026, suscrito por el Abogado Milton Omar Tapia Reinoso, Secretario de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quien a su vez pone en conocimiento el contenido de la sentencia emitida el 24 de diciembre del 2025, a las 09h11 por los doctores Marco Patricio Navarrete Sotomayor e Ines Maritza Romero Estevez, Jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro del incidente de recusación seguido contra la doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, en la acción de protección Nro. 17203-2024-00524, en el cual se dispone lo siguiente:

"(...) ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, PRIMERO: Declararse competentes para conocer y resolver el presente incidente de recusación, por encontrarse dentro del ámbito previsto en la Constitución, la LOGJCC, el COFJ y el COGEP. SEGUNDO: ACOGER la recusación presentada por la ingeniera Pamela Erazo Obando, a través de su abogado patrocinador doctor Dario Velástegui, en contra de la doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, por haberse verificado la causal prevista en el artículo 22, numeral 5 del Código Orgánico General de Procesos, esto es, retardar de manera injustificada el despacho de los asuntos sometidos a su competencia, en el marco de una acción constitucional de protección. TERCERO: En consecuencia, SEPARAR a la doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, del conocimiento de la causa constitucional No. 17203-2024-00524 y de todo trámite vinculado a la misma. CUARTO: Disponer a la Secretaría de la Sala que, de manera inmediata, proceda al sorteo de un nuevo juez o jueza ponente, a fin de que integre el Tribunal y sustancie y resuelva sin mayor dilación el recurso de apelación, respetando los principios de celeridad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica. QUINTO: DISPONER SE OFICIE A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, remitiendo copia certificada de esta sentencia y de las actuaciones pertinentes, para que inicie investigación penal por los hechos que encuadran, prima facie, en los presuntos delitos de: 1. Revelación ilegal de datos personales (art. 230.1 COIP); 2. Fraude procesal (art. 272 COIP); 3. Obstrucción de la justicia (art. 270 COIP). SEXTO: DISPONER SE OFICIE AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, para que investigue la conducta disciplinaria de: 1. La jueza recusada, por los hechos descritos; y 2. El abogado de la parte demandada, por deslealtad procesal, violación al COFJ y al COGEP. Sin costas que regular. En atención a la petición de copia de los audios de la audiencia de recusación, por parte del doctor Dario Velástegui, confíerese los mismos, a su costa. NOTIFÍQUESE (...)" (sic) (las negrillas y lo subrayado me pertenece).

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario de Abogados en el Patrocinio de las Causas, que prescribe: "[...] Hasta cuando se conformen las Direcciones Regionales del Consejo de la Judicatura, los procesos disciplinarios que se inicien en contra de abogados o abogados, serán tramitados y resueltos en las Direcciones Provinciales del lugar donde se cometieron los hechos presuntamente constitutivos de infracciones disciplinarias [...]"; en concordancia a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento del Régimen Disciplinario de Abogados en Patrocinio de Causas, considerando que la información que se ha puesto en conocimiento es confiable pues deviene de una autoridad jurisdiccional dentro de un proceso constitucional que se encuentra para su conocimiento, análisis y resolución. **SE DECRETA LA APERTURA DEL SUMARIO DISCIPLINARIO** en contra del abogado **CARLOS GUSTAVO BRAVO HERNANDEZ**, con matrícula profesional Nro. 17-2020-78 del F.A.P, quien a decir de la autoridad jurisdiccional conforme la sentencia judicial de 24 de diciembre del 2025, a las 09h11, emitida por los doctores Marco Patricio Navarrete Sotomayor e Ines Maritza Romero Estevez, Jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro del incidente de recusación contra la doctora Juana Narcisa

Pacheco Cabrera, en la la acción de protección Nro. 17203-2024-00524, atribuyendo tal decisión a la actuación profesional del referido abogado, al punto de calificarla como "deslealtad procesal". En tal virtud, de los hechos atribuidos se desprende que dicha actuación se adecuaría a una prohibición establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial.

TERCERO: RELACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DEL SUMARIO DISCIPLINARIO.- De los antecedentes expuestos, así como del contenido de la sentencia judicial emitida el 24 de diciembre de 2025 a las 09h11, por los doctores Marco Patricio Navarrete Sotomayor e Inés Maritza Romero Estévez, en sus calidades de jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro del incidente de recusación seguido en contra de la doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, en el marco de la acción de protección Nro. 17203-2024-00524, se desprende y advierte lo siguiente:

"(...) VISTOS: Doctores Marco Patricio Navarrete Sotomayor e Inés Maritza Romero Estévez, jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, disponemos lo siguiente: Agréguese a los autos el acta de audiencia, entregada por el señor Secretario, el lunes 22 de diciembre de 2025. Encontrándose la demanda de recusación presentada por el doctor DARIÓ VELÁSTEGUI ENRÍQUEZ, en representación de la ingeniera Pamela Licet Erazo Obando, en contra de la doctora JUANA NARCISA PACHECO CABRERA, Jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; en estado de reducir a escrito la decisión tomada, dentro del término determinado en el artículo 93 del Código Orgánico General de Procesos (en adelante COGEP), se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.

Actor: DARIÓ VELÁSTEGUI ENRÍQUEZ, en representación de la ingeniera Pamela Licet Erazo Obando

Demandada: JUANA NARCISA PACHECO CABRERA, Jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha

SEGUNDO: COMPETENCIA.

Los suscritos doctores Marco Patricio Navarrete Sotomayor e Inés Maritza Romero Estévez, jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrando el Tribunal; somos los jueces hábiles para conocer y resolver el presente proceso de recusación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del COGEP: (...).

CUARTO: INCIDENTES PLANTEADOS Y SU TRÁMITE.

LECTURA DE ESCRITOS PRESENTADOS.

A petición de la defensa técnica de la parte demandada, el Tribunal dispone que el señor secretario dé lectura a los escritos ingresados el 11 de diciembre de 2025.

PRIMER ESCRITO – PETICIÓN DE EXCUSA.

Se da lectura íntegra al escrito presentado a las 13h25, mediante el cual la doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, solicita la excusa del doctor Marco Patricio Navarrete Sotomayor, alegando que este se habría adherido previamente al proyecto de resolución remitido por la jueza ponente, lo cual, a su criterio, lo constituiría en parte procesal e impediría conocer el incidente de recusación.

INTERVENCIÓN DEL DEMANDANTE DOCTOR DARIÓ VELÁSTEGUI ENRÍQUEZ.

El abogado de la parte accionante solicita ser escuchado y manifiesta que la recusación presentada se funda en el retardo injustificado en el despacho del recurso de apelación dentro de la acción de protección, el cual habría superado ampliamente los plazos previstos en la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Alega que la jueza ponente no ha despachado múltiples escritos presentados durante más de diecinueve meses, pese a reiteradas insistencias y formularios F6, lo que incluso derivó en la presentación de una denuncia disciplinaria ante el Consejo de la Judicatura.

INTERVENCIÓN DE LA DEFENSA DE LA DEMANDADA, MAGISTER CARLOS BRAVO HERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA DOCTORA JUANA MARCISA PACHECA CABREJA

El abogado de la parte demandada solicita que se resuelvan previamente las peticiones de excusa y las excepciones previas planteadas, invocando disposiciones del Código Orgánico General de Procesos y alegando falta de competencia e imparcialidad del Tribunal para conocer el incidente. Solicita además que se certifique si se ha procedido a la subrogación del juzgador, conforme al artículo 25 del COGEP.

SUSTANCIACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LOS INCIDENTES.

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA INÉS MARITZA ROMERO ESTÉVEZ:

Bien, una vez que esta juzgadora haya revisado en extenso todo el escrito presentado por el señor abogado, en primer lugar cabe señalar que el abogado se olvida que este es un proceso excepcional y no un proceso ordinario, ni que es de tramitación con el Código Orgánico General de Procesos. El abogado ha presentado la petición de excusa señalando que mantiene una enemistad manifiesta con la suscrita, puesto que se le ha presentado una denuncia, hecho que, en primer lugar, el profesional presenta la excusa; sin embargo, él no es parte procesal dentro de esta causa, por lo que carece absolutamente de legitimación para solicitar la separación de esta jueza, pues las normas del Código Orgánico General de Procesos establecen que únicamente las partes pueden solicitar excusas o recusación, nunca terceros ni abogados ajenos a la relación procesal. Entonces, resulta evidente que el abogado compareciente actúa sin personalidad, sin representación válida y, por lo tanto, sin facultad legal para presentar el pedido, por lo que por sí solo se justifica su rechazo. Adicionalmente, es penoso advertir negativamente la deslealtad procesal desplegada por el referido abogado, pues si él conocía plenamente la existencia de un presunto conflicto previo entre él y mi persona, y la propia jueza recusada sabía también de dicho presunto conflicto, lo cual debió haber sido advertido oportunamente, a pesar de ello, a pocos minutos de instalarse la audiencia, la parte contraria cambia de abogado e incorpora al doctor Bravo, situación que genera una sorpresa procesal y que revela una clara maniobra destinada a dilatar e interferir indebidamente la continuación de este incidente de recusación. Pues no hay más que extenderse en señalar claramente que, al no ser parte procesal, él no tiene ninguna legitimación aquí para presentar un pedido de excusa, por lo que no considero que exista ninguna fundamentación para el hecho y no procede mi excusa, y continúa la tramitación de esta causa, que es una recusación excepcional y como incidente dentro de lo que es el proceso principal. Dado que ya he presentado mis argumentos, no cabe ninguna otra aclaración al respecto, puesto que esa es mi posición final y, evidentemente, como ya lo ha dicho el abogado, no contempla el Código Orgánico General de Procesos una recusación de una recusación; y si es que él considera presentar una acusación por el proceso principal, debería ser parte procesal, de lo que sabemos no lo es. Hasta aquí la presente intervención. Le ruego, por favor, señor juez, para cumplir con el principio de diligencia y celeridad que nos corresponde como juzgadores, continuar con la audiencia, puesto que lamentablemente nos está generando incidente sobre incidente en una causa que hasta el momento no podemos despachar, lamentablemente por todas estas circunstancias. Le pedimos, por favor, se continúe con la siguiente sustanciación, que sería en relación con la petición suya de excusa.

ACLARACIONES SOLICITADAS POR LA PARTE DEMANDADA.

Al amparo de los artículos 256 y 257 del Código Orgánico General de Procesos, tengo dos aclaraciones del auto resolutorio de la doctora Inés Maritza Romero Estévez. La primera solicitud de aclaración es que la magistrada ha indicado que yo soy el abogado de mi cliente y que, por lo tanto, no soy parte procesal; sin embargo, el artículo 22, numeral 11 del Código Orgánico General de Procesos indica, y cito: "Tener con alguna de las partes o sus defensores amistad íntima o enemistad manifiesta". Yo soy el defensor. Segunda aclaración: dentro del proceso 17283-2025-01455, por desaparición involuntaria, que se dio hace

apenas menos de dos semanas, presenté una excusa por la misma razón, una solicitud de excusa por la misma razón, y la doctora Inés Maritza Romero Estévez se excusó indicando que, en efecto, existe una enemistad manifiesta; es decir, ella ya ha mantenido un criterio en unos casos y en este tiene otro criterio, por lo que solicito que se me aclare esos dos puntos para la prosecución de la causa.

ACLARACIÓN POR PARTE DE LA DOCTORA INÉS ROMERO ESTÉVEZ.

Respecto a ello, en primer lugar, no hay aclaración ni ampliación de una negativa de excusa. Si es que lamentablemente el doctor no tiene un conocimiento procesal, es lamentable, pero no existe una aclaración ni ampliación; eso no es un auto, doctor. Simplemente es una constatación en la que no procede una excusa y no me voy a excusar, puesto que este no es un proceso penal, usted no está como abogado dentro del proceso penal principal; este es un incidente que incluso la señora jueza ya ha presentado sus argumentos por escrito, y no es necesario incluso que exista una defensa técnica, puesto que el Código Orgánico General de Procesos no lo contempla como obligatoriedad. Entonces, en vista de eso, no existe aclaración ni ampliación de lo que acabo de resolver, puesto que usted está generando incluso más incidentes dentro de este proceso, sabiendo que no existe lo que acaba de señalar porque no es ningún auto. Entonces, en audiencia estamos respondiendo: no hay argumentos para excusar y solicito que continúe con la diligencia, doctor. Muy amable.

RESOLUCIÓN AL PEDIDO DE EXCUSA DEL DOCTOR MARCO NAVARRETE SOTOMAYOR.

En relación con lo manifestado en el escrito presentado el 11 de diciembre del 2025, a las 11 horas 25 minutos, con una petición de excusa al que está haciendo uso de la voz Marco Navarrete, conforme el artículo 25 del COGEP, en el sentido de que la señora doctora Juana Narcisca Pacheco Cabrera, ha emitido el 30 de octubre de 2025 una resolución, 27 días antes de que presenten una demanda de recusación; que el que está haciendo uso de la voz, le ha respondido en correo del 30 de octubre de 2025, es decir, el mismo día, a las 14 horas con 25 minutos, con pequeñas correcciones en rojo respecto a ese proyecto; que la abogada Burbano, ayudante judicial, el mismo día, ha puesto en el despacho de la causa, a la doctora Romero, 27 días antes de la recusación y que envió el proyecto para la resolución a la que el doctor Navarrete se adhirió, que al formar parte del tribunal y adherirse al proyecto, se constituye en parte procesal impedida de conocer la recusación; que solo falta la posición de la doctora Romero, que no ha subido un voto salvado; que este incidente de petición de excusa, se fundamenta en el numeral 1 del artículo 20 del COGEP y el literal k), numeral 7 del artículo 76 de la Carta Fundamental, al encontrarse inmerso en la causal número uno, solicita su excusa y que se complete con los jueces restantes, y que se suspendería mi competencia. En ese sentido, se responde a esta petición de excusa, indicando que la excusa es inherente a la condición del juez, no es una demanda de recusación. La excusa procedería si considerara personalmente que me encuentro impedido de conocer de forma imparcial la presente demanda incidental de recusación, dentro del proceso principal constitucional número 17203-2024-00524. En ese sentido, no tiene ningún asidero real para va presentar mi excusa respecto al conocimiento de esta demanda incidental de recusación dentro del proceso principal de la causa constitucional. Además, no considero que exista ninguna causal de excusa de la cual yo tenga que valerme para apartarme del conocimiento de la causa. En tal virtud, para aplicar los principios de debida diligencia y celeridad, rechazo esa petición de excusa presentada en mi contra. Y para continuar con el proceso, por secretaría, que se lean los otros escritos que han sido presentados, por favor. Procedo, señores jueces. Como digo, señores jueces, este escrito fue presentado el día jueves 11 de diciembre del 2025 a las 13:35.

INTERVENCIÓN DE LA DEFENSA DE LA ACCIONANTE: (...).

INTERVENCIÓN DE LA DEFENSA TÉCNICA DE LA DEMANDADA: La recusación planteada se la lleva con el COGEP. El Código Orgánico General de Procesos establece que, si es que no se ha fijado un procedimiento especial, como el sumario, monitorio o ejecutivo, deberá estarse a las reglas del artículo 294 del COGEP, desarrollo de las audiencias del procedimiento monitorio. Mi pregunta, y solicito esta aclaración a su autoridad, es si es que no se va a manejar ningún procedimiento establecido en el COGEP, cómo se va a llevar la sustanciación de esta audiencia y cómo se va a garantizar entonces un debido proceso si no existe un procedimiento.

0000

0044

-862-

Ochocientos
sesenta y
dos.

RESOLUCIÓN SOBRE LAS EXCEPCIONES PREVIAS.

Hemos procedido a deliberar respecto a la petición de la demandada de que las excepciones previas deben resolverse primero, conforme al artículo 153, numerales 1 y 3 del COGEP. El procedimiento de recusación se encuentra normado de manera independiente dentro de los artículos 25 al 28 del COGEP, con reglas propias, secuencia procesal y audiencia específica distinta al proceso principal de conocimiento. Las excepciones previas están concebidas como un mecanismo de defensa dentro del proceso principal para cuestionar la admisibilidad o forma de la demanda o aspectos procesales dentro de un mismo proceso principal, tales como incompetencia, incapacidad o falta de legitimación u otros supuestos estrictamente tasados. Sin embargo, tales excepciones no tienen aplicación en el procedimiento de recusación, el cual se rige por una normativa que incluye la presentación de la demanda de recusación, determinación de caución cuando corresponde, calificación y citación de las partes, audiencia única para resolverla y decisión de fondo al término de dicha audiencia. Dado que el procedimiento de recusación es un incidente autónomo con reglas especiales en el COGEP, no resulta procedente invocar o aplicar excepciones previas del proceso principal dentro del juicio de recusación, pues ello implicaría mezclar reglas procedimentales de procedimientos distintos y contraviene la lógica procesal establecida por la ley. Es decir, no resulta procedente ni pertinente solicitar o fundar excusas, recusaciones o pronunciamientos del juez con base en excepciones previas, toda vez que estas últimas no forman parte del procedimiento de recusación. Su aplicación es improcedente procesalmente; inclusive, lo manifestado en sus excepciones previas ya fue contestado tanto por la doctora Inés Maritza Romero Estévez como por el doctor Marco Navarrete Sotomayor, al momento en que manifestamos que no es pertinente excusarnos del conocimiento de la presente causa, que lo único que está haciendo es dilatar la continuación de esta demanda incidental de recusación. En tal virtud, se dispone continuar con la audiencia respectiva.

ACLARACIONES.

DEFENSA DE LA DEMANDADA: Por cuanto en su auto resolutorio que acaba de emitir, no ha manifestado si es que me está negando claramente las excepciones, queda eso en la ambigüedad. ¿Me está negando las excepciones?

RESPUESTA: Precisamente estaba manifestando que las excepciones no proceden en una demanda incidental de recusación y que, en principio, a la defensa y al debido proceso usted ya escuchó los fundamentos, tanto de la doctora Romero como del suscrito, para no excusarnos del conocimiento de esta causa.

DEFENSA DE LA DEMANDADA: En el sentido de que se me están negando las excepciones previas, solicito que me aclare cuál es el procedimiento que se va a llevar para sustanciar esta controversia, conforme lo dispone el artículo del COGEP sobre la audiencia. En ese sentido, honorable magistrado, y al amparo del artículo 76, numeral 7, literal m), de la Constitución de la República del Ecuador, que nos garantiza el derecho a poder recurrir de los autos interlocutorios, de los fallos y demás sentencias, apelo con efecto diferido de esta negativa a las excepciones previas.

RESPUESTA: El Código Orgánico General de Procesos establece claramente que no existe apelación respecto a esta demanda incidental de recusación. Siendo un tribunal, tenga la bondad, abogado, está causando muchas dilaciones e interferencias; si no tiene el conocimiento previo de la tramitación dentro de lo que es el Código Orgánico General de Procesos y esta audiencia, le rogamos, por favor, no seguir incidentando, porque ya hemos dejado claro, se ha establecido claramente, al tratarse este de un incidente de recusación dentro de un proceso principal, que es una acción de protección, no es procedente la petición de excepciones y no es un auto el que hemos emitido; simplemente estamos señalándole que ninguno de los juzgadores presentes, además, ya dio contestación en sus excusas. Se dispone la continuación de la audiencia, puesto que si el abogado sigue incidentando, las normas del Código Orgánico de la Función Judicial nos dan la potestad sancionadora en caso de actuaciones desleales por parte de los abogados.

DEFENSA DE LA DEMANDADA: No es mi afán dilatar esta audiencia; de hecho, quien presenta el incidente en la acción de protección, ha sido la parte accionante. Sin embargo, lo que sí tengo que decir es

que no es desconocimiento de la norma. Hay que recordar que el Código Orgánico General de Procesos, a diferencia del Código Orgánico Integral Penal, es norma de derecho privado, y cuando hay ambigüedad en la norma o antinomias o cualquier situación, se debe estar a la Constitución de la República del Ecuador, que está por encima de todas las normas y reglamentos, y esa norma me permite recurrir del fallo o del auto resolutorio. En todo caso, yo expongo, como defensa técnica que soy, amparado en la Constitución de la República del Ecuador, mi argumento. Si usted, honorable magistrado, si usted, honorable magistrada, me niega la apelación con efecto diferido, en ese caso, ya queda en audiencia y yo podré tomar otras acciones a futuro.

DECISIÓN SOBRE LA PETICIÓN DE LA DEMANDADA. No hemos resuelto todavía esta demanda incidental de recusación. No hay ningún auto resolutorio en esta audiencia. Para continuar, por favor, no existe ningún auto resolutorio de esta audiencia todavía y todavía no hemos resuelto la demanda incidental de recusación. Además, tanto la Corte Constitucional establece que no todo tiene derecho a una doble instancia, en virtud de la naturaleza de cada procedimiento. En tal virtud, por esa razón y porque no existe una norma expresa que le faculte apelar respecto a una decisión que todavía no se ha tomado sobre una demanda incidental de recusación, se niega la petición (...).

NOVENO: DECISIÓN.-

En aplicación a los derechos constitucionales de tutela judicial, debido proceso y seguridad jurídica, estos juzgadores han verificado la prueba pedida, presentada y practicada conforme a la Constitución y la ley, consideran que la jueza provincial doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, se encuentra inmersa en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 22 del COGEP; por lo tanto, los jueces provinciales doctora Inés Maritza Romero Estévez y doctor Marco Patricio Navarrete Sotomayor, integrantes del Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, PRIMERO:** Declararse competentes para conocer y resolver el presente incidente de recusación, por encontrarse dentro del ámbito previsto en la Constitución, la LOGJCC, el COFJ y el COGEP. **SEGUNDO:** ACOGER la recusación presentada por la ingeniera Pamela Erazo Obando, a través de su abogado patrocinador doctor Darío Velástegui, en contra de la doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, por haberse verificado la causal prevista en el artículo 22, numeral 5 del Código Orgánico General de Procesos, esto es, retardar de manera injustificada el despacho de los asuntos sometidos a su competencia, en el marco de una acción constitucional de protección. **TERCERO:** En consecuencia, **SEPARAR** a la doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, del conocimiento de la causa constitucional No. 17203-2024-00524 y de todo trámite vinculado a la misma. **CUARTO:** Disponer a la Secretaría de la Sala que, de manera inmediata, proceda al sorteo de un nuevo juez o jueza ponente, a fin de que integre el Tribunal y sustancie y resuelva sin mayor dilación el recurso de apelación, respetando los principios de celeridad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica. **QUINTO:** **DISPONER SE OFICIE A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO,** remitiendo copia certificada de esta sentencia y de las actuaciones pertinentes, para que inicie investigación penal por los hechos que encuadran, prima facie, en los presuntos delitos de: 1. Revelación ilegal de datos personales (art. 230.1 COIP); 2. Fraude procesal (art. 272 COIP); 3. Obstrucción de la justicia (art. 270 COIP). **SEXTO:** **DISPONER SE OFICIE AL CONSEJO DE LA JUDICATURA,** para que investigue la conducta disciplinaria de: 1. La jueza recusada, por los hechos descritos; y 2. **El abogado de la parte demandada, por deslealtad procesal, violación al COFJ y al COGEP.** Sin costas que regular. En atención a la petición de copia de los audios de la audiencia de recusación, por parte del doctor Darío Velástegui, confíerale los mismos, a su costa. **NOTIFÍQUESE.- (...).** (sic) [lo resaltado y subrayado me pertenece].

En consecuencia, la actuación del abogado **CARLOS GUSTAVO BRAVO HERNÁNDEZ**, con matrícula profesional Nro. [REDACTED] supondría el ejercicio abusivo del derecho de acción y contradicción, en violación del principio de buena fe y lealtad procesal previsto en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial; al presuntamente evidenciarse el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe orientados a retardar indebidamente el progreso de la litis, pues, conforme se desprende de la sentencia judicial, el abogado sumariado, presentó una "petición de excusa señalando que mantiene una enemistad manifiesta", con la doctora Inés Maritza Romero Estevez, si embargo dicha juzgadora en sentencia manifestó que el abogado sumariado "no es parte procesal dentro de esta causa, por lo que carece absolutamente de

-863-
0000 0045
ochocientos y tres

legitimación para solicitar la separación de esta jueza, pues las normas del Código Orgánico General de Procesos establecen que únicamente las partes pueden solicitar excusas o recusación, nunca terceros ni abogados ajenos a la relación procesal", así como también, que se señaló que como abogado actuó sin personalidad, sin representación válida y, por lo tanto, sin facultad legal para presentar el pedido de excusa, y que, el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández, pese a tener conocimiento previo de la existencia de una presunta "enemistad manifiesta" con la doctora Ines Maritza Romero Estevez, asumió la defensa técnica de la parte demandada y utilizó dicha circunstancia como fundamento para intentar la excusa a dicha juzgadora, configurando una "sorpresa procesal", conducta que fue expresamente calificada por la autoridad jurisdiccional como "deslealtad procesal", así como también, que en dicha sentencia se señala que el Código Orgánico General de Procesos, no contempla "una recusación de una recusación", en este sentido, todas estas actuaciones señaladas en líneas anteriores por la jueza revelarían maniobras destinadas a dilatar e interferir indebidamente en la sustanciación del incidente de recusación seguido contra la doctora Juana Narcisca Pacheco Cabrera; elementos que, en su conjunto, evidenciarían que la actuación del abogado sumariado estuvo orientada a la presunta utilización indebida de mecanismos procesales con fines dilatorios, en violación de los deberes de buena fe y lealtad que rigen el ejercicio profesional, dejando constancia que dichas conductas fueron calificadas expresamente por la autoridad jurisdiccional como "deslealtad procesal".

En tal virtud, los hechos descritos se subsumirían, en las prohibiciones establecidas en el artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial, en sus numerales: 7, al haber intervenido en el proceso de manera tal que su actuación estuvo encaminada a motivar la excusa de la jueza Ines Maritza Romero Estevez; y, 9, al haber ejercido el derecho de acción o contradicción de forma abusiva, violentado los principios de buena fe y lealtad, mediante la utilización de mecanismos procesales destinados a retardar indebidamente el progreso de la litis; conducta que fue expresamente calificada por la autoridad judicial como deslealtad procesal.

Lo anterior se sustenta en la intervención de la doctora Ines Maritza Romero Estevez, quien señala que: "(...) El abogado ha presentado la petición de excusa señalando que mantiene una enemistad manifiesta con la suscrita, puesto que se le ha presentado una denuncia, hecho que, en primer lugar, el profesional presenta la excusa; sin embargo, él no es parte procesal dentro de esta causa, por lo que carece absolutamente de legitimación para solicitar la separación de esta jueza, pues las normas del Código Orgánico General de Procesos establecen que únicamente las partes pueden solicitar excusas o recusación, nunca terceros ni abogados ajenos a la relación procesal. Entonces, resulta evidente que el abogado compareciente actúa sin personalidad, sin representación válida y, por lo tanto, sin facultad legal para presentar el pedido, por lo que por sí solo se justifica su rechazo. Adicionalmente, es penoso advertir negativamente la deslealtad procesal desplegada por el referido abogado, pues si él conocía plenamente la existencia de un presunto conflicto previo entre él y mi persona, y la propia jueza recusada sabía también de dicho presunto conflicto, lo cual debió haber sido advertido oportunamente, a pesar de ello, a pocos minutos de instalarse la audiencia, la parte contraria cambia de abogado e incorpora al doctor Bravo, situación que genera una sorpresa procesal y que revela una clara maniobra destinada a dilatar e interferir indebidamente la continuación de este incidente de recusación. Pues no hay más que extenderse en señalar claramente que, al no ser parte procesal, él no tiene ninguna legitimación aquí para presentar un pedido de excusa, por lo que no considero que exista ninguna fundamentación para el hecho y no procede mi excusa, y continúa la tramitación de esta causa, que es una recusación excepcional y como incidente dentro de lo que es el proceso principal. Dado que ya he presentado mis argumentos, no cabe ninguna otra aclaración al respecto, puesto que esa es mi posición final y, evidentemente, como ya lo ha dicho el abogado, no contempla el Código Orgánico General de Procesos una recusación de una recusación; y si es que él considera presentar una acusación por el proceso principal, debería ser parte procesal, de lo que sabemos no lo es. Hasta aquí la presente intervención (...)".

CUARTO. - TIPIFICACIÓN DE LA PRESUNTA INFRACCIÓN. - Los hechos anteriormente relatados se adecuarían a lo establecido en el artículo 335 numerales 7 y 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, el mismo que determina:

"Art. 335.- PROHIBICIONES A LOS ABOGADOS EN EL PATROCINIO DE LAS CAUSAS. - Es prohibido a los abogados en el patrocinio de las causas: (...) 7. Intervenir en las causas cuando esto motivare la excusa del juez o conjuer; y, 9. Ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, maliciosa o temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad, a través de prácticas tales como presentación de prueba deformada, empleo de artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar

indebidamente el progreso de la litis; y [...]” (las negrillas y el subrayado me pertenecen).

En concordancia con el artículo 26 del mismo cuerpo legal que indica:

“Art. 26.- **PRINCIPIO DE BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL.**- En los procesos judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogadas o abogados que observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis.”. (Las negrillas y el subrayado me pertenecen).

Sanción que se encuentra determinada en el artículo 336 ibidem que indica:

“Art. 336.- **SANCIONES.**- Sin perjuicio de las facultades correctivas otorgadas a los jueces por este Código, las sanciones que pueden imponerse a las abogadas y los abogados a que se refieren los artículos anteriores, serán impuestas por las direcciones regionales o provinciales respectivas del Consejo de la Judicatura. Las sanciones consistirán en la imposición de multas de hasta tres remuneraciones básicas unificadas. La mora por el lapso de tres meses del pago de las multas impuestas por las y los jueces o por el Consejo de la Judicatura, ocasionará la suspensión en el Foro de Abogados, dicha suspensión subsistirá hasta que se haga efectivo el pago”.

QUINTO.- NOTIFICACIÓN.- Se dispone notificar al abogado **CARLOS GUSTAVO BRAVO HERNANDEZ**, con matrícula profesional [REDACTED] conforme lo determina el artículo 24 del Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario de Abogados en el Patrocinio de las Causas, norma reglamentaria que al respecto señala: “A la abogada o abogado investigado se le notificará con el auto de apertura del procedimiento disciplinario, mediante cualquiera de las siguientes formas: a) En persona; b) Por tres boletas dejadas en su domicilio o lugar de trabajo, en días y horas laborables distintos; c) Por tres ocasiones, mediante boletas dejadas en la casilla judicial de la o el abogado, en días y horas laborables distintos; o, d) En caso de ser imposible determinar el domicilio o residencia, se lo notificará, por una sola vez, mediante publicación en uno de los diarios de mayor circulación de la circunscripción territorial donde presta sus servicios profesionales...”, acompañando para tal efecto una copia de la documentación que origina el presente sumario, a fin de que el sumariado ejerza su derecho a la defensa en torno a los hechos expuestos en el presente auto. Para efectos de la notificación envíese atento memorando al Foro de Abogados de Pichincha y Sala de Sorteos y Casillas Judiciales de Quito respectivamente, solicitando de la manera más comedida, que en el término de tres días, remita a la Dirección Provincial de Pichincha en el Ámbito Disciplinario, una certificación en la que conste, la siguiente información perteneciente al abogado **CARLOS GUSTAVO BRAVO HERNANDEZ**, con matrícula profesional [REDACTED] correos electrónicos, direcciones domiciliarias, dirección de oficina y casillero judicial físico, así como también se servirá a certificar las sanciones impuestas.

SEXTO.- EJERCICIO DE LA DEFENSA, MEDIOS DE PRUEBA QUE SE DISPONGA Y SOLICITUD DE LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS.- 1) Se concede al abogado **CARLOS GUSTAVO BRAVO HERNANDEZ**, con matrícula profesional [REDACTED] el término de **CINCO DÍAS PARA QUE CONTESTEN**, anuncien y acompañen las pruebas de descargo que estimen pertinentes, contados a partir de la notificación con el auto de inicio de sumario, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario de Abogados en el Patrocinio de las Causas. Se le recuerda al abogado sumariado que en caso de no comparecer al presente procedimiento disciplinario dentro del término antes señalado, se continuará la tramitación del expediente conforme así lo determina el inciso final del artículo 54 Ibid. 2) Se le recuerda al abogado, que el expediente disciplinario tiene por objeto determinar si la conducta del mismo constituye infracción disciplinaria, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron cometidas, la responsabilidad administrativa del sumariado y la gravedad para imponer la sanción que corresponda. 3) De conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27, 28 y 30 del Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario de Abogados en el Patrocinio de las Causas, corresponde a los sujetos intervinientes dentro del procedimiento disciplinario, obtener y remitir los medios probatorios, debiendo dejar en claro que se practicará la prueba debidamente anunciada; a más de aquello, conforme lo establece el artículo 29 Ibid., se deja a salvo el derecho a practicar pruebas por parte de la Dirección Provincial de Pichincha, con el objeto de esclarecer los hechos materia del presente sumario. 4) De

0000 -864-
0046 ochocientos
sesenta y cuatro

acuerdo a lo previsto en los artículos 31 y 61 del Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario de Abogados en el Patrocinio de las Causas, mediante Secretaría se agregará al presente expediente una certificación de las sanciones impuestas al abogado CARLOS GUSTAVO BLAYO HERNÁNDEZ, con matrícula profesional [REDACTED] 5) La Dirección Provincial, se reserva el derecho de calificar la pertinencia de la prueba y despachar solamente la prueba que ha sido debidamente actuada, que sea materia del sumario disciplinario y que tenga relación con las acciones u omisiones imputadas, garantizando sus derechos en los términos establecidos en los artículos 75, 76, 82, 169 de la Constitución de la República del Ecuador; artículos 5, 6, del Código Orgánico de la Función Judicial y demás normas constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.

SÉPTIMO.- PRUEBAS DE OFICIO: De conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27, 28 y 30 del Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario de las Abogadas y Abogados en el Patrocinio de las Causas, se tomará en cuenta los siguientes medios de prueba: 1) Se reproducirá y se tendrá en cuenta como prueba de parte de la administración la siguiente información: a) El oficio Nro. SEPPMPPTCPJP-FR de 06 de enero del 2026, suscrito por el Abogado Milton Omar Tapia Reinoso, Secretario de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quien pone en conocimiento el contenido de la sentencia emitida el 24 de diciembre del 2025, a las 09h11 por los doctores Marco Patricio Navarrete Sotomayor e Ines Maritza Romero Estevez, Jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro del incidente de recusación contra la doctora Juana Narcisca Pacheco Cabrera, dentro de la acción de protección Nro. 17203-2024-00524. 2) Remítase atento oficio a la Secretaria de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a fin de que en término de tres (3) días contados a partir de su notificación remita a la Dirección Provincial de Pichincha en el Ámbito Disciplinario, remita copias certificadas del incidente de recusación seguido contra la doctora Juana Narcisca Pacheco Cabrera, tramitado en la acción de protección Nro. 17203-2024-00524, dentro del periodo comprendido entre 07 de mayo del 2024 hasta el 24 de diciembre del 2025, fecha en la cual se emite la respectiva sentencia, en este contexto adjuntará copias certificadas de todo lo actuado en dicho incidente incluyendo escritos (con sus anexos), razones, providencia, autos y resoluciones. 3) Ejecútese todas las acciones necesarias para recabar las pruebas de cargo y descargo pertinentes al caso.

OCTAVO. - SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO JUDICIAL. - Se le recuerda al abogado sumariado la obligación que tienen de señalar casilla judicial en la ciudad de Quito y/o dirección de correo electrónico para recibir futuras notificaciones, así como también se le previene que de no comparecer se continuará con el sumario disciplinario en rebeldía.

NOVENO. - Actúe la abogada Emily Yobaska Carlosama Madera en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Dirección Provincial de Pichincha en el Ámbito Disciplinario del Consejo de la Judicatura. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-

GISELA DE LOURDES IBUJES CHAMORRO
DIRECTORA PROVINCIAL DE PICHINCHA EN EL ÁMBITO DISCIPLINARIO

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la (s) fotocopia (s) que antecede (n), que me fue (ron) presentadas en [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] es (son) FIEL COMPULSA del documento presentado ante mí, Notario Sexagésimo Quinto del Cantón Quito, 20171701065D. CO 2651



25 AGO 2026

Ab. María Augusta Escobar Montenegro
NOTARIA SEXAGÉSIMA QUINTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la (s) fotocopia (s) que antecede (n), que me fue (ron) presentadas en [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí, Notario Sexagésimo Quinto del Cantón Quito, 20171701065D. CO 2651



Pedro Castro Falconi
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO
20 2651 01065 CO 2651

PAGINA EN BLANCO

CERTIFICACIÓN

Revisada la información de los archivos del sistema de registro computarizado del Sistema Automático de Trámite Judicial de esta Subdirección, no constan sanciones de destitución, ni suspensión en ejercicio de su profesión como abogada, impuestas por el Pleno del Consejo de la Judicatura en contra de la DOCTORA INÉS MARITZA ROMERO ESTEVEZ.

Se deja constancia de que la presente certificación se basa en la información y documentación entregada por la administración anterior, sobre la cual se ha venido alimentando la base de datos del registro de sanciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y se confiere sin perjuicio de la información que repose en las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura. Certifico.-

Quito, 13 de febrero de 2026.

MARIA JOSE
MONCAYO
VILLAVICENCIO

Firmado digitalmente por
MARIA JOSE MONCAYO
VILLAVICENCIO
Fecha: 2026.02.13
18:25:37 -05'00'

Mgr. María José Moncayo Villavicencio

SECRETARIA ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION NACIONAL
DE CONTROL DISCIPLINARIO-CONSEJO DE LA JUDICATURA

"RAZÓN - De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que el documento que en (foja(s) antecede, es certificación de documento FOTOCOPIADO ante mí, el"

19 FEB 2026



Dr. Pedro Castro Falconi
NOTARIO SEXAGESIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO
1701065

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la (s) fotocopia (s) que antecede (n), que me fue (ron) presentadas en (foja(s) útil(es), es (son) FIEL COMPULSA del documento presentado ante mí, Notario Sexagesimo Quinto del Cantón Quito. 20171701065D.



25 AGO 2026

Ab. María Augusta Escobar Montenegro
NOTARIA SEXAGESIMA QUINTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO



18 AGO 2026

Dr. Pedro Castro Falconi
NOTARIO SEXAGESIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

0000 0047 865-
ochocientos
sesenta y
cinco.



Oficio No. FCE-DTH-2018-002-IMRE

Quito, 26 de septiembre de 2018

Asunto: CERTIFICACIÓN SANCIONES - DRA. ROMERO ESTÉVEZ INÉS MARITZA

Inés Maritza Romero Estevez

**CIUDADANO
SAN BLAS**

En atención al **Oficio No. 002-IMRE-2018** de fecha 21 de septiembre de 2018, mediante el cual solicita "...una certificación en la que se haga constar que la suscrita ex servidora judicial no cuenta con ningún tipo de sanción disciplinaria...", me permito manifestar que:

Una vez revisado el expediente personal de la ex servidora, el cual reposa en el Archivo de la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado, **CERTIFICO** que:

La doctora **ROMERO ESTÉVEZ INÉS MARITZA**, titular de la cédula de ciudadanía número [REDACTED] presto sus servicios en calidad Agente Fiscal de la Fiscalía Provincial del Pichincha, **NO** registra ninguna sanción disciplinaria, desde su fecha de ingreso, el 07 de septiembre de 2000 hasta el 10 de mayo de 2013, fecha en la cual se desvincula de la Fiscalía General del Estado.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Lourdes Margarita de la Cueva Jacome
**Directora de Talento Humano
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**

Referencia: Oficio No. 002-IMRE-2018

UTAL/DJLM

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) que me fue (n) presentada(s) ante mi, (n) la(s) original(es), es (son) **FIEL COPIA** del documento presentado ante mi. 20 17010651



18 AGO 2026

Dr. Pedro Castro Falconí
NOTARIO SEXAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

"RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que el documento que antecede, es certificación de documentos **MADEIRADO** ante mi, el"

18 FEB 2026

Dr. Pedro Castro Falconí
NOTARIO SEXAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
20 17010651

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la (n) fotocopia (s) que antecede (n), que me fue (ron) presentada(s) en (n) la(s) original(es), es (con) **FIEL COMPULSA** del documento presentado ante mi, Notario Sexagesima Quinto del Cantón Quito. 201717010650



25 AGO 2026

Ab. María Augusta Escobar Montenegro
NOTARIA SEXAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

THE
FEDERAL
BUREAU OF
INVESTIGATION
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
JUSTICE
WASHINGTON, D. C.
20535



Factura: 002-002-000112654

0000 0049



20261701065C02683

-867-
ochocientos
sesenta
y siete

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20261701065C02683

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual (es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a OFICIO NO. CER-002-CPP-IMRE-2026 y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado (s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 25 DE AGOSTO DEL 2026, (10:08).



NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA ESCOBAR MONTENEGRO

NOTARÍA SEXAGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 06635-DP17-2026-SE

Quito D. M., 14 de agosto de 2026

Oficio No. CER-002-CPP-IMRE-2026

Asunto: Solicitud de certificación causa judicial No. 17203-2024-00524.

Señor/a:

Secretario/a de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha

En su despacho.-



De mi consideración:

Yo, Inés Maritza Romero Estévez, titular de la cédula de ciudadanía No. [REDACTED] Jueza de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, solicito que, en el ámbito de sus competencias, se sirva certificar si, dentro de la causa judicial No. 17203-2024-00524, el ciudadano Carlos Gustavo Bravo Hernández tiene la calidad de parte procesal.

Asimismo, sírvase certificar el estado procesal en el que se encuentra la referida causa judicial y si, a la fecha, alguna de las partes procesales ha presentado una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador. De ser el caso, sírvase informar la fecha en la que dicha acción fue presentada y el estado en el que se encuentra; y, de no haberse presentado, sírvase certificar si las partes procesales aún se encuentran dentro del término previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para ejercer dicha acción.

Atentamente,

[REDACTED]
Dra. Inés Maritza Romero Estévez

Jueza de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la (s) fotocopia (s) que antecede (n), que me fue (ron) presentadas en [REDACTED] foja(s) útil(es), es (son) **FIEL COPIA** del documento presentado ante mí, Dra. María Escobar M., Notaria Sexagésima Quinta Suplente del Cantón Quito, el **25 AGO. 2026**

Ab. María Augusta Escobar Montenegro
NOTARÍA SEXAGÉSIMA QUINTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

15:21
14-08-2026

-869-

0000

0051

Ochocientos
sesenta y
nueve.

Quito D. M., 14 de agosto de 2026

Oficio No. CER-002-CPP-IMRE-2026

Asunto: Solicitud de certificación causa judicial No. 17203-2024-00524.

Señor/a:

Secretario/a de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha

En su despacho.-

De mi consideración:

Yo, Inés Maritza Romero Estévez, titular de la cédula de ciudadanía No. [REDACTED] Jueza de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, solicito que, en el ámbito de sus competencias, se sirva certificar si, dentro de la causa judicial No. 17203-2024-00524, el ciudadano Carlos Gustavo Bravo Hernández tiene la calidad de parte procesal.

Asimismo, sírvase certificar el estado procesal en el que se encuentra la referida causa judicial y si, a la fecha, alguna de las partes procesales ha presentado una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador. De ser el caso, sírvase informar la fecha en la que dicha acción fue presentada y el estado en el que se encuentra; y, de no haberse presentado, sírvase certificar si las partes procesales aún se encuentran dentro del término previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para ejercer dicha acción.

Atentamente,

[REDACTED]

~~Dra. Inés Maritza Romero Estévez~~

Jueza de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha

[Handwritten signature]

15.21
14-08-2026



SEPPMPPTCPJP-OT
Quito D. M., 14 de agosto de 2026

Asunto: Contestación a Oficio No. CER-002-CPP-IMRE-2026 – Certificación causa judicial No. 17203-2024-00524.

Señora

Dra. Inés Maritza Romero Estévez

Jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha

En su despacho.-

De mi consideración:

En atención a su Oficio No. CER-002-CPP-IMRE-2026, de 14 de agosto de 2026, y en mi calidad de Secretario Relator de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, luego de la revisión del expediente físico y del sistema SATJE correspondiente a la causa judicial No. 17203-2024-00524, **CERTIFICO:**

PRIMERO.- El señor Carlos Gustavo Bravo Hernández **no ostenta la calidad de parte procesal** —ni como accionante ni como accionado— dentro de la causa No. 17203-2024-00524, seguida por la señora Pamela Licet Erazo Obando en contra del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), con intervención de la Procuraduría General del Estado. Su intervención en el expediente se limita a su comparecencia como procurador judicial y/o abogado patrocinador de la doctora Juana Narcisa Pacheco Cabrera, Jueza Provincial que integró inicialmente el Tribunal Ad-quem y fue separada del conocimiento de la causa como consecuencia de la recusación planteada en su contra por la entidad accionada, aceptada dentro de la sustanciación del recurso de apelación, conforme consta en el numeral 11 de la sentencia de 24 de julio de 2026.

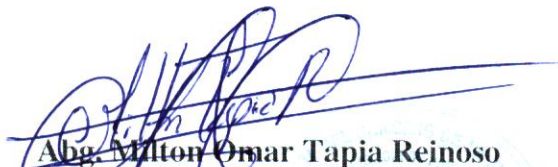
SEGUNDO.- La causa se encuentra actualmente en estado de resolver el recurso de aclaración y ampliación interpuesto por el abogado Nicolás Camilo López Laspina, procurador judicial de la parte accionante, al amparo del artículo 94 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), respecto de la sentencia de mayoría dictada el 24 de julio de 2026 y notificada el 27 de julio de 2026. El referido recurso se encuentra pendiente de despacho, por lo que la sentencia en mención **no se encuentra ejecutoriada**.

TERCERO.- No consta a la presente fecha que alguna de las partes procesales haya presentado acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador en relación con la sentencia dictada dentro de esta causa. En cuanto al término previsto para el ejercicio de dicha acción, se certifica que el término de veinte días establecido en el artículo 60 de la LOGJCC **no ha iniciado su decurso**, en atención a lo dispuesto en el artículo 255

del Código Orgánico General de Procesos, norma de aplicación supletoria conforme la disposición final de la LOGJCC, que establece que, de haberse solicitado la aclaración o ampliación de la sentencia, los términos para interponer los recursos que procedan correrán a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que resuelva dicha solicitud. En consecuencia, las partes procesales conservan íntegro el término legal para deducir, de estimarlo pertinente, la acción extraordinaria de protección, una vez resuelto y notificado el recurso de aclaración y ampliación actualmente pendiente.

Particular que certifico para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Abg. Milton Omar Tapia Reinoso
SECRETARIO DEL TRIBUNAL QUINTO DE LA SALA ESPECIALIZADA DE
LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.
TELÉFONO: (02) 3953300 EXT. 24422

0000

0053

- 871-
ochocientos
setenta y
uno.

Quito D. M., 14 de agosto de 2026

Oficio No. CD-CJP-IMRE-004-2026

Asunto: Solicitud de certificación relacionada con la causa No. 17203-2024-00524.

Señora doctora:

Gisela Ibujes Chamorro

Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, ámbito disciplinario
Ciudad.-

De mi consideración:

Yo, doctora Inés Maritza Romero Estévez, titular de la cédula de ciudadanía No. [REDACTED] en mi calidad de servidora de la Función Judicial, comparezco ante usted y solicito se sirva disponer a la servidora o servidor que corresponda la emisión de una certificación clara y precisa en la que se haga constar si el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernández, titular de la cédula de ciudadanía No. [REDACTED] ha presentado denuncia disciplinara por mis actuaciones jurisdiccionales dentro de la causa judicial No. 17203-2024-00524; y, de ser el caso, certificar el estado procesal en el que esta se encuentra.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en la cuenta de correo electrónico:

Atentamente,

Dra. Inés Maritza Romero Estévez

Jueza de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha

Marco Farinango
14/08/2026 15:31
- 1 foga





Factura: 002-002-000112655



20261701065C02684

0000

0054

-872-
ochocientos
setenta
y
dos

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20261701065C02684

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual (es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a OFICIO NO. CD-CJP-IMRE-002-2026 y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 25 DE AGOSTO DEL 2026, (10:08).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20261701065C02684

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 3 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) INES MARITZA ROMERO ESTEVEZ, de la página web y/o soporte electrónico, <https://outlook.live.com/mail/id/AAKALgAAAAAHYQDEapme...> el día de hoy 25 DE AGOSTO DEL 2026, a las 10:08, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia física del documento materializado queda archivado en el libro de Certificaciones. CERTIFICACIÓN La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 25 DE AGOSTO DEL 2026, (10:08).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20261701065C02684

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento OFICIO NO. 1902-SSPPMPPTCYCO-CNJ-2026 que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 25 DE AGOSTO DEL 2026, (10:08).



NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA ESCOBAR MONTENEGRO

NOTARÍA SEXAGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 06635-DP17-2026-SE

RECEIVED
NOTARÍA SEXAGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

Quito D. M., 14 de agosto de 2026

Oficio No. CD-CJP-IMRE-002-2026

Asunto: Solicitud de certificación de no poseer sanciones disciplinarias.

Señora doctora:

Gisela Irujes Chamorro

Directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, ámbito disciplinario

Ciudad.-

De mi consideración:

Yo, Inés Maritza Romero Estévez, titular de la cédula de ciudadanía No. [REDACTED] solicito que, en el ámbito de sus competencias, se sirva certificar si el Consejo de la Judicatura ha sancionado disciplinariamente a la suscrita Jueza de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha desde la fecha de mi nombramiento en el año 2014 hasta la presente fecha.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en la cuenta de correo electrónico: romeroim1@hotmail.com.

Atentamente,

[REDACTED]
Dra. Inés Maritza Romero Estévez

Jueza de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha



Marco Tardío
14/08/2026 12:35
MF

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la (s) fotocopia (s) que antecede (n), que me fue (ron) presentadas en 01 foja(s) útil(es), es (son) **FIEL COPIA** del documento presentado ante mí, Dra. María Escobar M., Notaria Sexagésima Quinta Suplente del Cantón Quito, el

Guillermo El 25 AGO. 2026
Ab. María Augusta Escobar Montenegro
NOTARÍA SEXAGÉSIMA QUINTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICACIÓN

En atención a la solicitud realizada mediante Oficio No. CD-CJP-IMRE-004-2026 por la Dra. Ines Maritza Romero Estévez que en su parte pertinente señala "...una certificación clara y precisa en la que se haga constar si el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernandez, titular de la cédula de ciudadanía No. [REDACTED] ha presentado denuncia disciplinaria por mis actuaciones jurisdiccionales dentro de la causa judicial No. 17203-2024-00524; y, de ser el caso, certificar el estado procesal en el que se encuentra..."

Por lo que una vez revisado el sistema SATJE de Quejas de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pichincha en el Ámbito Disciplinario, así como la matriz general de ingresos, no se verifica que existan denuncias presentadas por el abogado Carlos Gustavo Bravo Hernandez en contra de la doctora Ines Maritza Romero Estévez, por la causa judicial 17203-2024-00524, hasta la presente fecha.

Cabe indicar que la información ha sido corroborada de acuerdo a la documentación constante que reposa en el sistema SATJE-QUEJAS y la matriz general de ingresos, a las cuales me remitiré en caso de ser necesario. Certifico.-

D.M. de la ciudad de Quito, 18 de agosto de 2026

EMILY YOBASKA
CARLOSAMA
MADERA

Firmado digitalmente
por EMILY YOBASKA
CARLOSAMA MADERA
Fecha: 2026.08.18
13:53:26 -05'00'

Ab. Emily Carlosama Madera
Secretaria Ad-Hoc de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, en
el Ámbito Disciplinario

*RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que el documento que en 01 folia(s) antecede, es certificación de documento MATERIALIZADO ante mí, el"



25 AGO 2026
Ab. Maria Augusta Escobar Montenegro
NOTARIA SEXAGESIMA QUINTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO
20 26 1701065





CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

Secretaría de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Corrupción, Tránsito y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia.

0000 0057

-875-

ochocientos
setenta
y cinco



Oficio No.1902-SSPPMPPTC-~~CY~~CO-~~CNJ~~-2026
Quito, 05 de mayo de 2026

Señora Doctora
Isabel Garrido Cisneros
SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
En su despacho.

En atención al Oficio 738-SG-CNJ-SFN-2026 de fecha 24 de abril, en el que, mediante oficio 460-MXRR-P-CNJ-2025, emitido por el señor doctor Marco Rodríguez Ruíz, Presidente Encargado de la Corte Nacional de Justicia, se solicita proporcionar información solicitada mediante oficio CNJ-001-2026-IMRE, de fecha 09 de marzo del año en curso. Al respecto, me permito informar que, de acuerdo a los registros físicos y digitales de esta Sala, la señora doctora Inés Maritza Romero Estévez, Jueza de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Corrupción, Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, no registra ninguna Declaración Jurisdiccional Previa por dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable en su contra.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente

Dr. Carlos Rodríguez García

SECRETARIO RELATOR DE LA SALA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL, TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.

RAZÓN: De conformidad con el artículo 175 de la Ley Notarial, DOY FE que la fotocopia (s) que antecede (n), que me fue (ron) presentada(s) en folia(s) útil(es), es (son) FIEL(COPIA) del documento presentado ante mí, Notario Sexagésimo Quinto del Cantón Quito, 201717010650.

25 AGO 2026



Ab. María Augusta Escobar Montenegro
NOTARIA SEXAGÉSIMA QUINTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO



18 AGO 2026

Dr. Pedro Castro Falconi
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO EN

Quito a, 05 de Mayo de 2026

A las: 10:40

Anexos:



0000

0058



-876-
ochocientos
sesenta y
seis.

CERTIFICACIÓN

En atención a la solicitud realizada y una vez revisado el sistema SATJE de Quejas de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pichincha en el Ámbito Disciplinario, se desprende que **ROMERO ESTEVEZ INES MARITZA, NO** registra sanciones administrativas impuestas por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha en el Ámbito Disciplinario, hasta la emisión de esta certificación.

Cabe indicar que la información ha sido corroborada de acuerdo a la documentación constante que reposa en el sistema SATJE-QUEJAS. Certifico.-

D.M. de la ciudad de Quito, 18 de agosto de 2026

EMILY YOBASKA
CARLOSAMA
MADERA

Firmado digitalmente
por EMILY YOBASKA
CARLOSAMA MADERA
Fecha: 2026.08.18
17:35:06 -05'00'

Ab. Emily Carlosama Madera
Secretaria Ad-Hoc de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, en
el Ámbito Disciplinario

"RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que el documento que en 01 foja(s) antecede, es certificación de documento MATERIALIZADO ante mí, el"



25 AGO 2026
Ab. María Augusta Escobar Montenegro
NOTARIA SEXAGESIMA QUINTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO
20 26 1701065

CERTIFICACIÓN

En atención a sus escritos de 13 y 14 de agosto de 2026, signados con los números de trámite CJ-EXT-2026-12914 y CJ-EXT-2026-13030, por medio del presente me permito señalar que revisada la información de los archivos del sistema de registro computarizado y del Sistema Automático de Trámite Judicial de esta Subdirección, no constan sanciones impuestas por la Dirección General y el Pleno del Consejo de la Judicatura en contra de la DOCTORA INÉS MARITZA ROMERO ESTEVEZ.

Se deja constancia de que la presente certificación se basa en la información y documentación entregada por la administración anterior, sobre la cual se ha venido alimentando la base de datos del registro de sanciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y se confiere sin perjuicio de la información que repose en las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura. Certifico.-

Quito, 17 de agosto de 2026.

MARIA JOSE
MONCAYO
VILLAVICENCIO

Firmado digitalmente por
MARIA JOSE MONCAYO
VILLAVICENCIO
Fecha: 2026.08.17
12:36:17 -05'00'

Mgtr. María José Moncayo Villavicencio

**SECRETARIA ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION NACIONAL
DE CONTROL DISCIPLINARIO-CONSEJO DE LA JUDICATURA**

"RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que el documento que en 01 foja(s) antecede, es certificación de documento MATERIALIZADO ante mí, el"



25 AGO 2026

Ab. María Augusta Escobar Montenegro
NOTARIA SEXAGESIMA QUINTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO
20 261701065 002689

**IMPUGNACIÓN CIUDADANA EN CONTRA DE INÉS MARITZA ROMERO
ESTÉVEZ**

Señores. -

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. -

**MIEMBROS DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE SELECCIÓN DE LA PRIMERA
AUTORIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DEL ECUADOR. -**

**1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA NATURAL O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA
IMPUGNACIÓN. -**

Mis nombres y apellidos son Carlos Gustavo Bravo Hernández, con C.C. [REDACTED] de profesión abogado magister en derecho procesal penal y litigación oral, domiciliado en la ciudad de Quito, haciendo uso de mi derecho de participación ciudadana y control social, establecido en la Constitución de la República del Ecuador, así como en lo determinado en el Capítulo IV de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-011-E-2025-0189, de fecha 25 de Junio del 2025, en la que consta la Codificación del Reglamento para el Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Fiscalía General del Estado, en forma respetuosa comparezco y digo:

**2. COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA NATURAL O
NOMBRIAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN
QUE PRESENTA LA IMPUGNACIÓN. -**

Adjunto la copia de mi cédula de identidad y mi credencial de abogado para cumplimiento de los fines legales pertinentes.

**3. NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE CONTRA QUIEN SE DIRIGE
LA IMPUGNACIÓN. -**

Esta impugnación la realizo en contra de la Doctora Inés Maritza Romero Estévez, con cédula de identidad No. [REDACTED] quien actualmente está postulando al cargo de Fiscal General de Estado dentro del Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Fiscalía General del Estado.



4.1. DESCRIPCIÓN CLARA DE LA IMPUGNACIÓN Y FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO QUE DETERMINE QUE EL POSTULANTE SE ENCUENTRA INMERSO EN LAS CAUSALES DE IMPUGNACIÓN No. 1. –

FUNDAMENTOS DE HECHO. –

Dentro de la causa No. 17283-2025-01455, le solicité a la parte impugnada que al amparo del artículo 572 numeral 8 del COIP se excusase de conocer la causa, en razón de nuestra enemistad manifiesta y la jueza se excusó en derecho.

La enemistad manifiesta nace por cuanto la parte impugnada me inició denuncias penales luego de que le gané la impugnación en el concurso que designaba la primera autoridad de la Defensoría Pública en la que ella fue postulante y la descalificaron por mi impugnación.

Como ya se excusó en una causa, la parte impugnada debe en derecho excusarse de conocer y resolver cualquier causa en la que yo sea abogado de cualquiera de las partes procesales o abogado de alguna parte procesal o sujeto procesal.

Por lo anterior, dentro de la causa No. 17203-2024-00524, le solicité lo mismo, que se excusase de conocer y resolver una recusación por la enemistad manifiesta que tenemos y lo hice al amparo del artículo 22 numeral 11 del COGEP que dice: “Causas de excusa o recusación. Son causas de excusa o recusación de la o del juzgador: (...) Tener con alguna de las partes o sus defensores amistad íntima o enemistad manifiesta.”; y a pesar de que por ley debía excusarse de conocer y resolver el proceso de recusación no lo hizo, yéndose contra norma expresa.

Lo grave es que se excusó en un primer proceso y en un segundo no lo hizo; yo no entendía porque razón se excusaba en uno y en otro no por lo que me puse a indagar y observé que dentro del proceso 17203-2024-00524, la jueza ponente doctora Pacheco y doctor Navarrete tenían ya un proyecto de Resolución y la parte impugnada les indicó que iba a realizar un voto salvado pero luego de correos electrónicos institucionales del tribunal conformado por los doctores Pacheco, Navarrete y Romero parte impugnada se desprende que la doctora Romero estaba sugiriendo a los doctores Pacheco y Navarrete cambiar de criterio, lo que demostraría intereses ocultos en el proceso por parte de la jueza Romero.

Y lo digo por dos situaciones puntuales; la primera es que no se excusó de conocer la causa que yo patrocinaba debiendo por ley hacerlo y no se excusó

porque al parecer de los correos electrónicos institucionales que se enviaban los miembros del Tribunal se entendería que la doctora Romero tendría interés en la causa, por eso no se excusó.

Pero no solo que no se excusó de conocer y resolver el proceso de recusación, sino que en la Resolución de recusación la parte impugnada ordenó a la fiscalía que se me inicien varias investigaciones penales y ofició al Consejo de la Judicatura para que me sancionen.

Por las consideraciones expuestas, la jueza y parte impugnada en esta causa, se excusa de conocer una causas en las que yo intervengo y en otras cambia de criterio, y el interés que tenía en la causa se demuestra por cuanto luego de no excusarse, levantó la sentencia venida en grado y concedió sentencia favorable para la accionante, es decir, hizo lo que sugirió a los otros dos miembros del tribunal, lo que demuestra no solo una falta de probidad para ser Fiscal General sino también una falta de probidad para ser jueza.

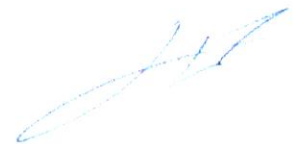
FUNDAMENTOS DE DERECHO PARA MIS TRES ARGUMENTOS. –

Fundamento esta impugnación en lo que dispone en el numeral 2 del artículo 46, 19 y 3 de la Codificación del Reglamento para el Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Fiscalía General del Estado, que corresponde a la falta de idoneidad y probidad para el ejercicio de este cargo.

5. DOCUMENTOS PROBATORIOS EN ORIGINALES O COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS. –

Adjunto copias certificadas del Proceso No. 17203-2024-00524 en 5 cuerpos; adjunto copias certificadas de la investigación previa No. 170101824092341 en un cuerpo; materialización de la sentencia del proceso No. 17203-2024-00524, realizado en la Notaria 82 mediante diligencia No. 20261701082C01373; y resolución firmada electrónicamente de excusa del proceso No. 17283202501455.

6. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, FECHA, Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD. -



Notificaciones que correspondan las recibiré en el correo electrónico

7. PRETENSIÓN. -

Que se declare que la postulante no cumple con el requisito de probidad notoria e idoneidad exigido para continuar participando en el concurso para Fiscal General del Estado y sea descalificada, esto lo solicito amparado en el Art. 48 de la Codificación del Reglamento para el Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y designación de la Primera Autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Firmo,

Carlos Gustavo Bravo Hernández
C.C.

 **CONSEJO DE PARTICIPACION
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL**

SECRETARIA GENERAL

Recibido Por: Jonathan Zambrano

Fecha: 31/07/2026 Hora: 14:08

Hojas Anexas: -486Fojas-

Firma: [Firma]